DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MNP
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

4 INFORME ANUAL 2025
MNP BOLIVIA

MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Todas y todos somos
Defensores del Pueblo

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

4 INFORME ANUAL 2025 MNP BOLIVIA

Todas y todos somos
Defensores del Pueblo

INFORME ANUAL 2025 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Autoridad:
Pedro Francisco Callisaya Aro
Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia

Elaborado por:
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura - MNP Bolivia

Edición, corrección de estilo y diseño:
Delegación Defensorial Adjunta para la Promoción de Derechos Humanos y Cultura de Paz

© Defensoría del Pueblo
Oficina Central: Calle Colombia N° 440 – Zona San Pedro
Teléfonos (2) 2113600 – 2112600
Casilla Postal Nro 791

https://www.defensoria.gob.bo/
La Paz - Bolivia

Se permite la reproducción total o parcial de la información aquí publicada, siempre que no sea alterada y se asignen los créditos correspondientes.

Esta publicación es de distribución gratuita.

2026

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESOLUCION DEFENSORIAL Nº DP/MNP/001/2026
LA PAZ 10 DE AGOSTO DE 2026

VISTOS

El Cuarto Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, que describe las acciones realizadas durante la gestión 2025.

CONSIDERANDO

Que, el parágrafo 1 del artículo 218 de la Constitución Política del Estado, dispone que la Defensoría del Pueblo velará por la vigencia promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales.

Que, el numeral 5 del artículo 222 de la misma norma fundamental, faculta a la Defensoría del Pueblo la atribución de "*Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales, y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y medidas a todos los órganos e instituciones del Estado, y emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a dichas formulaciones*"

Que, el parágrafo I del artículo 2 de la ley No 1397 de 29 de septiembre de 2021, modificatorio del articulo 3 de la Ley Nº 870 de 13 de diciembre de 2016, establece que la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia ha sido designada como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes de la Organización de Naciones Unidas.

Que, el artículo 1 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes ratificado por Ley Nº 3298 de 12 de diciembre de 2005, establece un sistema de visitas periódicas a cargo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a lugares de privación de libertad con el fin de prevenir hechos de tortura. Además, el artículo 22 del mismo instrumento legal determina que: "***Las autoridades competentes del Estado Parte interesado examinarán las recomendaciones del mecanismo nacional de prevención y entablarán un diálogo con este mecanismo acerca de las posibles medidas de aplicación***"

DESPACHO V°B° P.F.C.A. DEFENSOR DEL PUEBLO

Que, mediante Resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional R.A.L.P Nº 022/2021-2022 de 27 de septiembre de 2022, la Asamblea Legislativa Plurinacional, designó a Pedro Francisco Callisaya Aro como Defensor de Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia y por lo tanto titular del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

POR TANTO:

El Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia y titular del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Constitución Política del Estado y la Ley Nº 870 de 13 de diciembre de 2016, modificada por la Ley Nº 1397 de 29 de septiembre de 2021, que designa a la entidad defensorial como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura,

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar el Informe titulado "INFORME ANUAL 2025 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA"

SEGUNDO: Notificar a las autoridades competentes señaladas en las recomendaciones contenidas en el señalado Informe, para que puedan pronunciarse en el plazo de 30 días de su legal notificación de acuerdo a las previsiones del parágrafo III del artículo 24 de la Ley Nº 870 de 13 de diciembre de 2016.

TERCERO: De acuerdo a las previsiones del artículo 22 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes ratificado por Ley Nº 3298 de 12 de diciembre de 2005, las autoridades notificadas deberán entablar un **DIÁLOGO CONSTRUCTIVO** con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría de Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia mediante mecanismos a ser concertados con el mismo, para adoptar las medidas conducentes a cumplir las recomendaciones señaladas.

Regístrese y archívese

Pedro Francisco Callisaya Aro
DEFENSOR DEL PUEBLO
MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

PRESENTACIÓN

El presente documento constituye el reporte de la cuarta gestión de funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP-Bolivia) bajo el amparo de la Defensoría del Pueblo, cumpliendo con el mandato de la Ley N° 1397 y los compromisos internacionales derivados del OPCAT. Durante el año 2025, el Mecanismo ha profundizado su labor preventiva a través de una metodología que trasciende lo estadístico para captar la vivencia cotidiana del encierro en más de una treintena de recintos penitenciarios urbanos y rurales.

Un avance fundamental de este periodo fue el acompañamiento técnico al Proyecto de Ley N° 080/2023-2024 "Ley Integral para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Tortura", el cual fue aprobado en grande por la Cámara de Diputados el 20 de octubre de 2025. A nivel operativo, se destaca la aplicación de 2.100 encuestas anónimas a personas privadas de libertad (PPL), herramienta que ha permitido identificar deficiencias estructurales en servicios básicos, higiene y la lentitud del sistema judicial. Asimismo, en coordinación con la UNODC, se logró la instalación de banners informativos sobre salvaguardias legales en 120 celdas policiales de los nueve departamentos del país.

El seguimiento a las 15 recomendaciones emitidas en la gestión 2024 revela un panorama mixto respecto a la voluntad institucional. Si bien se constata el cumplimiento de siete recomendaciones clave, especialmente por parte de la Asamblea Legislativa y la Policía Boliviana, persiste una preocupante falta de respuesta por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y un incumplimiento sistémico de las entidades territoriales autónomas en cuanto al deber de informar.

El monitoreo in situ durante 2025 ha confirmado la agudización de problemas estructurales: Hacinamiento Extremo: La población penal alcanzó los 33.058 internos, un incremento del 100% respecto a 2020. Crisis Alimentaria: Se reportan retrasos de hasta cinco meses en el pago de prediarios en departamentos como La Paz, Chuquisaca y Beni, sumado a la insuficiencia del monto de Bs 8 por persona.

Por otra parte, un "Colapso Sanitario" debido a fallas en la infraestructura de alcantarillado y pozos sépticos en diversos penales se encuentra en estado crítico.

En materia de gestión de datos, el MNP ha consolidado su Sistema Informático, logrando el mapeo de 531 lugares de privación de libertad a nivel nacional, lo que permite un seguimiento georreferenciado y estadístico de las visitas y recomendaciones. En el ámbito internacional, el 31 de marzo de 2025 se suscribió un Acuerdo Marco de Colaboración con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) de Argentina, fortaleciendo las redes regionales de protección.

Este informe no solo es un registro de actividades, sino un llamado urgente a la acción interinstitucional para revertir las condiciones de trato cruel y degradante que aún persisten en los centros de custodia del Estado boliviano, por ello la Defensoría del Pueblo en su papel de Mecanismo Nacional de Prevención, continuara con su trabajo denodado para revertir problemas estructurales que afectan los derechos de personas privadas de libertad en diversos centros penales y no penales de detención.

PEDRO FRANCISCO CALLISAYA ARO
DEFENSOR DEL PUEBLO
TITULAR DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



Dr. Pedro Francisco Callisaya Aro
Defensor del Pueblo

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MNP

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

ÍNDICE

PRESENTACIÓN **5**
ACRÓNIMOS **11**
I. INTRODUCCIÓN **13**
1.1. Presentación institucional y mandato preventivo según la Ley N° 1397 y el OPCAT 13
1.2. Marco normativo nacional e internacional aplicable 14
II. FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN OPERATIVA DEL MNP **19**
2.1. Organización interna 19
2.2. Métodos de trabajo, buenas prácticas y fortalecimiento de capacidades del personal 19
III. RESULTADOS DEL DIÁLOGO CONSTRUCTIVO CON EL ESTADO **27**
3.1. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 27
3.2. Estado de situación de recomendaciones: Cumplidas, parciales e incumplidas 34
3.3. Obstáculos identificados en la implementación de políticas estatales 36
IV. SITUACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD Y EN CUSTODIA DEL ESTADO **41**
4.1. Centros penitenciarios 41
4.2. Centros de Reintegración Social 62
4.3. Celdas policiales 63
4.4. Cuarteles 65
4.5. Centros de acogimiento 67
4.6. Otras poblaciones vulnerables 70
V. ANÁLISIS DE EJES TEMÁTICOS Y POBLACIONES EN VULNERABILIDAD AGRAVADA **75**
5.1. Mujeres en Prisión: Enfoque de género, delitos de la Ley 1008, maternidad y niños acompañantes en Bolivia 75
5.2. Población juvenil 80
5.3. Problemas estructurales que atraviesan los privados de libertad 82
VI. PREVENCIÓN DE LA IMPUNIDAD Y ATRIBUCIONES ADICIONALES **93**
6.1. Monitoreo de casos por tortura y malos tratos en el Sistema de Servicio al Pueblo (SSP) 93
6.2. Análisis de procesos penales por tortura y obstáculos judiciales 93
6.3. Implementación de los Protocolos de Estambul y Minnesota 94
6.4. Sistema de Información del MNP e interoperabilidad de datos 95
6.5. Cooperación internacional y redes regionales 107
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES **110**
7.1. Tabla de Recomendaciones realizadas en los informes 2022 – 2024 del Mecanismo Nacional de Prevención 112
7.2. Recomendaciones específicas dirigidas a los Órganos del Estado y Entidades Territoriales Autónomas - Gestión 2025 116





ACRÓNIMOS

ALP	Asamblea Legislativa Plurinacional
BTH	Bachillerato Técnico Humanístico
CEA	Centros de Educación Alternativa
CIDJ	Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes
CNPT	Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (de Argentina)
COF	Centro de Orientación Femenino
CRS	Centros de Reintegración Social (destinados a adolescentes en conflicto con la ley)
CUD	Código Único de Caso (identificador en procesos penales)
DGRP	Dirección General de Régimen Penitenciario
DIPROVE	Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos
DNA	Defensoría de la Niñez y Adolescencia
DP	Defensoría del Pueblo
EPI	Estación Policial Integral
FATESCIPOL	Facultad Técnica Superior de Ciencias Policiales
FELCC	Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
FELCN	Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
GAD	Gobierno Autónomo Departamental
IDAI	Instituto de Adaptación Infantil
IDH:	Impuesto Directo a los Hidrocarburos
IDIF	Instituto de Investigaciones Forenses
INDH	Institución Nacional de Derechos Humanos
MNP	Mecanismo Nacional de Prevención
MNP-Bolivia	Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Estado Plurinacional de Bolivia
NNA	Niñas, Niños y Adolescentes

OPCAT	Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (por sus siglas en inglés)
PAM	Personas Adultas Mayores
PIEM	Plan Individual de Ejecución de Medidas (para adolescentes)
PPL	Persona(s) Privada(s) de Libertad
SEDEGES	Servicio Departamental de Gestión Social
SEDEPOS	Servicio Departamental de Políticas Sociales
SEPDEP	Servicio Plurinacional de Defensa Pública
SEPDAVI	Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima
SEPRET	Servicio para la Prevención de la Tortura (instancia predecesora del MNP)
SPCC	Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias
SPT	Subcomité para la Prevención de la Tortura (de las Naciones Unidas)
SSP	Sistema de Servicio al Pueblo (de la Defensoría del Pueblo).
SUS	Sistema Único de Salud
TCID	Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes
UNODC	Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación institucional y mandato preventivo según la Ley N° 1397 y el OPCAT

La Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia es una institución creada por mandato constitucional cuya función es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. Sus funciones alcanzan a la actividad administrativa de todo el sector público y a la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos.

Con la promulgación de la Ley N° 1397 de 29 de septiembre de 2021 se inicia una nueva etapa institucional al designarse a la Defensoría del Pueblo como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Estado Plurinacional de Bolivia (MNP-Bolivia). Esta ley entró en vigencia el 1 de noviembre de 2021, e inmediatamente se realizaron los ajustes institucionales necesarios para el cumplimiento de las nuevas atribuciones defensoriales. En enero de 2022, se inicia oficialmente el trabajo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Para entender el nuevo rol de la Defensoría del Pueblo, es necesario conocer que el origen un Mecanismo Nacional de Prevención.

En 1987 se suscribe en el seno de la Organización de Naciones Unidas, la *Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes*[1] (en adelante la Convención) que establece como obligación de sus Estados Partes el tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir actos de tortura en todo el territorio bajo su jurisdicción.

La Convención se centra principalmente en prohibir y sancionar la tortura después de que ocurre. Es decir, obliga a los Estados a castigar a los responsables y a adoptar medidas legales. Sin embargo, con el tiempo se vio que esto no bastaba, porque la tortura muchas veces ocurre en lugares cerrados (como cárceles, comisarías o centros de detención) donde hay poca supervisión externa.

1 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984. Entrada en vigor: 26 de junio de 1987. Ratificado por Bolivia mediante Ley N° 1939 de 10 de febrero de 1999.

Por esa razón el 2006 entra en vigor el *Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes*[2] (en adelante el Protocolo Facultativo), que establece un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentran personas privadas de su libertad, y obliga a cada Estado Parte a establecer, designar o mantener, a nivel nacional, uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El Protocolo facultativo, introduce un enfoque preventivo. En lugar de actuar solo después de que ocurra la tortura, busca evitar que suceda mediante vigilancia constante. Establece la obligación de que los Estados creen Mecanismos Nacionales de Prevención (MNP), que son órganos independientes encargados de visitar regularmente lugares de detención; también crea el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), que puede realizar visitas a los países para evaluar condiciones y hacer recomendaciones.

Todas estas acciones tienen por fin mostrar que la falta de transparencia es uno de los factores que facilitan abusos. Las visitas periódicas ayudan a generar control, rendición de cuentas y mejores condiciones.

Estos tratados internacionales de la Organización de Naciones Unidas son la base jurídica que origina la obligación de todos los Estados Partes, entre ellos Bolivia, de contar con un mecanismo nacional de prevención, y establecen su mandato y facultades. Entonces, si bien los mecanismos son de carácter nacional, están vinculados a la norma jurídica de derecho internacional.

En Bolivia, al haberse designado a la Defensoría del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se ha adicionado a las atribuciones tradicionales que contaba como Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), las atribuciones de un Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), por lo que este último pasó a ser una modalidad más de actuación de la Defensoría del Pueblo.

1.2. Marco normativo nacional e internacional aplicable

El accionar del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en el Estado Plurinacional de Bolivia se sustenta en un amplio marco normativo internacional y nacional que establece la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como la obligación de los Estados de adoptar medidas efectivas para su prevención, investigación y sanción.

En el ámbito internacional, la prohibición de la tortura constituye una norma imperativa del derecho internacional de los derechos humanos (*ius cogens*), reconocida en diversos instrumentos universales y regionales. En ese sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que "nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes"[3], constituyéndose en uno de los pilares fundamentales del sistema internacional de protección de derechos humanos.

2 Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 77/199, de 18 de diciembre de 2002. Entrada en vigor: 22 de junio de 2006. Ratificado por Bolivia mediante Ley N° 3298 de 12 de diciembre de 2005.

3 Organización de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 5.

De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra la prohibición absoluta de la tortura en su artículo 7, reafirmando que esta no admite restricciones ni suspensiones bajo ninguna circunstancia[4]. En concordancia, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce en su artículo 5 el derecho a la integridad personal, prohibiendo la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluso en estados de excepción, conforme a lo dispuesto en su artículo 27[5].

A nivel regional comparado, otros instrumentos internacionales refuerzan esta prohibición, tales como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, que en su artículo 3 establece la prohibición absoluta de la tortura[6]; la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, que en su artículo 5 protege la dignidad humana y prohíbe tales prácticas[7]; y la Carta Árabe de Derechos Humanos, que en su artículo 8 reafirma la proscripción de la tortura en cualquier circunstancia[8].

Asimismo, el derecho internacional humanitario, a través de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, establece la prohibición de la tortura y otros tratos inhumanos en contextos de conflictos armados, garantizando la protección de las personas que no participan directamente en las hostilidades[9].

A nivel nacional, la Constitución Política del Estado garantiza el respeto a la dignidad humana y prohíbe toda forma de violencia, señalado en su artículo 15 "Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes"[10] mientras que el Código Penal boliviano sanciona el delito de tortura, establecido en su artículo 295 "Será sancionado con privación de libertad de seis meses a dos años, el funcionario que vejare, ordenare o permitiere vejar a un detenido. La pena será de privación de libertad de dos a cuatro años, si le infligiere cualquier especie de tormentos o torturas. Si éstas causaren lesiones, la pena será de privación de libertad de dos a seis años; y si causaren la muerte, se aplicará la pena de presidio de diez años."[11]

Asimismo, la Ley N° 870 del Defensor del Pueblo y la Ley N° 1397 consolidan el mandato institucional de la Defensoría del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en concordancia con los estándares internacionales.

En este contexto, el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, desarrolla su labor bajo un enfoque preventivo integral, orientado no solo a la identificación de actos de tortura, sino también a la detección de condiciones estructurales y prácticas institucionales que puedan generar entornos propicios para la vulneración de derechos humanos.

4 2.Organización de las Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 7.

5 Organización de los Estados Americanos. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 5 y 27.

6 Consejo de Europa. (1950). Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, art. 3.

7 Organización de la Unidad Africana. (1981). Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, art. 5.

8 Liga de los Estados Árabes. (2004). Carta Árabe de Derechos Humanos, art. 8.

9 Comité Internacional de la Cruz Roja. (1949). Convenios de Ginebra y Protocolos Adicionales.

10 Estado Plurinacional de Bolivia. (2009). Constitución Política del Estado, art. 15, parágrafo I.

11 Estado Plurinacional de Bolivia. (1972). Código Penal. Artículo 295.


MNP
Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura


ALTO
POLICIA
SEGURIDAD
PENITENCIARIA

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

II

FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN OPERATIVA DEL MNP

MNP
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Todas y todos somos
Defensores del Pueblo


THE STRONGEST


DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

II FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN OPERATIVA DEL MNP

2.1. Organización interna

El MNP-Bolivia un órgano independiente que forma parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Bolivia, cuenta con un equipo multidisciplinario a la cabeza de su titular el Defensor del Pueblo.

El funcionamiento interno se rige en base a su Reglamento aplicándose a las y los servidores públicos del MNP y, en lo que corresponda, a las o los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, en el marco del principio de complementariedad.

Como máxima autoridad, el Defensor del Pueblo ejerce la titularidad del MNP-Bolivia. Durante la gestión 2025, el nivel operativo, cuenta con ocho servidores públicos: cuatro cumplen funciones en la oficina nacional (Jefe de Unidad Nacional, un médico legal, un psicólogo forense y un abogado penalista) y los otros cuatro, de formación psicólogos, están distribuidos territorialmente en las ciudades de Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y Potosí.

Como lo establece el reglamento, el funcionamiento del Mecanismo dentro de la Defensoría del Pueblo para el cumplimiento de su mandato, coordina con las demás unidades organizacionales, Delegaciones Defensoriales Departamentales y Coordinaciones Regionales bajo el principio de coordinación y complementariedad, para maximizar el impacto de la defensa y promoción de los derechos humanos en el país.

2.2. Métodos de trabajo, buenas prácticas y fortalecimiento de capacidades del personal

El método de trabajo del MNP es preventivo, independiente y sistemático, basado en los estándares internacionales del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT), en ese marco realiza.

Visitas	Asesoramiento
El MNP-Bolivia organiza su planificación para realizar visitas periódicas, anunciadas y no anunciadas, a los lugares de privación de libertad, con el objetivo de prevenir la tortura y los malos tratos.	Esta función se centra principalmente en la propuesta de proyectos legislativos, lo cual incluye la elaboración de opiniones técnicas e informes con observaciones sobre la legislación vigente o sobre los proyectos de ley en la materia.

Educación	Cooperación
Se busca realizar acciones para la formación adecuada en materia de derechos humanos y la prohibición de la tortura: Examen de currículos académicas de los programas de pregrado y posgrado de las instituciones encargadas de la formación de policías, militares y otros servidores públicos involucrados en la custodia de personas privadas de libertad, para asegurar que se incluya la información sobre la prohibición de la tortura; Desarrollo de programas educativos, para la formación y capacitación de servidores públicos.	Esta función abarca la interacción mediante un diálogo constructivo con las autoridades del Estado y otras partes interesadas, así como la construcción de alianzas estratégicas tanto a nivel nacional como internacional.

La Defensoría del Pueblo en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y ratificar el Protocolo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (2005), cuenta con el objetivo un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en los que se encuentren personas privadas de libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes[12].

El término "visita" es entendido en un sentido amplio, para cubrir no sólo la visita al lugar de detención, sino también su preparación y seguimiento. Abarca la visita completa a un lugar de detención, así como visitas más enfocadas en la situación de determinados detenidos o en un problema, tema o incidente particular[13].

- Visitas preventivas

A través de estas visitas periódicas, que realizan los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura se busca identificar los riesgos que favorecen la aparición de la tortura y los malos tratos, en tal sentido se constituyen en acciones para evaluar e identificar los factores de riesgo asociados a la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, además de lograr identificar las condiciones de reclusión a nivel de salud, alimentación, y otros aspectos que pueden afectar o incidir en la vulneración de derechos de las personas que se encuentran bajo la custodia del Estado.

Las visitas preventivas efectuadas mediante el monitoreo a lugares de privación de libertad, centros de rehabilitación social, centros de acogida, centros psiquiátricos, y centros de formación militar y policial, con el objetivo de identificar la condición real de estos sitios y emitir recomendaciones al Estado para la mejora de las condiciones de la población que permanecen en estos centros.

12 Articulo 1 Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos y Degradantes.

13 Monitoreo de lugares de detención Guía práctica. file:///F:/PDF%20MNP/Monitoring%20.

En tal sentido el MNP cuenta con diferentes tipos de visitas[14] a lugares de detención:

Visitas reactivas	Tienen el objetivo de atender **denuncias o quejas** específicas de una o varias personas, familiares, ONGS, medios de comunicación u otras unidades y áreas sustantivas de la Defensoría del Pueblo. Estas visitas no forman parte del plan de visitas del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Visitas ad hoc	Tienen el objetivo de responder a una situación de **emergencia**, tales como incendios, huelgas o motines en centros de detención u otros de competencia del MNP, buscando investigar las causas estructurales que ocasionaron las mismas para fortalecerla prevención de los mismos. Estas tampoco se consideran parte del plan de visitas.
Visitas temáticas	Tienen la finalidad de examinar problemáticas específicas, tales como procedimientos de requisa, uso del aislamiento en centros de detención y medios de contención en instituciones psiquiátricas, Las problemáticas son elegidas después de quejas recurrentes identificadas o no, por el propio MNP, o por otras instancias de la Defensoría del Pueblo, denuncias de ONG y los medios de comunicación.
Visitas de seguimiento	Su objetivo es verificar si las recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura o las recomendaciones del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), fueron implementadas. Estas visitas tienen corta duración y tienen objeto especifico, aunque pueden ser utilizadas para analizar otros aspectos observados.
Visitas en profundidad	Son de naturaleza preventiva y su objetivo es tener un entendimiento completo sobre el lugar visitado. Pueden durar varios días cuando se trata de instituciones grandes y deben cubrir un amplio rango de problemáticas, desde salvaguardas de procedimiento, alimentación, servicios de salud y en general sus condiciones de vida. Las visitas en profundidad pueden ser anunciadas o no anunciadas y se realizan por equipos interdisciplinarios, con una diversidad de experiencias y competencias.

- Herramientas de recolección de datos:

El Mecanismo Nacional de Prevención, dentro el monitoreo de las vistas a los diferentes lugares de privación de libertad, realiza entrevistas con las personas que son parte de los diferentes centros, respetando todos los protocolos con los que cuenta, como ser el contar con el respectivo consentimiento de los entrevistados, que el mismo se realice en un lugar privado, en reserva, etc. para lo cual aplica diferentes instrumentos en la recolección de información como son; las entrevistas semiestructuradas, encuestas anónimas y formularios de verificación in situ.

a) **Entrevista semiestructurada,** recolecta datos de los entrevistados a través de un conjunto de preguntas abiertas. Para recolectar información suficiente para entender el área de interés. Para realizar entrevistas semiestructuradas, el entrevistador dispone de un guion que recoge los temas que debe tratar a lo largo de la entrevista[15]. Esta modalidad cuenta con una guía de preguntas predefinidas, pero permiten flexibilidad para seguir temas emergentes

14 Defensoría del Pueblo. Reglamento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, versión 1

15 Tejero. J.M. 2021 Técnicas de investigación cualitativas en los ámbitos sanitarios y sociosanitarios.

durante la conversación con el entrevistado, constituyéndose en un instrumento cualitativo, considerado una entrevista en profundidad. Es así que, la entrevista semiestructurada como un instrumento de recolección de datos cualitativos permite una interacción directa entre el entrevistador y los diferentes actores, como son las personas en recintos penitenciarios, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, entre otros que se constituyen en una parte importante y efectiva a la hora de recopilar información pertinente para el análisis y la búsqueda de hallazgos en las visitas en profundidad como principal herramienta en la recolección de datos, que nos permiten cumplir con los objetivos planteados en este tipo de visitas.

b) **Encuestas anónimas,** las mismas están dirigidas a la población de los diferentes centros penales y no penales como podrían ser a personas privadas de libertad, conscriptos, alumnos en formación militar o policial, entre otros, estas pueden ser de carácter anónimas, con el objetivo de obtener información honesta y precisa sobre determinados aspectos, el anonimato elimina el temor a represalias que podrían derivar al momento de proporcionar cierta información solicitada.

La recogida de los datos se realiza a través de un cuestionario, instrumento de recogida de los datos (de medición) y la forma protocolaria de realizar las preguntas (cuadro de registro) que se administra a la población o una muestra extensa de ella mediante una entrevista donde es característico el anonimato del sujeto[16].

c) **Formularios de verificación in situ**, los mismos son instrumentos estructurados, que pueden ser físicas o digitales, que permite la obtención de información en el lugar, herramientas que en ocasiones son aplicadas dentro las vistas que se realizan como Mecanismo en los diferentes centros penales y no penales para verificar determinados aspectos, en muchas ocasiones los mismos son producto de denuncias. Estos formularios permiten capturar datos precisos y estandarizados directamente en el lugar de los hechos. Funcionan como herramientas esenciales para la observación, inspecciones técnicas, encuestas o auditorías, asegurando que la información sea consistente, organizada y fácil de analizar.[17] Los formularios son herramientas estructuradas (físicas o digitales) diseñadas para recopilar, registrar y organizar información específica de manera estandarizada y eficiente. Permiten capturar datos precisos, tales como datos personales, opiniones o registros, de forma sistemática para su posterior análisis, facilitando el cumplimiento de normas y la toma de decisiones basada en información.[18]

16 López-Roldan Metodología de investigación social cuantitativa. Capitulo II La Encuesta chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2016/163567/metinvsoccua_a2016_cap2-3.pdf

17 Se pude ver https://moreapp.com/es/soluciones/formularios-digitales

18 Se puede ver en https://www.questionpro.com/blog/es/que-es-un-formulario/

- **Enfoque interseccional y de género en el monitoreo.**

El MNP dentro el monitoreo permanente que viene realizando a los diferentes centros con diversas características, que incluyen recintos penitenciarios, centros de formación policial, militar, centros de acogida para NNA, PAM, entre otros, que dentro el rol preventivo debe considerar también aplicar un enfoque interseccional y de género, el mismo implica reconocer no solo las desigualdades sino también que están presentes otras categorías sociales como son la raza, etnias, edad, orientación sexual, capacidad, etc., aspectos que permiten que al momento de un monitoreo se visibilice otros contextos y realidades de poblaciones vulnerables para el ejercicio pleno de los derechos humanos.

El propósito del Enfoque basado en Derechos Humanos es analizar las desigualdades y corregir las prácticas discriminatorias, mediante el diseño y puesta en marcha de planes, políticas y procesos de desarrollo basados en un sistema de derechos y de los correspondientes deberes establecidos por el derecho internacional.[19]

En el sistema penitenciario se encuentran razones estructurales e históricas, por las cuales los derechos humanos no se respetan en toda su dimensión. La situación se agrava cuando la mirada escudriña los denominados "grupos vulnerables", que ya llegan a los centros penitenciarios con diversas problemáticas no atendidas por el Estado y la sociedad.[20]

En estos grupos, se dan casos de "interseccionalidad" donde coinciden varias categorías en forma simultánea, permitiendo la superposición de varios tipos de exclusiones y opresiones (más de una): identidad cultural, procedencia social, orientación sexual e identidad de género, edad, grado de instrucción educativa, discapacidad, entre otras, y los consecuentes actos de discriminación, menoscabo de derechos o segregación, en los que no se puede identificar solamente un motivo, sino que concurren varios motivos, en un solo sujeto.[21]

Por lo tanto, dentro el abordaje preventivo realizado por el MNP a través del monitoreo, el aplicar un enfoque interseccional observa que las condiciones de género, como aspectos de raza, etnias, grupos vulnerables, orientación sexual, como son adultos mayores, niñas, niños, discapacidad, entre otros, son aspectos que deben ser considerados, para una total comprensión de cómo las mismas se interrelacionan, y crean formas únicas de discriminación, o exclusión, por lo cual, dentro un abordaje de monitoreo se deben diseñar intervenciones y acciones con enfoque interseccional, y de derechos humanos, para sectores que en ocasiones son invisibilizados, para lo cual se hace necesario herramientas específicas que contemplen no solo el enfoque de género, sino también con un enfoque interseccional.

19 El enfoque basado en derechos humanos. Marcos conceptuales y principios rectores. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. http://derechoshumanosycooperacion.org/pdf/rhhm-03-el-ebdh.pdf.

20 Defensoría del Pueblo. Estudio Situacional del Sistema Penitenciario Boliviano Con Particular Referencia a Grupos Vulnerables.

21 Cfr. Ibid., pág. 21


DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO SEDE TRINIDAD


MNP

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

III

RESULTADOS DEL DIÁLOGO CONSTRUCTIVO CON EL ESTADO

MNP
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Todas y todos somos
Defensores del Pueblo


MNP
Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura


MNP
Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura

III RESULTADOS DEL DIÁLOGO CONSTRUCTIVO CON EL ESTADO

3.1. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones

Una de las principales funciones del MNP, es de realizar seguimiento a las recomendaciones que emite en sus informes, con el propósito de constatar el logro de mejoras y/o incidencia real para un adecuado trato y condiciones de las personas que se encuentran en los lugares de privación de libertad, a continuación, se desarrolla una descripción del seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones realizadas en el Informe Anual del MNP 2024:

RECOMENDACIONES A ENTIDADES NACIONALES		
ENTIDAD	**RECOMENDACIÓN**	**SEGUIMIENTO**
A la Cámara de Diputados Asamblea Legislativa Plurinacional	1. Continuar con el tratamiento del "Proyecto de Ley N° 080/2023-2024, Ley integral para prevenir, investigar, sancionar y reparar la Tortura y otros tratos o penas Crueles, Inhumanos o Degradantes", aprobado el 29 de octubre de 2024 por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia durante la 16° sesión ordinaria, Legislatura 2023 – 2024, en cumplimiento del artículo 7 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados.	A partir del seguimiento y la participación en reuniones técnicas con la Asamblea Legislativa Plurinacional, el proyecto de ley fue aprobado en grande por la Cámara de Diputados el 20 de octubre de 2025 durante su 194° sesión ordinaria de la legislatura 2024-2025. Se aclara que el citado proyecto de ley todavía contempla disposiciones contrarias al mandato del OPCAT por lo será necesario que, en la revisión en detalle del proyecto de Ley en la Cámara de Diputados, el MNP-Bolivia realiza gestiones para que la nueva norma respete el mandato preventivo del OPCAT. Para el cumplimiento de la recomendación referida a una nueva norma del MNP, el MNP-Bolivia ha solicitado el 13 de enero de 2026 a la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento de Bolivia), la reposición del Proyecto de Ley N° 080/2023-2024 C.S. "Ley integral para prevenir, investigar, sancionar y reparar la tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", norma que contiene un capítulo completo sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Bolivia.

RECOMENDACIONES A ENTIDADES NACIONALES		
ENTIDAD	**RECOMENDACIÓN**	**SEGUIMIENTO**
Al Tribunal Supremo de Justicia	2. Emitir una circular para Juezas y Jueces en materia de Niñez y Adolescencia a objeto de revisar y evaluar cada 6 meses las medidas socioeducativas impuestas a adolescentes privados de libertad en Centros de Reintegración Social para adolescentes, y realizar inspecciones periódicamente a estos centros para supervisar la situación y condiciones sociales y jurídicas de los adolescentes, en cumplimiento al artículo 38 numeral 14 de la Ley N° 025 del 24 de junio de 2010, del Órgano Judicial y al artículo 346 incisos c) y e) de la Ley N° 548 de 17 de Julio de 2014, Código Niña, Niño y Adolescente.	El Tribunal Supremo de Justicia, no se pronunció sobre la recomendación ni envió información al MNP, por lo que se continuará con el seguimiento y dialogo con dicha institución para el cumplimiento de esta recomendación.
Al Comando General de la Policía Boliviana	3. Informar a las personas arrestadas y/o aprehendidas en celdas policiales sobre sus derechos y salvaguardas a través de medios visibles (banners), en conformidad a lo establecido en el artículo 7 inciso a) y artículos 55 inciso c) de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana.	En el tercer trimestre el MNP con cooperación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y en coordinación con el Comando General de la Policía Boliviana, logró instalar banners informativos sobre salvaguardas legales fundamentales al momento del arresto o aprensión en total de 120 celdas policiales en los 9 departamentos de Bolivia.
A la Dirección General de Régimen Penitenciario	4. Ejecutar en la modalidad de trabajo centralizado, mejoras en la infraestructura de las "Celdas de castigo" de los centros penitenciarios recurriendo a la mano de obra de las personas privadas de libertad, que, de manera voluntaria, accedan a este tipo de trabajo, en aplicación del Decreto Supremo No 5251 de 16 de octubre de 2024 y articulo 183 numeral 1 de la Ley N° 2298 de 20 de diciembre de 2001, Ley de Ejecución Penal y Supervisión.	Pese al diálogo permanente con esa repartición, no se pronunció sobre la recomendación ni envió información al MNP, por lo que se continuará con el seguimiento y dialogo con dicha institución para el cumplimiento de esta recomendación.

RECOMENDACIONES A ENTIDADES NACIONALES		
ENTIDAD	**RECOMENDACIÓN**	**SEGUIMIENTO**
A la Dirección General de Régimen Penitenciario	5. Instruir a las Direcciones Departamentales del Régimen Penitenciario que el personal de salud de los centros penitenciarios realice la revisión médica periódica física y psicológica de las personas privadas de libertad sancionadas disciplinariamente en permanencia en solitario o en las "denominadas celdas de castigo", individual o colectiva, en conformidad a lo establecido por el artículo 135 de la Ley N° 2298 de 20 de diciembre de 2001, Ley de Ejecución Penal y Supervisión.	Mediante Nota CITE: MG/DGRP N° 2632/ALC N° 558/2025 de 21 de agosto de 2025, emitida por Lic. Juan Carlos Limpias Esprella, Director General de Régimen Penitenciario, hace conocer que: La administración Penitenciaria trabaja en cumplimiento de la Ley N° 2298, desempeñando funciones permanentes, en el control, supervisión y atención a la población penitenciaria, estas son realizadas a través del equipo multidisciplinario (Legal, Medico, Trabajo Social, Educativo y Psicología). A nivel Nacional se brinda atenciones médicas a toda la población penitenciaria, en el caso específico de los recintos penitenciarios, los médicos dan cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 2298, que ordena que a cada ingreso se le practica un examen médico para determinar su estado físico y mental, el cual es una atención básica y de urgencia, en medicina general. De igual manera, conforme la Ley N° 1152, se tiene el Sistema Único de Salud (SUS), mediante el cual no solo se garantiza la atención de salud de primer nivel al interior del centro penitenciario, sino también, externando algunos casos a establecimientos de salud de segundo y tercer nivel. Igualmente, el área de psicología, acorde a la Ley N° 2298 en su artículo 97° (Asistencia Psicológica), es la encargada de brindar la atención a la población penitenciaria, el cual está sujeta al Protocolo de servicio de asistencia; servicio que es registrado de los instrumentos o fichas de valoración psicológica que son aplicados a la población de ingresos nuevos, el cual se realiza el seguimiento y verificación de la información colectada. De igual manera, el 12 de septiembre de 2025 el entonces Ministro de Gobierno Roberto Ríos Sanjinés emite respuesta a requerimiento de información solicitado por la Defensoría del Pueblo, mediante CITE: MIN.GOB. DESP/N°1805/2025, en el cual señala Nota MG-DGRP N° 3041/ALC N° 648, emitida por la Dirección General de Régimen Penitenciario, señala: …. razón por la cual el equipo multidisciplinario (Legal, Médico, Psicológico, Educativo, Trabajo Social) realiza seguimiento permanente a la población penitenciaria que se encuentra por tiempos cortos en las áreas de contención y seguridad. Sin embargo, pese a la emisión de dichas notas, no se ha emitido un instructivo que garantice de manera efectiva, una atención médica y psicológica de las PPLs, en áreas de contención y permanencia solitaria.

RECOMENDACIONES A ENTIDADES NACIONALES		
ENTIDAD	**RECOMENDACIÓN**	**SEGUIMIENTO**
A la Dirección General de Régimen Penitenciario	6. Instruir a las Direcciones Departamentales del Régimen Penitenciario supervisar que las sanciones en permanencia en solitario o en las "denominadas celdas de castigo" cuenten con la respectiva resolución fundamentada y no sobrepasen el plazo máximo de 60 días, conforme lo establecido en los artículos 123 y 133 numeral 5 de la Ley N° 2298 de 20 diciembre 2001, Ley de Ejecución Penal y Supervisión.	El 12 de septiembre de 2025 el Ministro de Gobierno Sr. Roberto Ríos Sanjinés emite respuesta a requerimiento de información solicitado por la Defensoría del Pueblo, mediante CITE: MIN.GOB. – DESP/N°1805/2025, en el cual señala Nota MG-DGRP N° 3041/ALC No 648, emitida por la Dirección General de Régimen Penitenciario, señala: Los Recintos penitenciarios a nivel nacional, no cuentan con ambientes de aislamiento, sino que tiene espacios destinados a la contención y seguridad, para casos que se requieran y se sujeten al régimen disciplinario en conformidad a la Ley N° 2298 determinación que es atribución de los Directores; actos administrativos que son remitidos a la autoridad jurisdiccional, para que se pronuncie a través de una revocatoria, ratificación o modificación que da por ejecutoriada para su posterior ejecución; así mismo, se debe considerar que no existen medidas con carácter indefinido, en el marco de la protección de los derechos y garantías de las personas privadas de libertad, razón por la cual el equipo multidisciplinario (Legal, Médico, Psicológico, Educativo, Trabajo Social) realiza seguimiento permanente a la población penitenciaria que se encuentra por tiempos cortos en las áreas de contención y seguridad. Si bien, la información proporcionada por autoridades penitenciarias, refleja lo establecido en la norma, no responde de manera concreta la recomendación de emitir un instructivo, para garantizar que los internos cuenten con resolución y dicha sanción no exceda los 60 días.

RECOMENDACIONES A ENTIDADES NACIONALES		
ENTIDAD	**RECOMENDACIÓN**	**SEGUIMIENTO**
A la Dirección General de Régimen Penitenciario	7. Promover la formación y especialización del personal penitenciario y personal de seguridad penitenciaria en materia de derechos humanos y prevención de la tortura, en cumplimiento al artículo 48 numeral 5 y artículo 50 numeral 4 de la Ley N° 2298 de 20 de diciembre de 2001, Ley de Ejecución Penal y Supervisión.	El 10 de marzo de 2025 mediante CITE: N° 0636/2025 del Comandante General de la Policía Bolivia a.i. Gral. My. Augusto Juan Ruso Sandoval, dirigida a Pedro Callisaya Aro Defensor del Pueblo, remite el programa de capacitaciones denominado "PREVENCIÓN DE LA TORTURA, TRATOS CRUELES, DEGRADANTES E INHUMANOS, POLICIA BOLIVIANA – DEFENSORIA DEL PUEBLO" en constancia del cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales en cuanto al fortalecimiento de los conocimientos de los servidores públicos policiales. Posteriormente, la misma autoridad de la Policía Boliviana, mediante nota Sgral. Cmdo.Gral. CITE: N° 1654/2025, dirigida al Defensor del Pueblo, remite para conocimiento de esta institución la ejecución y participación de funcionarios públicos policiales pertenecientes a las Unidades Operativas de los nueve (9) Comandos Departamentales de la Policía Boliviana, del proceso de capacitación sobre prevención de la tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos, siendo un total de 3.897 efectivos policiales capacitados. El MNP ha tomado conocimiento del INSTRUCTIVO MG-DGRP N°124/2025 de 6 de octubre de 2025, emitido y firmado por Lic. Juan Carlos Limpias Esprella Director General de Régimen Penitenciario a.i. del Ministerio de Gobierno y el Cnl. DESP David Rodolfo Machicado Coela, Director Nacional de Seguridad Penitenciaria a.i. del Ministerio de Gobierno, el cual instruye a Directores Departamentales de Régimen Penitenciario y Directores de Recintos Penitenciarios (Para su obligatorio cumplimiento), realizar las siguientes acciones: Realizar curso de capacitación en materia de Derechos Humanos y mecanismos para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes, coordinando talleres de actuación constitucionales públicas o privadas, para que se brinde estos cursos para el personal policial y personal administrativo de la Administración penitenciaria. Es importante señalar que el personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, realizó los talleres para la capacitación de funcionarios públicos policiales solicitados por el Comando General de la Policía Boliviana

RECOMENDACIONES A ENTIDADES NACIONALES		
ENTIDAD	**RECOMENDACIÓN**	**SEGUIMIENTO**
Al servicio Plurinacional de Defensa Publica y la Dirección General de Régimen Penitenciario	15. Recibir, revisar y analizar el cumplimiento de los requisitos de las peticiones de amnistía o indulto para posteriormente ser remitidas a los juzgados y tribunales pertinentes, en sujeción al artículo 4, parágrafo V del Decreto Presidencial N° 5137 del 26 de marzo de 2025.	El 31 de marzo del 2025 la Defensoría del Pueblo desarrollo el programa radial, referido a los Alcances y Limites del Indulto y la Amnistía Penitenciaria con la participación del Defensor del Pueblo Pedro Francisco Callisaya Aro, el Director de la Dirección General de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias y Luis Tola, asesor legal del Servicio Plurinacional de Defensa Publica con el objeto de difundir los alcances del Decreto Presidencial a favor de las personas privadas de libertad a nivel nacional, asimismo, se recordó a estas autoridades, la necesidad de revisar y remitir a las instancias pertinentes las solicitudes de las PPLs sobre el Decreto Presidencial. Sin embargo, el 22 de septiembre de 2025, se emitió nuevo Decreto Presidencial N° 5460 de Indulto para personas privadas de libertad en centros penitenciarios, quedando abrogado el anterior Decreto Presidencial N° 5137, por lo cual la recomendación es inviable.

RECOMENDACIONES A ENTIDADES TERRITORIALES AUTONOMAS		
ENTIDAD	**RECOMENDACIÓN**	**SEGUIMIENTO**
A Gobiernos Autónomos Departamentales y Centros de Reintegración Social	8. Promover procesos de sensibilización sobre educación sexual integral para las y los adolescentes en los Centros de Reintegración Social, conforme a lo establecido en el artículo 334 inciso a) de la Ley N° 548 de 17 de julio de 2014, Código Niña, Niño y Adolescente.	Mediante nota GADLP/DGO/NEX-1474/2025 emitida por Santos Quispe Quispe Gobernador del Departamento de La Paz, en respuesta a la notificación CON RECOMENDACIONES DEL INFORME ANUAL 2024 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA, en la que indica el informe GADLP/SDDSC/ SEDEGES/DIR/UDAC/ CRSM/CRSV/ADM/INF-05/2025 emitido por la Lic. Beatriz Churata Mamani Directora Técnica Servicio Departamental de Gestión Social, en el cual señala en este punto: Se viene cumpliendo con esta recomendación a través del Subprograma de Salud Integral, a lo largo de la gestión se tienen programadas distintas capacitaciones en Educación Sexual integral dirigidas a las y los adolescentes de los Centros de Reintegración Social.
A Gobiernos Autónomos Departamentales	9. Garantizar que el personal de Centros de Reintegración Social sea especializado en la temática de adolescentes en conflicto con la Ley Penal, en cumplimiento al artículo 182 inciso d), artículo 335 y artículo 336 de la Ley N° 548 de 17 de julio de 2014, Código Niña, Niño y Adolescente.	Mediante nota GADLP/DGO/NEX-1474/2025 emitida por Santos Quispe Quispe Gobernador del Departamento de La Paz, en respuesta a la notificación CON RECOEMNDACIONES DEL INFORME ANUAL 2024 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA, en la que indica el informe GADLP/SDDSC/ SEDEGES/DIR/UDAC/ CRSM/CRSV/ADM/INF-05/2025, emitido por la Lic. Beatriz Churata Mamani Directora Técnica Servicio Departamental de Gestión Social, en el cual señala en este punto: Actualmente se cuenta con personal especializado en Sistema Penal para Adolescentes, y se tiene programado para la gestión, capacitaciones en actualización de normativa del Sistema Penal para Adolescentes dirigido al personal de ambos Centros de Reintegración Social.

RECOMENDACIONES A ENTIDADES TERRITORIALES AUTONOMAS		
ENTIDAD	**RECOMENDACIÓN**	**SEGUIMIENTO**
	10. Reorganizar los centros de acogimiento para niñas, niños y adolescentes separándolos por edad para prevenir hechos de violencia y malos tratos, en cumplimiento del artículo 182 incisos b) y m), artículo 183 inciso n) de la Ley N° 548 de 17 de julio de 2014, Código Niña, Niño y Adolescente	Mediante nota GADLP/DGO/NEX-1474/2025 emitida por Santos Quispe Quispe Gobernador del Departamento de La Paz, en respuesta a la notificación CON RECOEMNDACIONES DEL INFORME ANUAL 2024 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA, en la que indica el informe GADLP/SDDSC/ SEDEGES/DIR/UDAC/ CRSM/CRSV/ADM/INF-05/2025 emitido por la Lic. Beatriz Churata Mamani Directora Técnica Servicio Departamental de Gestión Social, en el cual señala en este punto: Actualmente se cuenta con Centros de Acogida de Niñas, niños y Adolescentes Públicos dependientes del Servicio Departamental de Gestión Social los cuales se encuentran diferenciados de acuerdo al grupo etario, donde se cuenta con: Centro de acogida “Niño Jesús” que acoge niñas y niños de 0 a 6 años de edad; Centro de Acogida José Soria que acoge a niñas y niños de 6 a 12 años de edad; y Centro de acogida Félix Méndez Arcos que acoge adolescentes varones de 12 a 18 años.
	11. Realizar la supervisión y control periódico y sin previo aviso, de las instalaciones, personal, alimentación, servicios básicos, educación, recreación, situación jurídica y visitas, en los centros de acogimiento para niñas, niños y adolescentes públicos, en cumplimiento al artículo 182 incisos d) y h) de la Ley N° 548 de 17 de julio de 2014, Código Niña, Niño y Adolescente.	Mediante nota GADLP/DGO/NEX-1474/2025 emitida por Santos Quispe Quispe Gobernador del Departamento de La Paz, en respuesta a la notificación CON RECOEMNDACIONES DEL INFORME ANUAL 2024 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA, en la que indica el informe GADLP/SDDSC/ SEDEGES/DIR/UDAC/ CRSM/CRSV/ADM/INF-05/2025 emitido por la Lic. Beatriz Churata Mamani Directora Técnica Servicio Departamental de Gestión Social, en el cual señala en este punto: A través de la Unidad de Administrativa de Centros, dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social, se realizan las supervisiones a los Centros de Acogida de Niñas, Niños y Adolescentes Públicos dependientes del Servicio Departamental de Gestión Social, supervisiones programadas cada 2 meses, y realizadas de manera sorpresiva.
A los Gobiernos Autónomos Departamentales de Cochabamba y Pando	12. Dotar de servicio de Internet a los Centros de Rehabilitación Social de mujeres en Cochabamba y varones en Pando a objeto de promover actividades académicas, en cumplimiento de los artículos 80 numeral 1, inciso a) de la Ley N° 070 de 20 de diciembre de 2010, de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” y 334 inciso a) de la Ley N° 548 de 17 de julio de 2014, Código Niña, Niño y Adolescente	El 13 de agosto de 2025, el MNP realizó visita de seguimiento al Centro de Reintegración Social “Villa Rojas” del Departamento de Pando, con el objetivo de realizar observaciones a las recomendaciones emitidas en el Informe Anual 2024, realizando entrevista con la Dra. Madeline Melena Araos, administradora del Centro, con la cual se realizó la verificación de las instalaciones, donde se pudo verificar que el centro no dispone del servicio de Internet. De igual manera por información emitida por personal de MNP de Cochabamba, informa que en el Centro de Reintegración Social “Cometa” de ese Departamento, sí cuenta con el servicio de internet, sin embargo, éste, es utilizado para la realización de audiencias virtuales y no así para fines académicos de los adolescentes internados.

RECOMENDACIONES A ENTIDADES TERRITORIALES AUTONOMAS		
ENTIDAD	**RECOMENDACIÓN**	**SEGUIMIENTO**
Al Gobierno Autónomo Departamental del Departamento de Pando	13. Adoptar las acciones pertinentes a través de la Instancia Técnica Departamental de Política Social en el Sistema Penal, para el mejoramiento de las condiciones del Centro de Rehabilitación Social de Villa Rojas Porvenir, respecto a la segregación de género, a la participación en actividades educativas, ocupacionales, terapéuticas, lúdicas, culturales y recreativas, así como al acceso al agua potable, en cumplimiento a los artículos 278, 334, 342 inciso b) y k) y 339 de la Ley N° 548 de 17 de julio de 2014, Código Niña, Niño y Adolescente.	El 13 de agosto de 2025, el MNP de la Tortura realizo visita de seguimiento al Centro de Reintegración Social "Villa Rojas" donde se pudo verificar que existen pabellones tanto para la población de varones como de mujeres (3 internas), así mismo, informó que todos los internos se encuentran estudiando y realizando actividades educativas, terapéuticas, lúdicas, culturales y recreativas. De igual manera, los profesionales del área médica, odontológica y psicológica realizan la atención de los adolescentes los días lunes y miércoles. Finalmente, se pudo verificar que el Centro de Reintegración cuenta y tiene acceso al agua potable de manera permanente.
Al Gobierno Autónomo Departamental del Departamento de Potosí	14. Dotar de un profesional médico al Centro de Reintegración Social (mujeres) para la atención y asistencia integral de las adolescentes, en cumplimiento a los artículos 281 numeral 3) y 335 de la Ley N° 548 de 17 de julio de 2014, Código Niña, Niño y Adolescente. Al Servicio Plurinacional de Defensa Pública y la Dirección General de Régimen Penitenciario.	El MNP, el 24 de julio de 2025, realizo visita de seguimiento al Centro de Reintegración Social "Nueva Esperanza" y "Nuevo Horizonte", con el propósito de verificar el cumplimiento a las recomendaciones emitidas en el Informe anual 2024, en ese sentido realizo la verificación de las instalaciones, además, de sostener una entrevista con el Sr. Jimmy Arias Urena, Administrador de ambos centros. El MNP pudo confirmar la atención integral de las (3 internas) y los adolescentes internados, contando con el equipo completo de profesionales, siendo que la atención del profesional médico la realiza cada dos días

3.2. Estado de situación de recomendaciones: Cumplidas, parciales e incumplidas

El este punto se desarrollará el estado de cumplimiento de las quince recomendaciones emitidas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) en su informe anual correspondiente a la gestión 2024. Dichas recomendaciones, como se vio en el cuadro anterior, fueron dirigidas a diversas instituciones del Estado boliviano con el propósito fundamental de fortalecer las garantías, la dignidad y las condiciones de vida de las Personas Privadas de Libertad (PPL).

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS:	**TOTAL: 7**	
Recomendación No 1:	Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional	
Recomendación No 3:	Comando General de la Policía Boliviana	
Recomendación No 7:	Dirección General de Régimen Penitenciario y a la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria	
Recomendaciones No 13 y No 14:	Gobernaciones Autónomas Departamentales de **Pando** y **Potosí**	
RECOMENDACIONES PARCIALMENTE CUMPLIDAS:	**TOTAL: 4**	
Recomendaciones No 5 y No 6:	La Dirección General de Régimen Penitenciario	
Recomendaciones No 8, No 9, No 10 y No 11:	Se emitieron cuatro recomendaciones de carácter general dirigidas a los Gobiernos Autónomos Departamentales de todo el país (). Sin embargo, únicamente se recibió respuesta del **Gobierno Autónomo Departamental de La Paz**	
	Lamentablemente, **ninguna otra Gobernación Autónoma Departamental (GAD)** remitió información alguna respecto a estas cuatro disposiciones.	
RECOMENDACIONES INCUMPLIDAS	**TOTAL: 3**	
Recomendación No 2:	**Tribunal Supremo de Justicia**	
Recomendación No 4:	**Dirección General de Régimen Penitenciario**	
Recomendación No 12:	**Gobiernos Autónomos Departamentales de Cochabamba y Pando**	
RECOMENDACIÓN INVIABLE[22]	**TOTAL: 1**	
Recomendación No 15:	Dirección General de Régimen Penitenciario y al Servicio Nacional de Defensa Pública	

22 La recomendación ha sido clasificada como inviable. Esta determinación obedece a que la recomendación se encontraba vinculada directamente al Decreto Presidencial N° 5137 del 26 de marzo de 2025. Dado que posteriormente, con fecha 22 de septiembre del mismo año, se emitió un nuevo Decreto Presidencial que dejó abrogada (sin efecto legal) la norma anterior, la recomendación ha perdido su objeto y aplicabilidad jurídica.

CONCLUSIÓN DEL SEGUIMIENTO Y DIÁLOGO CONSTRUCTIVO CON EL ESTADO	– *Del seguimiento realizado a las 15 recomendaciones emitidas en la gestión 2024, se evidencia un panorama mixto en cuanto a la voluntad y capacidad de respuesta institucional del Estado boliviano.* – *Por un lado, resulta alentador constatar el cumplimiento de siete recomendaciones clave, especialmente en ámbitos de competencia de la Asamblea Legislativa, la Policía Boliviana y los Gobiernos Departamentales de Pando y Potosí, así como en procedimientos disciplinarios penitenciarios. Sin embargo, persisten serias deficiencias en la coordinación y el deber de informar por parte de las entidades autónomas departamentales, cuya falta de respuesta masiva a las recomendaciones N° 8, 9, 10 y 11 impide una evaluación real del estado de las personas privadas de libertad en la mayor parte del territorio nacional* – *Preocupa de manera particular la falta de respuesta del Tribunal Supremo de Justicia y el incumplimiento de la Dirección de Régimen Penitenciario en puntos específicos, ya que estas omisiones repercuten directamente en la tutela judicial efectiva y el trato digno de la población penitenciaria.* – *Si bien existen avances, el informe demuestra que el Estado boliviano aún enfrenta un importante desafío para garantizar la implementación plena y homogénea de los estándares de prevención de la tortura en todos sus niveles de gobierno y administración de justicia.*

3.3. Obstáculos identificados en la implementación de políticas estatales.

Los obstáculos identificados en la implementación de políticas estatales por parte del Estado boliviano pueden tener causas estructurales y administrativas:

- Se observa, en primera instancia, la falta de coordinación y comunicación Interinstitucional, de las 4 recomendaciones generales emitidas para todas las Gobernaciones Autónomas Departamentales (GAD) del país, solo una (La Paz) respondió. Esto no solo es un problema de "falta de respuesta". Esto pude significar que, las autoridades Departamentales no tienen conocimiento de la normativa nacional e internacional en materia de prevención de la tortura, o también que el MNP no está posesionado como una entidad protectora de Derechos Humanos a nivel sub nacional o, por último, no existe un mecanismo vinculante o una presión política/administrativa efectiva

desde el nivel central o desde el MNP hacia los gobiernos subnacionales en materia de prevención de la tortura. La política estatal se fragmenta al llegar al territorio, dejando a las personas privadas de libertad a merced de la voluntad (o desidia) del gobierno departamental de turno.

- De igual manera, la respuesta (o ausencia de ella) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante la Recomendación No 2 revela un obstáculo crítico de pesos y contrapesos. El MNP es un mecanismo de control y prevención. Que la máxima instancia de justicia ordinaria del país ignore por completo una recomendación oficial sobre la situación de personas privadas de libertad puede indicar una resistencia institucional a ser fiscalizada en su gestión jurisdiccional o administrativa.
- La única recomendación clasificada como Inviable (No 15) no debe interpretarse como una "solución del problema", sino como la consecuencia de un obstáculo: la volatilidad legislativa del Ejecutivo. La recomendación se basó en un Decreto Presidencial (No 5137) que fue abrogado apenas 6 meses después por otro. Las políticas públicas dirigidas a la población penitenciaria (como indultos o beneficios procesales) se implementan vía Decreto y no vía Ley. Esto genera una inseguridad jurídica absoluta. El MNP emite una recomendación para corregir el rumbo de una norma, pero antes de que el Estado pueda implementar la corrección, la norma ya fue reemplazada. El obstáculo es la ausencia de políticas de Estado de largo plazo en favor de la sostenibilidad de las mejoras penitenciarias.
- Aunque las Gobernaciones de Pando y Potosí dan cumplimiento a sus recomendaciones específicas (No 13 y 14), el patrón general sugiere un obstáculo de desarrollo institucional desigual. Las políticas no se implementan de manera uniforme. Incluso dentro de un mismo gobierno departamental, la capacidad de respuesta varía según la temática (Salud vs. Seguridad, por ejemplo). Esto obstaculiza la construcción de un estándar nacional único en el trato a la población penitenciaria.
- Este seguimiento a las recomendaciones deja entrever que el principal desafío para la implementación de políticas puede radicar en la debilidad del Estado boliviano para articular una respuesta cohesionada y obligatoria entre sus órganos Judicial, Ejecutivo Central y Ejecutivo Departamental.


DATOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO (2024)


COMITE NACIONAL DE AMAS DE CASA MINERAS
MNP
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
MINEROS
DICE
NO

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

IV SITUACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD Y EN CUSTODIA DEL ESTADO

MNP
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Todas y todos somos
Defensores del Pueblo


MNP
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
DIVISION LUCHA
TRATA Y TRÁFICO
MNP
Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura


Yeikea Tetä mbutua
Entrance Hall
Entrada Sala Principal
Yeikea Tetä mbutua
Entrance Hall
Entrada Sala Principal
NAMBOL
NAMBOL

IV SITUACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD Y EN CUSTODIA DEL ESTADO

4.1. Centros Penitenciarios.

En cumplimiento estricto de su mandato constitucional y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Plurinacional de Bolivia en materia de prevención de la tortura, el MNP con el apoyo del personal de las Delegaciones Defensoriales Departamentales y de las Unidades de Coordinación Regional Pueblo, ejecutó durante la gestión 2025 su Plan Anual de Visitas, realizando inspecciones no anunciadas a centros penitenciarios urbanos y rurales en todo el territorio nacional.

La metodología aplicada se basó en la observación directa de la infraestructura, la realización de grupos focales con Personas Privadas de Libertad (PPL) y entrevistas con personal administrativo, equipo multidisciplinario y efectivos de seguridad policial. Este enfoque cualitativo y de verificación *in situ* permite al MNP trascender la información meramente estadística o administrativa para captar la vivencia cotidiana del encierro y las condiciones reales de detención.

El presente acápite consolida los principales hallazgos identificados en más de una treintena de recintos penitenciarios del país, abarcando centros de varones, mujeres y recintos mixtos. Los resultados obtenidos durante el año 2025 revelan una continuidad y, en varios casos, una agudización de las problemáticas estructurales previamente identificadas: **hacinamiento crítico generalizado, retrasos sistemáticos en el pago de pre diarios que comprometen la seguridad alimentaria, colapso de la infraestructura sanitaria (pozos sépticos y alcantarillado), y una ausencia casi absoluta del equipo multidisciplinario y Defensa Pública en los centros penitenciarios provinciales (carceletas).**

Estos hallazgos, que serán detallados por departamento y analizados a continuación, constituyen una base objetiva para exigir a las autoridades competentes acciones inmediatas que garanticen la vida, la integridad física y la dignidad de las personas bajo custodia del Estado,

DEPARTAMENTO	CENTRO PENITENCIARIO
ORURO	**Centro Penitenciario "San Pedro" (Varones):** El MNP constató hacinamiento extremo en las celdas, deficiencias de infraestructura, retraso en la cancelación de los pre diarios (asignación para alimentación) y falta de información y aplicación efectiva sobre los beneficios penitenciarios de amnistía e indulto (Decreto Presidencial No 5137). Asimismo, se evidenció falta de medicamentos y un déficit generalizado en las atenciones médicas
	Centro Penitenciario "La Merced" (Mujeres): El MNP estableció deficiencias graves en el sistema de alcantarillado, falta de medicamentos y retrasos en el pago de pre diarios. Las PPL manifestaron que el Decreto de Amnistía e Indulto que impulso el gobierno *"no sirve para nada"*, ya que ninguna interna ha podido beneficiarse. Se identificaron casos de PPL con enfermedades psiquiátricas y terminales sin atención adecuada, así como falta de oportunidades de trabajo y estudio. Se evidenció hacinamiento en las celdas de contención o castigo.
BENI	**Centro Penitenciario "Mocoví" (Varones):** se identificó la falta de profesional en psicología. Se observó una preocupante acumulación de basura y desechos en la parte trasera del recinto. En entrevista con la encargada de alimentos, se confirmó un retraso de más de seis (6) meses en el pago de los pre diarios.
	Centro Penitenciario "Mujeres Trinidad": Se verificaron serias deficiencias en la infraestructura, particularmente en las celdas. El recinto no cuenta con espacios de recreación (áreas deportivas) ni se realizan actividades de esparcimiento, culturales o de otro tipo. Se observó falta de oportunidades laborales y educativas. El MNP comprobó la inexistencia de un equipo multidisciplinario completo, lo que impide una atención integral a las internas.
CHUQUISACA	**Centro Penitenciario "San Roque" (Varones y Mujeres):** Se destaca la organización interna de los PPL, quienes han financiado ampliaciones para áreas de trabajo y estudio. Sin embargo, persiste el hacinamiento en celdas, obligando a utilizar otros ambientes (aulas, salas de costura) como dormitorios. El incremento de precios afecta la calidad y cantidad de la alimentación. El pabellón de mujeres presenta hacinamiento similar, aunque cuenta con ambientes de guardería para niños y niñas.
	Carceleta de Padilla (Varones): El MNP constató que la carceleta no cuenta con personal policial permanente, solo con un Alcaide adulto mayor. A pesar de una adecuada auto organización interna, se identificó hacinamiento, retraso en pre diarios y falta total de atención médica y psicológica (el equipo multidisciplinario de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario asiste solo tres veces al año), lo que impide el acceso a beneficios penitenciarios.
	Carceleta de Tarabuco (Varones): Se verificaron ampliaciones realizadas por los propios PPL, pero el hacinamiento persiste. Existe falta de apoyo para el mantenimiento de maquinaria de carpintería y una crítica escasez de agua. Se reportó retraso en pre diarios y ausencia de personal profesional (médico, psicólogo, jurídico, trabajo social), lo que imposibilita obtener beneficios penitenciarios.

LA PAZ	**Centro Penitenciario "San Pedro de Chonchocoro" (Varones):** Se visitaron diversos sectores, constatándose hacinamiento generalizado. Aunque existen talleres productivos, la oferta laboral es escasa por la sobrepoblación. Las celdas de aislamiento o "castigo" son precarias y no cumplen estándares internacionales (sin ventilación ni luz natural/artificial). Los PPL expresaron su disconformidad con el Decreto de Amnistía e Indulto por su inaplicabilidad real.
	Centro Penitenciario "Qalahuma" (Jóvenes - Viacha): Al igual que otros centros, presenta hacinamiento. Un hallazgo crítico es que los pozos sépticos se encuentran inundados, con aguas servidas en la superficie, generando olores fétidos y focos de infección. Se identificó falta de catres en algunos pabellones y en celdas de contención.
	Centro de Orientación Femenino de Obrajes: Se observaron deficiencias en servicios básicos (pocos baños para la cantidad de internas). Existe hacinamiento extremo, pernoctando internas en los pasillos. La alimentación es deficiente. Las internas manifestaron su molestia por la escasa aplicación del Decreto de Amnistía e Indulto.
PANDO	**Recinto Penitenciario de Villa Busch (Varones y Mujeres):** El MNP evidenció ausencia de personal policial al interior de los pabellones. Existe déficit en atención de salud por insuficiencia de medicamentos y hacinamiento. Un problema sanitario grave es que el servicio municipal no recoge la basura del penal, convirtiéndolo en un foco de infección. La sección de mujeres es un espacio reducido, sin áreas de recreación, con celdas oscuras y sensación de abandono institucional.
POTOSÍ	**Centro "Santo Domingo de Cantumarca" (Varones y Mujeres):** Pese a ser un recinto relativamente nuevo, presenta deficiencias en infraestructura, falta de luminarias y cámaras de seguridad. El personal administrativo carece de computadoras. Se observó falta de personal policial para seguridad interna. La atención médica es deficiente, sin equipamiento, y existen PPL con trastornos mentales sin atención. Las mujeres denuncian trabas de la Dirección para emprendimientos laborales y decepción por el Decreto de Indulto.
	Centro de Rehabilitación "Corazón de Jesús" (Tupiza - Varones): Se evidenció una crítica falta de personal policial (solo 3 efectivos) y ausencia de apoyo administrativo de Régimen Penitenciario. No existe atención médica, psicológica ni legal permanente (los profesionales de Régimen Penitenciario asisten cada 4 meses). La Defensa Pública está ausente. Los internos realizan actividades productivas con recursos propios, pero carecen de mercado para la venta.
	Centro de Readaptación Productiva "Uyuni" (Varones y Mujeres): Presenta deficiencias eléctricas y falta de candados en celdas. La principal falencia es que los pozos sépticos están inundados, representando un foco de infección para el penal y la comunidad. Existe hacinamiento crítico (internos duermen en pasillos). El equipo multidisciplinario y la Defensa Pública están ausentes. El pabellón de mujeres es pequeño y sin oportunidades laborales ni recreativas.
	Centro Penitenciario "San Miguel de Uncía" (Varones y Mujeres): Se estableció falta de agua potable (dependen de recolección de lluvia), falta de alcantarillado y medicamentos vencidos. No hay equipo multidisciplinario ni atención del SEPDEP. El pabellón de mujeres carece de condiciones de infraestructura adecuadas.

TARIJA	**Centro "Morros Blancos" (Varones y Mujeres):** Los varones reportaron trabas en los procedimientos de ingreso de material de trabajo y cobros adicionales para externar productos. Existe hacinamiento. En el pabellón de mujeres no hay presión de agua en las duchas (se bañan con baldes), ni espacios para actividades recreativas o laborales
	Carceleta Pública de "Entre Ríos" (Varones): El MNP identificó condiciones sumamente precarias de infraestructura. Se solicita impulsar el proyecto de construcción de una nueva carceleta. Ausencia total de abogados de Defensa Pública y poca asistencia del equipo multidisciplinario, impidiendo el acceso a beneficios penitenciarios
	Centro "El Palmar" (Yacuiba - Varones y Mujeres): En el pabellón de mujeres se constató hacinamiento y privaciones para realizar actividades productivas. En el sector de varones se identificaron actividades productivas (cuero) que requieren apoyo para su potenciación. Se solicita un aula virtual para audiencias y educación.
COCHABAMBA	**Recintos de San Antonio, El Abra, San Sebastián, San Pedro de Araní, San Pablo de Quillacollo (Varones)**: Se constató de manera transversal: Retraso de tres (3) meses en el pago de pre diarios para alimentación. Hacinamiento extremo (ej. Araní: infraestructura para 26 personas aloja a 154 PPL). Deficiencias en la atención en salud y odontología. Falta de realización de Consejos Penitenciarios que permitan acceder a beneficios. Las actividades productivas son minoritarias y sin apoyo institucional para su comercialización.
	Centro Penitenciario Femenino "San Sebastián" (Mujeres): Hacinamiento extremo: más de 30 internas pernoctan en la sala de costura. La mayoría de las internas se encuentran en ocio forzoso (sentadas en gradas). Retraso en pre diarios. Oferta laboral casi nula (solo venta interna en días de visita). Se recomienda ampliar días de visita para generar ingresos. Positivo: control de vectores.
SANTA CRUZ	**Centro Penitenciario de Palmasola (Varones y Mujeres**): Hacinamiento generalizado atribuido en parte a causas de la Ley N° 348 y asistencia familiar. Retraso de varios meses en el pago de pre diarios. Existe personal médico y psicológico, pero el acceso a medicamentos es insuficiente. En el pabellón de mujeres, 11 internas cocinan en "olla común" para varios días. Las recién llegadas duermen en el piso
	Centros de Camiri, Valle Grande, Buena Vista y CERPROM (Varones y Mujeres): Se constató hacinamiento crítico (2 o 3 personas por catre en Camiri; 15 a 20 internos por celda en Valle Grande). La atención en salud es esporádica o nula (médico visita una vez al mes en Buena Vista). Falta de atención en salud mental y medicamentos. Los internos realizan artesanías y carpintería con recursos propios, sin apoyo de Régimen. En CERPROM se destaca la presencia del CEA (educación) pero los talleres de metalurgia y carpintería están frenados por falta de mercado e insumos.

Sobre la base de las visitas realizadas a los centros penitenciarios del país durante la gestión 2025, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ha observado los siguientes puntos críticos:

1. Hacinamiento Crítico e Infraestructura Inhumana: La sobrepoblación penitenciaria es el denominador común en todos los recintos visitados, alcanzando niveles críticos en centros penitenciarios provinciales (Araní, Valle Grande, Padilla) y centros urbanos (Obrajes, San Sebastián Mujeres, San Pedro de Oruro). Esta situación obliga a las PPL a pernoctar en pasillos, pisos, baños y áreas destinadas a educación o trabajo, configurando un trato cruel, inhumano y degradante generalizado.
2. Crisis Alimentaria por Deuda Estatal: El retraso sistemático en el pago de los "pre diarios" (que oscila entre 3 y más de 6 meses en recintos como Mocoví) constituye una violación directa del derecho a la alimentación. Esta mora estatal no solo reduce la calidad y cantidad de los alimentos, sino que traslada la carga de la supervivencia a las familias de los internos o los obliga a depender de economías informales intramuros.
3. Emergencia Sanitaria y Ambiental: Se ha evidenciado una grave crisis de saneamiento básico. La inundación de pozos sépticos (Uyuni, Qalahuma), el colapso del alcantarillado (La Merced), la acumulación de basura dentro de los penales por falta de recojo municipal (Villa Busch) y la escasez de agua potable (Uncía, Tarabuco) representan focos activos de infección que ponen en riesgo la salud y la vida tanto de la población penal como de las comunidades aledañas.
4. Abandono Institucional en Carceletas Provinciales y Áreas Rurales: Existe un patrón de ausencia estatal en los centros penitenciarios ubicados fuera de las capitales de departamento. La falta de personal policial, la inexistencia de equipos multidisciplinarios (médicos, psicólogos, trabajadores sociales) y la nula presencia de la Defensa Pública (Padilla, Tarabuco, Entre Ríos) no solo vulneran derechos básicos, sino que bloquean el acceso a la justicia y a los beneficios penitenciarios, perpetuando condenas de facto más allá de lo legalmente establecido.
5. Discriminación Estructural contra las Mujeres Privadas de Libertad: Los pabellones y centros femeninos continúan siendo espacios de marginación y abandono. Carecen sistemáticamente de áreas de recreación, oferta laboral significativa e infraestructura adecuada para la higiene (falta de agua a presión en duchas). La dependencia económica de las visitas para sobrevivir es extrema, y las oportunidades de reinserción son prácticamente nulas.
6. Ineficacia de la Normativa de Amnistía e Indulto: Existe una percepción unánime y un sentimiento de frustración generalizada entre las PPL respecto a los Decretos de Amnistía e Indulto. La falta de asesoramiento jurídico y la inacción de los consejos penitenciarios convierten estos mecanismos de reducción del hacinamiento y justicia en letra muerta "no sirve para nada".

Encuesta a Personas Privadas de Libertad

Con el propósito de obtener mayor información, sobre las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, el MNP realizó y aplicó un formulario de encuesta anónima para ser llenado por las y los internos de los diferentes recintos penitenciarios en los cuales se efectuaron las visitas *in situ*.

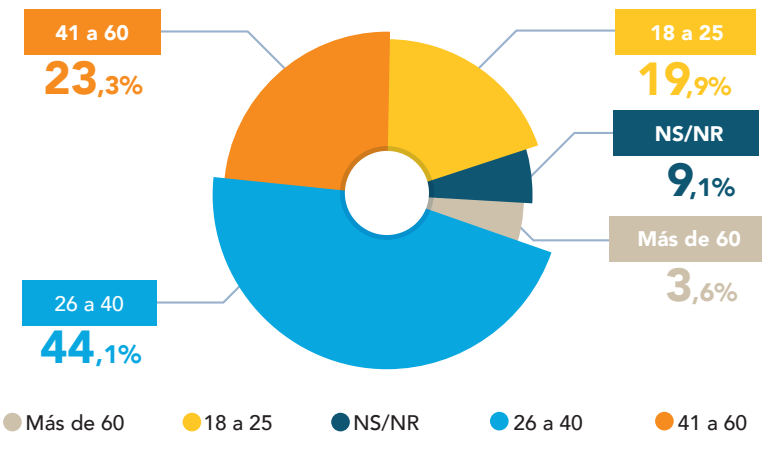
En el presente punto, se sistematiza los hallazgos obtenidos a partir de la aplicación de **2.100 encuestas** a Personas Privadas de Libertad (PPL) en centros penitenciarios urbanos y rurales de los distintos departamentos de Bolivia, durante la gestión 2025. Esta labor fue ejecutada en el marco de las atribuciones del MNP, con el objetivo de monitorear las condiciones de detención y el respeto a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario nacional.

Los ejes temáticos abordados comprenden dimensiones fundamentales para la dignidad humana y la reinserción social: perfil demográfico y situación jurídica, condiciones materiales de vida (servicios básicos, alimentación e higiene), acceso a derechos esenciales (salud, educación y trabajo), mantenimiento de vínculos familiares y percepción de seguridad. Los datos recolectados no solo ofrecen una radiografía estadística de la realidad carcelaria boliviana, sino que, complementados con los testimonios recabados *in situ*, permiten visibilizar las brechas existentes entre la normativa nacional e internacional y la práctica cotidiana intramuros.

El análisis que se presenta, busca trascender la mera descripción porcentual para convertirse en una herramienta de incidencia. Se pone especial énfasis en las voces de las propias personas privadas de libertad, cuyas experiencias revelan deficiencias estructurales en la provisión de servicios básicos de higiene, la precariedad del trabajo y la educación, y la lentitud del sistema judicial.

GRÁFICO No 1

EDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD



Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a PPLs en la gestión 2025.

El gráfico muestra que la mayoría de las personas encuestadas privadas de libertad tiene entre 26 y 40 años (44,1%), seguido del grupo de 41 a 60 años (23,3%). Las y los jóvenes de 18 a 25 años representan el 19,9%, mientras que las personas mayores de 60 años apenas alcanzan el 3,6%. Un 9,1% no respondió a la pregunta.

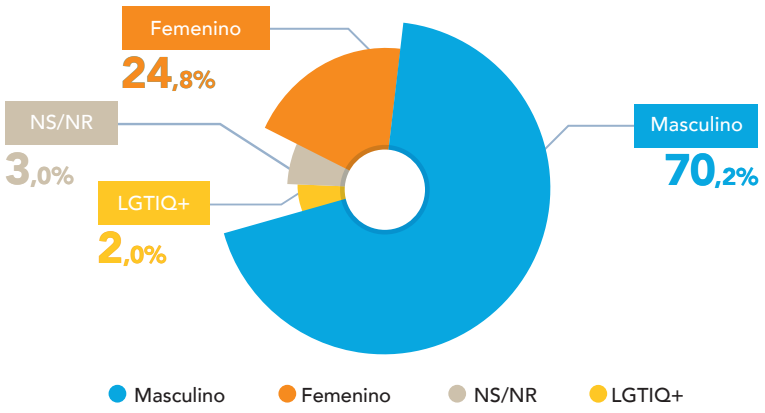
Estos datos evidencian que la población penitenciaria está compuesta principalmente por personas en edad adulta joven y productiva. Se trata de una etapa vital en la que el trabajo, el estudio y la reconstrucción del proyecto de vida son aún posibles. Durante las visitas realizadas, muchas personas privadas de libertad en este rango etario manifestaron su deseo de "aprovechar el tiempo para cambiar" o "volver a empezar", lo que subraya la necesidad imperiosa de implementar programas reales y efectivos de reinserción social y laboral.

El segundo grupo más numeroso (41 a 60 años) mostró una visión frecuentemente más cansada o resignada. Expresiones como "ya han pasado varios años aquí" o "ya no tengo a quién regresar afuera" reflejan la necesidad de una atención psicológica y social constante para evitar la institucionalización y la pérdida de esperanza.

Respecto a la población joven (18 a 25 años), su presencia refleja una realidad preocupante vinculada a la falta de oportunidades y contextos de vulnerabilidad social. Lejos de requerir únicamente castigo, este grupo demanda orientación, educación y oportunidades concretas para reencaminar sus vidas. Finalmente, las personas mayores de 60 años, aunque minoritarias, constituyen un grupo de alta vulnerabilidad debido a la prevalencia de enfermedades crónicas y la necesidad de cuidados especiales que el sistema penitenciario no siempre está en condiciones de brindar.

GRÁFICO No 2

SEXO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD



Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a PPLs en la gestión 2025.

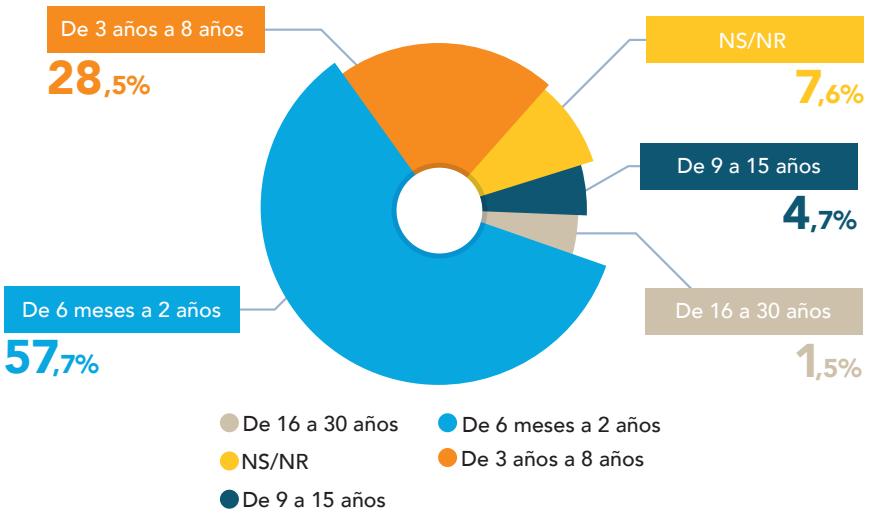
El gráfico muestra una marcada mayoría de población masculina (70,2%), frente a un 24,8% de mujeres. Un 2% se identifica como parte del colectivo LGTIQ+, y un 3% no respondió a la consulta.

Si bien la proporción refleja la composición general del sistema penal, el dato no debe invisibilizar las necesidades específicas de las mujeres y las diversidades sexuales. En las visitas realizadas, las mujeres manifestaron una profunda vulnerabilidad emocional asociada principalmente al alejamiento de sus hijos e hijas y a la falta de apoyo familiar *"Lo más difícil no es estar aquí, sino estar lejos de mis hijos"*.

Asimismo, la presencia de personas LGTIQ+, aunque porcentualmente menor, es significativa. Los testimonios recabados indican que este grupo enfrenta discriminación y tratos diferenciados tanto por parte del personal de seguridad como de otros internos *"Hay compañeros que son diferentes y los molestan".* Esta situación exige políticas de sensibilización y mecanismos efectivos de protección contra la violencia y la discriminación por orientación sexual o identidad de género dentro de los recintos.

GRÁFICO No 3

TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL CENTRO PENITENCIARIO



Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a PPLs en la gestión 2025.

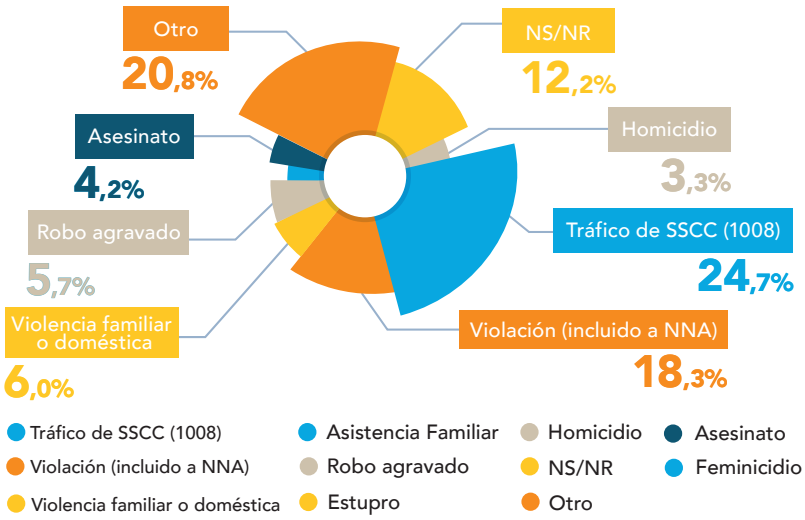
La mayoría de las personas encuestadas (57,7%) lleva un tiempo de permanencia relativamente corto, de entre 6 meses y 2 años. El 28,5% lleva recluido de 3 a 8 años, mientras que un 4,7% acumula entre 9 y 15 años, y un 1,5% ha permanecido privado de libertad entre 16 y 30 años. Un 7,6% no respondió.

El dato predominante (menos de 2 años) indica que gran parte de la población se encuentra en fase de adaptación al encierro, un período crítico desde el punto de vista emocional *"Al principio cuesta acostumbrarse", "Uno se desespera".* El grupo que lleva de 3 a 8 años refleja una estabilización dentro del sistema, pero con un riesgo latente de resignación y desconexión con el exterior.

La minoría que supera los 16 años de reclusión representa a una población altamente vulnerable, que ha envejecido dentro del penal y que, en muchos casos, ha perdido todo vínculo familiar y proyección de futuro extramuros. Es imperativo que las políticas de tratamiento penitenciario diferencien las intervenciones psicológicas y sociales en función del tiempo de permanencia, atendiendo de manera específica el "shock" del ingreso, la meseta de la condena larga y el deterioro del encierro prolongado.

GRÁFICO No 4

¿DELITO POR EL CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO?



Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a PPLs en la gestión 2025.

Los delitos con mayor incidencia entre la población encuestada son: Tráfico de Sustancias Controladas (Ley 1008) con un 24,7%; Violación (incluido a NNA) con un 18,3%; y un 20,8% que corresponde a "Otros" delitos. Le siguen Violencia Familiar o Doméstica (6%), Robo Agravado (5,7%), Asesinato (4,2%), Homicidio (3,3%), Estupro (3%), Asistencia Familiar (1,2%) y Feminicidio (0,5%). Un 12,2% no especificó el delito.

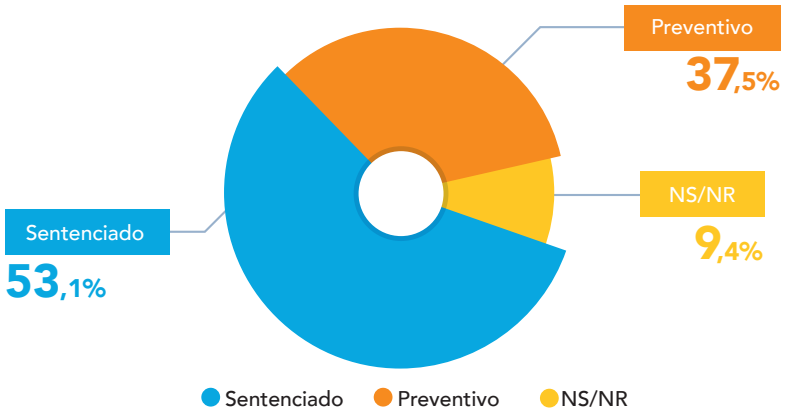
La alta prevalencia de delitos relacionados con la Ley N° 1008, particularmente en casos de micro tráfico o transporte de pequeñas cantidades (principalmente el PPL mujeres), sugiere la necesidad de revisar la proporcionalidad de las penas y explorar medidas alternativas al encarcelamiento, así como urgentes acciones con enfoque de género, para eslabones débiles de la cadena del narcotráfico.

La significativa presencia de delitos contra la libertad sexual exige la implementación obligatoria de programas de tratamiento psicológico especializado y reeducación, orientados a la prevención de la reincidencia.

Los casos de violencia familiar y doméstica, frecuentemente asociados al consumo de alcohol o falta de manejo emocional, evidencian la necesidad de incorporar programas de masculinidades y resolución pacífica de conflictos dentro de la oferta de rehabilitación. La categoría "Otros", que agrupa una diversidad de tipos penales de menor lesividad, refuerza la urgencia de agilizar el sistema judicial para evitar que delitos menores deriven en prisiones preventivas prolongadas que congestionan el sistema.

GRÁFICO No 5

SITUACIÓN JURÍDICA



Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a PPLs en la gestión 2025.

El 53,1% de la población encuestada manifestó tener sentencia ejecutoriada, mientras que un 37,5% se encuentra en detención preventiva. El 9,4% restante no respondió[23].

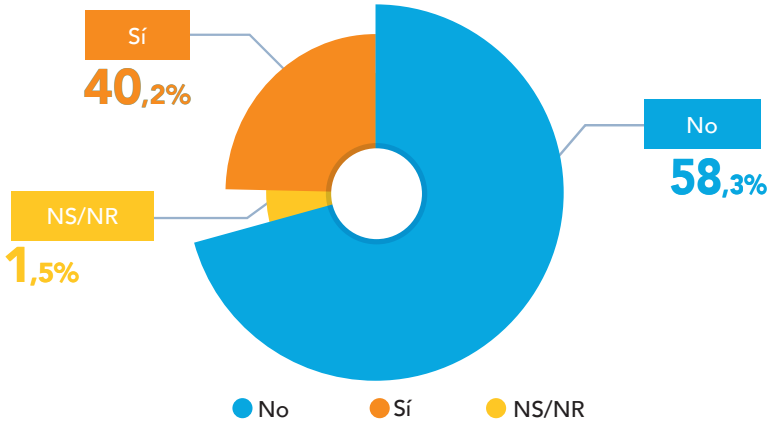
Que más de un tercio de la población penitenciaria encuestada esté privada de libertad sin una condena firme constituye una grave vulneración de la presunción de inocencia y del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Testimonios como *"Mi proceso no avanza"* o *"Estoy aquí sin sentencia hace tres años"* corroboran la lentitud estructural del sistema judicial y la ausencia de la defensa pública.

La señalada situación no solo genera hacinamiento y condiciones indignas, sino que contraviene directamente la Constitución Política del Estado y los estándares internacionales en materia de prisión preventiva. El uso excesivo de esta medida cautelar la desnaturaliza, convirtiéndola en una pena anticipada.

23 En base a nota CITE: MG/DGRP N°1898/STRIA-746/2026 emitida por el Cnl.DESP. (S.P.) Lic. Daniel Mérida Valderrama Director General de Régimen Penitenciario (DGRP) – Ministerio de Gobierno. En el cual incluye el INFORME: DGRP/AP N° 067/2026 elaborado por German Villazante Apaza, Encargado área de Clasificación de la DGRP, sobre ESTADISTICA PENITENCIARIA 2025, señala que: del total de 32.677 PPLs (gestión 2025), 17.615 (53.91%) estan en calidad de preventivos y 15.062 (46.09%) su situación jurídica es de sentenciado.

GRÁFICO No 6

SATISFACCIÓN SOBRE SERVICIOS BÁSICOS



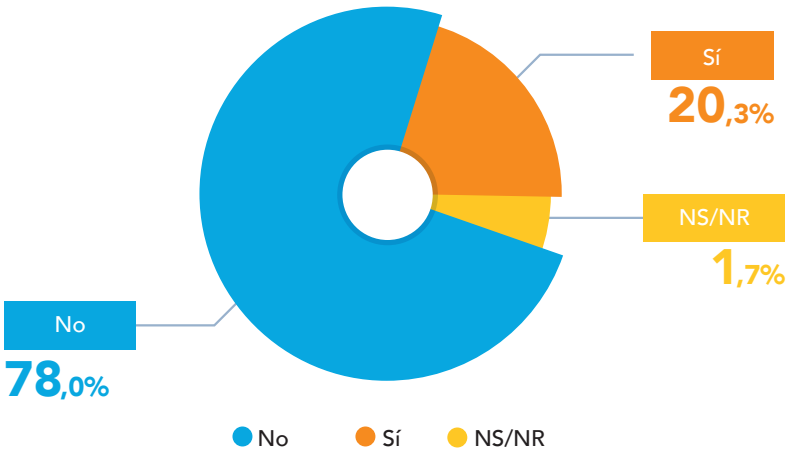
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a PPLs en la gestión 2025.

El 58,3% de las personas encuestadas manifestó no sentirse satisfecho con los servicios básicos (agua, electricidad y limpieza), frente a un 40,2% que sí lo está. Un 1,5% no respondió.

Aunque existe un porcentaje que considera aceptables las condiciones, la mayoría expresa insatisfacción, lo que revela una prestación deficiente e irregular de servicios esenciales. Durante las visitas se constató que el suministro de agua suele ser racionado *"llega solo por horas y cuando no hay, nosotros tenemos que pagar por los carros cisternas, para tener agua aquí"*, el servicio eléctrico es inestable *"la luz se corta seguido"* y la limpieza recae casi exclusivamente en el trabajo auto gestionado de los propios internos, sin el suficiente apoyo logístico o provisión de insumos por parte de la administración. El acceso continuo a agua potable y saneamiento básico es un derecho humano indispensable, y su intermitencia compromete seriamente la salud y la dignidad de la población penal.

GRÁFICO No 7

SATISFACCIÓN RESPECTO A LA ALIMENTACIÓN



Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a PPLs en la gestión 2025.

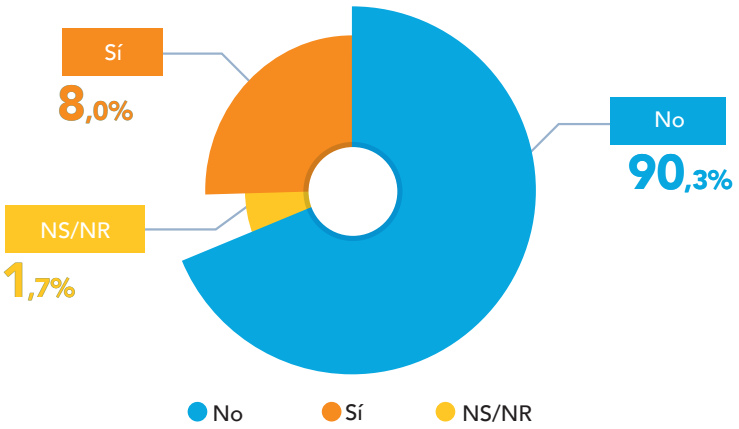
En base a los resultados, el 78% de las personas encuestadas manifestó no sentirse satisfecho con la alimentación proporcionada por el recinto. Solo el 20,3% expresó conformidad y un 1,7% no respondió.

Este dato es contundente y refleja una de las principales quejas del sistema, la falta del pago de prediarios, lo que repercute en la mala alimentación de los internos. Si bien se reconocen esfuerzos aislados *"ahora se cocina mejor que antes"*, la percepción generalizada es que las raciones son insuficientes, de baja calidad nutricional o llegan en mal estado *"a veces la comida llega fría", "hay días en que no hay carne"*. La dependencia de la "olla común" y de los alimentos proporcionados por los familiares durante las visitas no es una opción complementaria, sino un mecanismo de supervivencia ante la insuficiencia de la dotación estatal.

El Estado debe garantizar una alimentación suficiente, balanceada y culturalmente adecuada, conforme a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).

GRÁFICO No 8

SOBRE PROVISION DE ARTICULOS DE HIGIENE
(jabón corporal, papel higiénico, champú)



Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a PPLs en la gestión 2025.

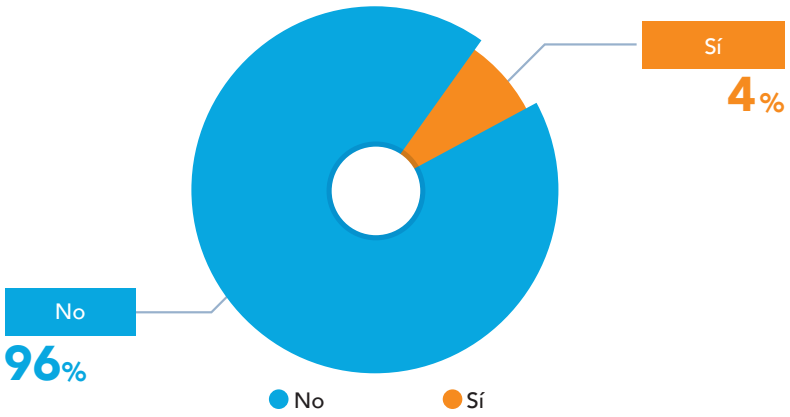
Un notorio **90,3%** de las personas encuestadas afirmó **no** recibir artículos de higiene básica por parte de la administración penitenciaria. Únicamente el 8% respondió afirmativamente y el 1,7% no respondió.

Este hallazgo evidencia una omisión institucional gravísima. La provisión de elementos básicos de aseo personal no es un acto de caridad, sino una obligación estatal para garantizar condiciones mínimas de salubridad y dignidad humana. Testimonios como *"Si no tienes familia que te traiga, te quedas sin nada"* o *"Nos compartimos entre compañeros"* ilustran un estado de abandono material que expone a la población a riesgos sanitarios prevenibles (infecciones dérmicas, parasitosis, etc.). La ausencia de papel higiénico, jabón y champú socava cualquier política seria de salud preventiva dentro de los recintos.

Lo anterior se complementa con la entrega de material menstrual (toallas higiénicas) para las mujeres privadas de libertad:

GRÁFICO No 9

FACILITACIÓN DE MATERIAL MENSTRUAL



Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a PPLs en la gestión 2025.

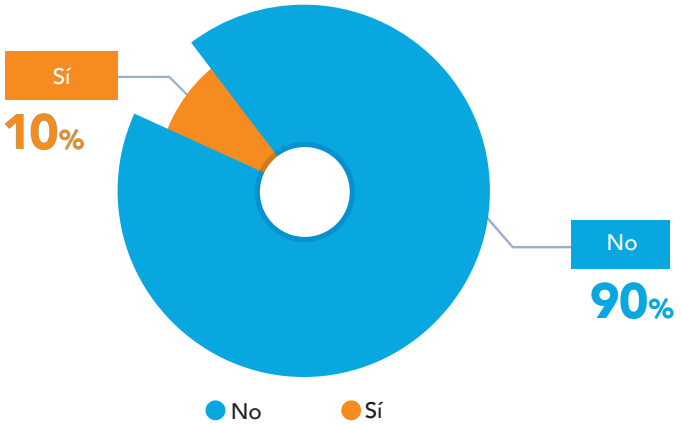
El **96%** de las mujeres encuestadas manifestó **no** recibir material menstrual por parte de la administración penitenciaria. Solo un 4% afirmó recibirlo.

Este indicador representa una de las formas más flagrantes de discriminación y violencia institucional por razón de género dentro del sistema penitenciario. La gestión menstrual es una necesidad fisiológica básica y su omisión condena a las mujeres privadas de libertad a condiciones de insalubridad e indignidad extremas. Los testimonios que relatan el uso de trapos o papel por falta de toallas higiénicas configuran un trato cruel, inhumano y degradante. La negación de este insumo esencial vulnera directamente el derecho a la salud y a una vida digna.

De la misma manera se preguntó si los niños y niñas que viven con sus madres en los diferentes centros penitenciarios reciben pañales:

GRÁFICO No 10

PROVISIÓN DE PAÑALES



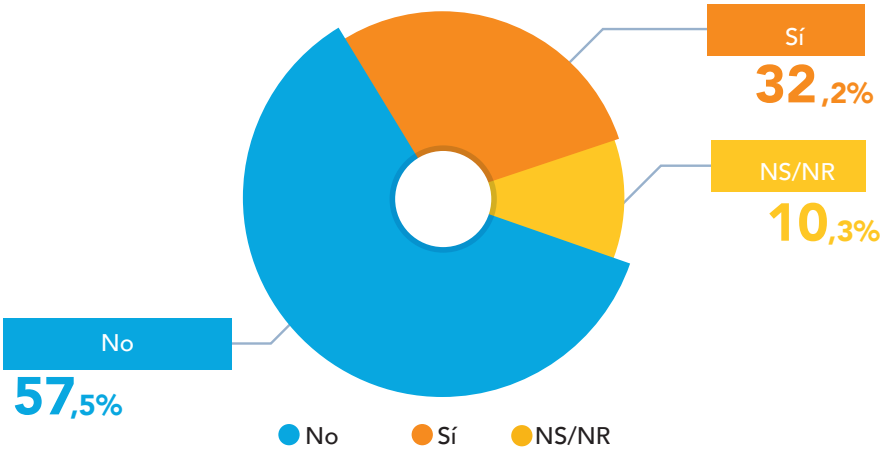
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a PPLs en la gestión 2025.

De igual manera con el punto anterior, el **90%** de las madres encuestadas afirmó que **no** recibe pañales para sus hijos o hijas menores de 2 años que residen con ellas en el penal. Un 10% indicó recibirlos, sin embargo, indagando más sobre este punto el MNP tomo conocimiento que los pañales para los niños llegan a la administración penitenciaria mediante donaciones de algunas instituciones.

Si bien el suministro parece mayoritario, el 10% que reporta no recibirlos, junto a testimonios sobre la irregularidad del stock, indica que la provisión no está completamente garantizada ni sistematizada. La dependencia de donaciones eventuales no puede sustituir la obligación del Estado de asegurar el desarrollo integral de los niños y niñas que viven con sus madres en los centros penitenciarios.

GRÁFICO No 11

ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS



Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a PPLs en la gestión 2025.

El 57,5% de las personas encuestadas afirmó haber acudido al servicio médico del penal al menos una vez, mientras que un 32,2% indicó no haberlo hecho y un 10,3% no respondió.

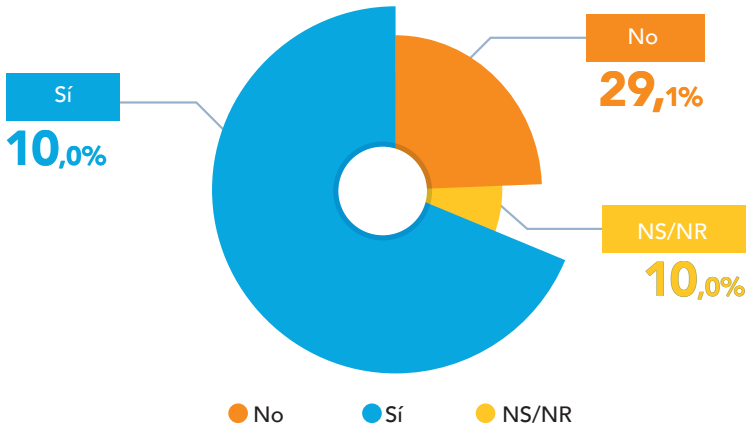
Que casi un tercio de la población encuestada no haya accedido nunca al servicio de salud revela una falla crítica en la cobertura y la confianza en el sistema sanitario penitenciario. Aunque más de la mitad reportó haber asistido, los testimonios cualitativos matizan este dato: la atención es percibida como insuficiente *"solo dan paracetamol para todo"*, esporádica *"cuando el médico está de turno"* y reactiva *"si no es grave, no te atienden"*. El acceso a la salud en prisión debe ser equivalente al disponible para la comunidad extramuros (principio de equivalencia), garantizando atención preventiva y curativa de calidad.

Respecto al tiempo de espera para la atención médica, la mayoría de quienes accedieron al servicio (27%) esperó entre 1 y 3 horas. Sin embargo, es preocupante que un **15,9%** señalara que **"no lograron atenderme"**, igualando el porcentaje de quienes fueron atendidos de inmediato (15,9%). Un 25,7% no respondió, y el resto reportó esperas que van de 1 día hasta más de 5 días.

El tiempo de espera en la atención médica penitenciaria actúa como un filtro que desincentiva la demanda y agrava los cuadros clínicos. La categoría "no lograron atenderme" es la más grave, pues evidencia la denegación del derecho a la salud. Testimonios sobre la ausencia de médicos, la falta de especialistas (particularmente odontólogos y ginecólogos) y las listas de espera interminables configuran un escenario de desprotección sanitaria. La falta de atención oportuna transforma dolencias leves en enfermedades crónicas o emergencias graves, violando el deber de custodia y cuidado que tiene el Estado sobre la población reclusa.

GRÁFICO No 12

SATISFACCIÓN SOBRE SERVICIOS BÁSICOS



Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a PPLs en la gestión 2025.

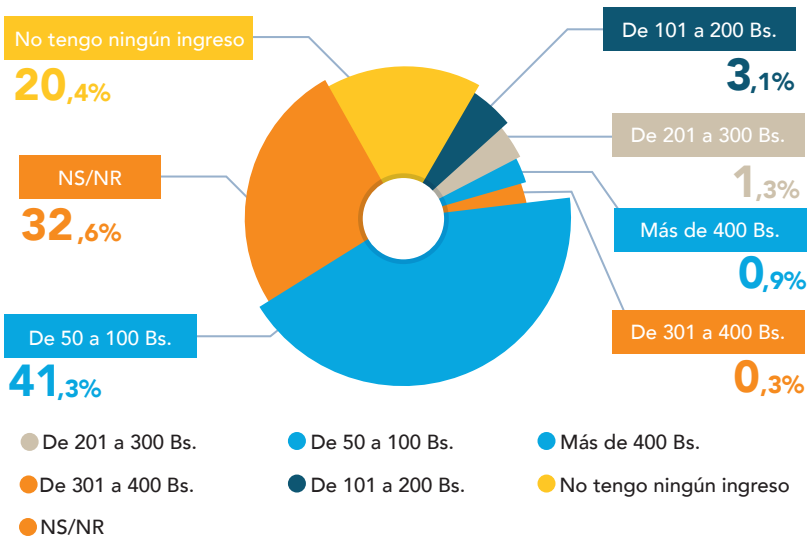
El 60,9**%** de las personas encuestadas declaró realizar una actividad laboral remunerada, el 29,1% dijo no trabajar, y un 10**%** optó por no responder (NS/NR).

La mayoría de respuestas que indico que se encuentra realizando alguna actividad laboral, se desprende principalmente de personas privadas de libertad de centros penitenciarios rurales, donde la gran mayoría de PPLs realiza algún tipo de trabajo. Sin embargo, el empleo formal remunerado en cárceles de capitales de Departamento es demasiado limitados (principalmente en recinto de población femenina), este hecho, demuestra las deficiencias de una política pública de reinserción laboral y con enfoque de género.

El trabajo en los penales, según las Reglas Mandela, debe ser de carácter formativo y remunerado de manera equitativa, algo que claramente no ocurre. Los testimonios sobre restricciones para el ingreso de materiales o la comercialización de productos evidencian que el Estado no solo no fomenta el trabajo, sino que en ocasiones lo obstaculiza.

GRÁFICO No 13

INGRESOS POR ACTIVIDAD LABORAL



Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a PPLs en la gestión 2025.

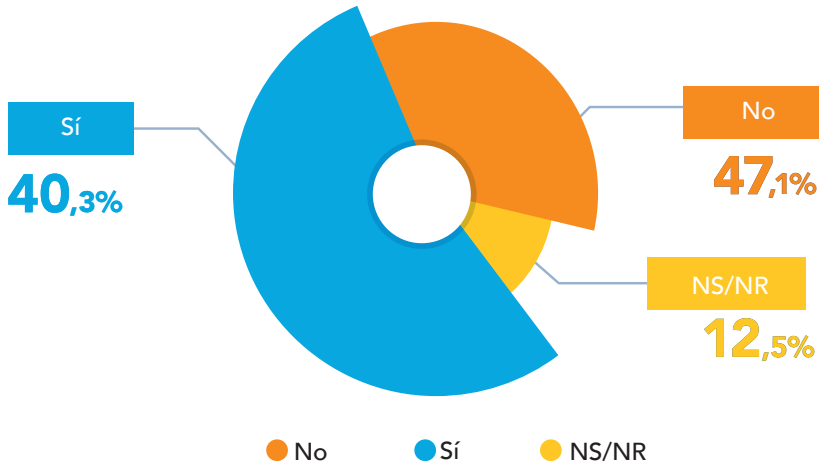
Del porcentaje que trabaja (o que respondió), el **41,3%** percibe entre 50 y 100 bolivianos semanales. Un 20,4% afirma no tener ningún ingreso pese a trabajar y un 32,6% no respondió. Los ingresos superiores a 300 Bs. son marginales (menos del 2% acumulado).

Los montos reportados (un promedio inferior a 15 Bs. diarios) configuran una situación laboral crítica y no de reinserción social. Con esos ingresos, una persona privada de libertad no puede cubrir sus necesidades más elementales de higiene, alimentación complementaria o apoyo a su familia. El 20,4% que trabaja sin percibir remuneración alguna podría estar realizando labores de *"cuidado de pabellón o coperos, que realizan esta actividad solo para que no sean echados de sus pabellones"* o servicios internos bajo coerción, una práctica prohibida por los estándares internacionales de derechos humanos.

En algunas cárceles o pabellones de mujeres, la actividad laboral se restringe solo a la venta de refrescos. Esta precariedad laboral anula la función redentora del trabajo y fomenta economías ilegales intramuros.

GRÁFICO No 14

OFERTA EDUCATIVA



Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a PPLs en la gestión 2025.

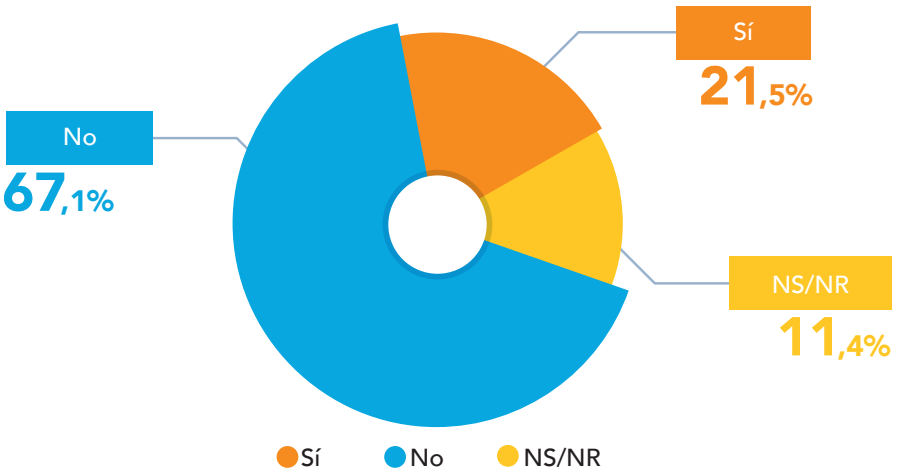
El **47,1%** de los encuestados manifestó **no** sentirse satisfecho, frente a un 40,3% que sí lo está. Un 12,5% no respondió.

A pesar de la existencia de Centros de Educación Alternativa (CEA) en varios recintos, la percepción de insatisfacción es alta. Los testimonios recabados señalan carencias materiales (falta de sillas, computadoras, materiales didácticos), discontinuidad del personal docente, falta de actualización de mallas curriculares y, sobre todo, una oferta limitada a cursos técnicos básicos, sin oportunidades reales de acceder a formación universitaria.

En los penales de mujeres, las brechas son aún mayores, sumada a la dificultad de conciliar el estudio con el cuidado de los hijos. La educación, como pilar de la reinserción, requiere una inversión estructural que hoy no existe.

GRÁFICO No 15

OFERTA LABORAL



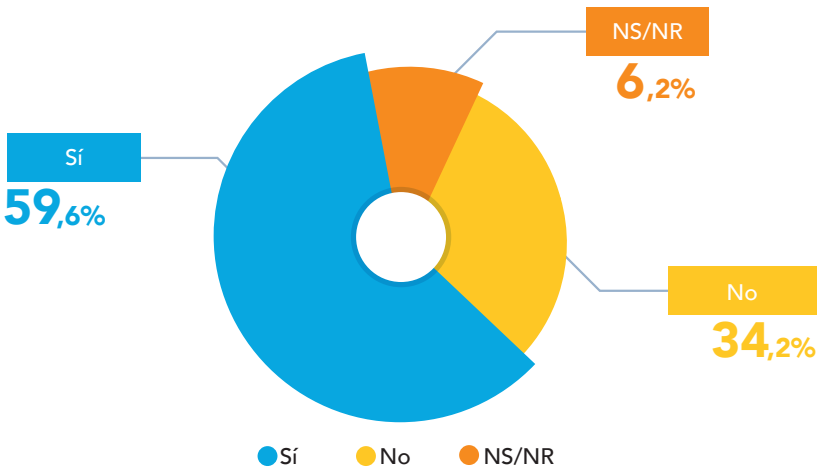
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a PPLs en la gestión 2025.

El **67,1%** de las personas encuestadas manifestó **no** estar satisfecho con la oferta laboral. Solo el 21,5% expresó satisfacción y un 11,4% no respondió.

Este alto porcentaje de insatisfacción es coherente con los datos anteriores. La falta de espacios físicos para talleres, la prohibición o restricción para el ingreso de herramientas y materia prima, y la ausencia de canales de comercialización externa, condenan a la mayoría de la población al ocio forzoso o a la mendicidad interna. Esta situación es caldo de cultivo para la violencia, el consumo de drogas y la desesperanza, erosionando cualquier intento serio de rehabilitación.

GRÁFICO No 16

COMUNICACIÓN CON EL EXTERIOR



Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a PPLs en la gestión 2025.

El 59,6% afirmó que **sí** existen teléfonos públicos, mientras que un 34,2% indicó que **no**. Un 6,2% no respondió.

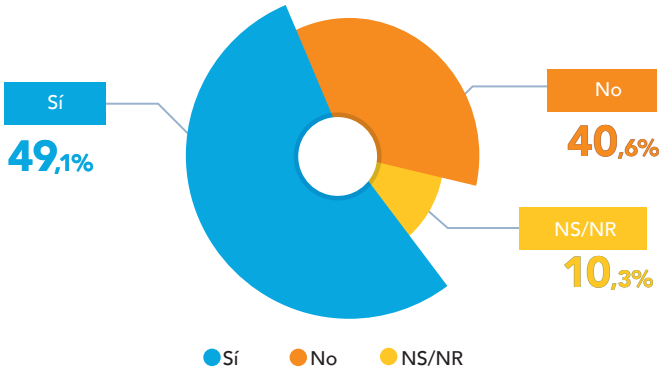
La existencia de teléfonos no garantiza el acceso. Las visitas revelaron que, en muchos casos, los aparatos están fuera de servicio *"se friegan con los rayos"*, dependen de autorizaciones discrecionales o están controlados por delegados internos. En centros más pequeños o rurales, la carencia es casi total, dependiendo de celulares particulares de los internos (práctica formalmente prohibida). La comunicación con el exterior es un derecho fundamental para preservar los vínculos familiares y el acceso a la defensa legal.

Cuando se preguntó sobre los costos para el uso de teléfonos públicos se señaló por casi la mitad de los encuestados (49,1%) que sí se paga un monto adicional por usar los teléfonos. El 40,6% dijo que no, y un 10,3% no respondió.

Este "cobro extra" constituye una forma de corrupción o autogestión informal que grava un derecho humano. El hecho de que los internos deban pagar una "tarifa" adicional a la administración o a los delegados para poder llamar a sus familias o abogados es una práctica discriminatoria que afecta directamente a los más pobres. Se trata de una barrera económica ilegítima que el Estado debe erradicar mediante la supervisión y la garantía de gratuidad en la infraestructura de comunicación básica.

GRÁFICO No 17

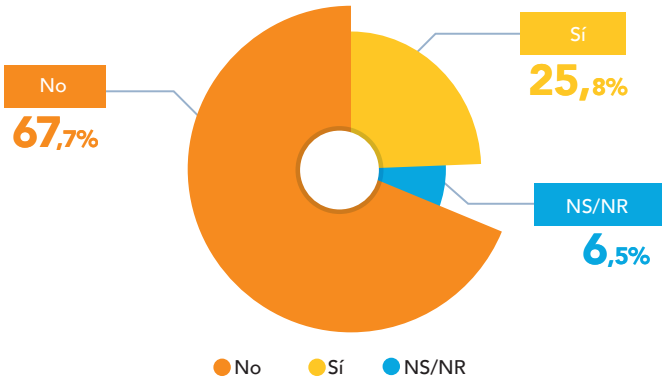
COSTOS POR USO DE TELÉFONO



Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a PPLs en la gestión 2025.

GRÁFICO No 18

FAMILIA QUE VIVE CERCA DEL CENTRO PENITENCIARIO



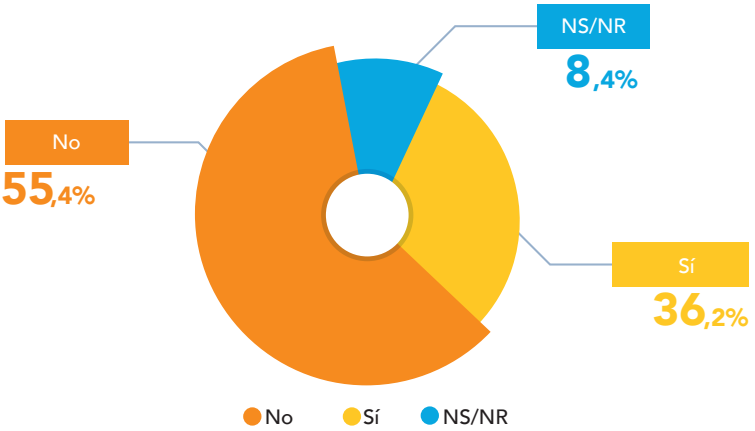
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a PPLs en la gestión 2025.

El **67,7%** de los encuestados indicó que sus familiares **no** viven en el mismo municipio. Solo el 25,8% reside en la misma localidad, y un 6,5% no respondió. Este dato confirma el desarraigo territorial como una característica estructural del sistema penitenciario boliviano.

La lejanía geográfica es una de las principales causas de la baja frecuencia de visitas, lo que genera un doble castigo: para el interno, que pierde el soporte emocional, y para la familia, que debe asumir altos costos de traslado. Esta situación contradice la Regla 59 de las Reglas Mandela, que recomienda que los reclusos sean asignados a centros cercanos a su hogar.

GRÁFICO No 19

SATISFACCIÓN DEL TRATO DE VISITAS



Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a PPLs en la gestión 2025.

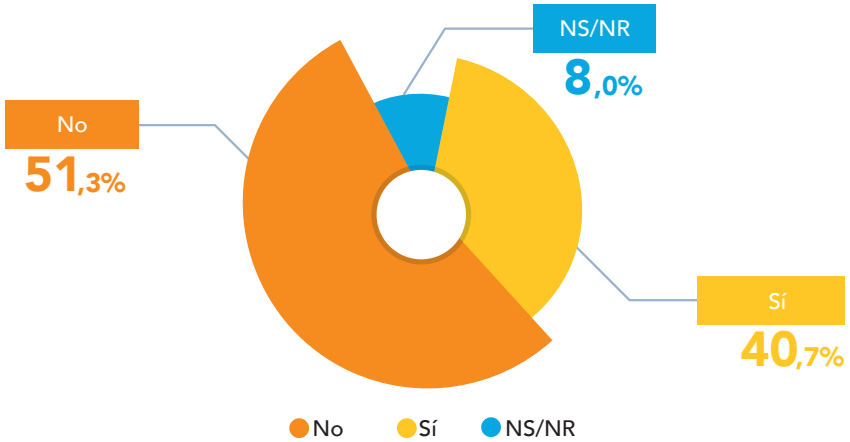
La mayoría, un **55,4%**, manifestó **no** estar satisfecho con el trato que reciben sus visitas. El 36,2% sí lo está y un 8,4% no respondió.

La insatisfacción mayoritaria apunta a una cultura institucional de hostilidad y desconfianza hacia los familiares. Los relatos sobre requisas humillantes, restricciones arbitrarias a los alimentos que pueden ingresar, demoras injustificadas en el ingreso y malos tratos verbales configuran un escenario de violencia institucional secundaria.

Este trato no solo vulnera los derechos de los visitantes, sino que castiga indirectamente a la persona privada de libertad, generando un clima de tensión y resentimiento contra la administración penitenciaria.

GRÁFICO No 20

SEGURIDAD INTRACARCELARIA



Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a PPLs en la gestión 2025.

El 51,2% considera que el centro **no** es inseguro, mientras que un preocupante **40,7%** percibe su entorno como peligroso. Un 8% no respondió.

Aunque la percepción mayoritaria es de relativa calma, principalmente en centros penitenciarios del área rural, el hecho de que 4 de cada 10 internos se sientan inseguros es un indicador grave de fallas en la gobernabilidad interna. La sensación de peligro está asociada a riñas entre pabellones, presencia de grupos de poder que ejercen control informal y la ausencia de una autoridad legítima y presente del Estado.

La seguridad es una obligación estatal indelegable; cuando los internos sienten que deben auto protegerse, el Estado ha fracasado en su deber de garante de la vida e integridad física de las personas bajo su custodia.

Sobre la base de los datos recabados en las 2.100 encuestas y las visitas de verificación in situ, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura concluye lo siguiente:

1. Uso Excesivo de la Prisión Preventiva: El sistema penitenciario boliviano sigue operando como un depósito de personas sin condena. Con un 37.5% de la población encuestada en situación de detención preventiva (los datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario son más altos y sobrepasan el 50%), se consolida una violación sistemática de la presunción de inocencia y se alimenta el hacinamiento estructural.
2. Precarización de las Condiciones de Vida: El Estado boliviano no está garantizando el derecho a un nivel de vida adecuado dentro de los penales. La falta de provisión de artículos de higiene básica (90.3%), la deficiente alimentación (78% insatisfechos) y la irregularidad de los servicios básicos (58.3% insatisfechos) constituyen un trato degradante que afecta la salud y la dignidad humana.
3. Violencia de Género Institucionalizada: La negación del acceso a insumos de gestión menstrual (96% de las mujeres no los recibe) es una forma específica de tortura o maltrato por razón de género. Denota una falta absoluta de enfoque de género en las políticas penitenciarias y una invisibilización de las necesidades biológicas y de salud de las mujeres privadas de libertad.
4. Fracaso de las Políticas de Reinserción Social: El trabajo y la educación, pilares de la reinserción, son derechos inaccesibles para la gran mayoría. Con un porcentaje de población accediendo a trabajo remunerado y una insatisfacción educativa cercana al 50%, el sistema penitenciario se limita a la custodia y el castigo, renunciando a su mandato constitucional de rehabilitación y reinserción social. Los magros ingresos (promedio 50-100 Bs/semana) evidencian explotación y una casi nula formación laboral.
5. Barreras al Contacto Familiar: El desarraigo geográfico (67.7% de familiares viven en otro municipio), los malos tratos a las visitas (55.4% insatisfacción) y los cobros informales por el uso de teléfonos (49.1%) erosionan sistemáticamente los vínculos familiares, un factor protector clave para la salud mental y la futura reinserción.

6. Sistema de Salud Colapsado: Aunque existe infraestructura de sanidad, la atención es percibida como inoportuna, insuficiente y de baja calidad. La alta tasa de personas que «no lograron ser atendidas» (15.9%) y las largas esperas evidencian una vulneración directa del derecho a la salud.

4.2. Centros de Reintegración Social (CRS): Adolescentes en conflicto con la ley

En cumplimiento del mandato conferido por la Ley N° 1397 de 29 de septiembre de 2021, que modifica en parte la Ley N° 870, donde designa a la Defensoría del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), realizó visitas de monitoreo a los Centros de Reintegración Social para adolescentes en conflicto con la ley, de Potosí ("Nuevo Horizonte") y de La Paz.

La labor del MNP en centros destinados a adolescentes privados de libertad reviste una alta prioridad dentro del sistema preventivo. El Estado, en su rol de garante, tiene una obligación reforzada de protección hacia las y los adolescentes en conflicto con la ley penal, conforme al Código Niña, Niño y Adolescente y la Convención sobre los Derechos del Niño.

En esos entornos, la prevención de la tortura y los malos tratos no se limita a la ausencia de golpes; se extiende estrictamente a la proscripción absoluta del aislamiento indebido y a la garantía de condiciones materiales de vida acordes con su proceso de desarrollo físico y mental, acorde con los estándares internacionales de justicia penal juvenil (Reglas de Beijing[24] y Reglas de La Habana[25]).

Los hallazgos documentados en ambas visitas representan formas de trato degradante en el contexto de la privación de libertad adolescente: el encierro como castigo y la negligencia alimentaria estructural.

En el Centro de Reintegración Social "Nuevo Horizonte" (Potosí): El equipo del MNP constató la existencia de un **área de aislamiento debajo de las gradas**. Se evidenció que dicho espacio había sido utilizado en "las últimas horas", dado el hallazgo de frazadas, recipientes con orina y prendas de vestir. Espacios como el señalado para contener a un adolescente constituye una violación a los derechos humanos. Este acto puede configurarse como trato cruel, inhumano y degradante, y potencialmente como tortura psicológica si se aplicó como medida disciplinaria. La normativa nacional e internacional prohíbe terminantemente el aislamiento de adolescentes en espacios oscuros, reducidos o carentes de ventilación.

La presencia de recipientes con orina es una prueba de la posibilidad de que el adolescente aislado no tenía acceso a un baño digno, siendo obligado a realizar sus necesidades fisiológicas en el mismo espacio de confinamiento. Esto degrada la dignidad humana y genera un grave riesgo de afectación a la salud mental del adolescente. La existencia de este «ambiente improvisado» no es un hecho fortuito; puede revelar una práctica institucional normalizada y posiblemente, tolerada por la administración del centro.

24 Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (1985)

25 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (1990)

En el Centro de Reintegración Social de La Paz, el MNP ha podido establecer el desabastecimiento Alimentario. Los adolescentes reciben 4 alimentos diarios (se asume que son desayuno, almuerzo, merienda y cena). Sin embargo, se constató la eliminación del té por falta de azúcar y una disminución general de la cantidad de alimentos. La administración informó que dependen de donaciones, las cuales son reportadas al SEDEGES.

A diferencia de una persona adulta en libertad, un adolescente privado de libertad depende absolutamente del Estado para su subsistencia. La reducción de porciones o la eliminación de componentes básicos de la dieta (azúcar, fuente de energía rápida para cerebros en desarrollo) por falta de presupuesto constituye una forma de negligencia institucional grave.

Los adolescentes en conflicto con la ley se encuentran en etapa de crecimiento. La restricción calórica no solo afecta su salud física, sino que incrementa la irritabilidad, la ansiedad y el potencial de conflictividad dentro del centro, aumentando el riesgo de uso de la fuerza por parte del personal.

El hecho de que el centro dependa de donaciones para complementar la alimentación básica indica que el presupuesto asignado por el SEDEGES La Paz es insuficiente para garantizar un derecho fundamental. La eliminación del té por falta de azúcar es un síntoma de un sistema de reinserción social que opera en condiciones de pobreza y abandono administrativo.

El MNP concluye que el uso del espacio debajo de las gradas como área de confinamiento en el Centro "Nuevo Horizonte" es una práctica ilegal, cruel y degradante. Constituye una violación directa a la integridad personal de los adolescentes y refleja una falla sistémica en la supervisión y control por parte del SEDEGES Potosí y del Juzgado de la Niñez y Adolescencia responsable del control de legalidad del centro.

La disminución de la ración alimentaria en el Centro de Reintegración de La Paz configura un incumplimiento del deber estatal de garantizar condiciones dignas de existencia. Permitir que la alimentación de adolescentes privados de libertad dependa de la caridad (donaciones) y no de un presupuesto fijo y suficiente, expone a esta población a una situación de vulnerabilidad extrema y trato negligente.

Ambos hallazgos (castigo en aislamiento y problemática alimentaria) demuestran que talvez estos centros operan bajo una lógica punitiva-carcelaria y no bajo un modelo socioeducativo de reinserción. Mientras existan "habitaciones bajo las gradas" o mientras falte azúcar para el té, no se puede hablar de reintegración social, sino de encierro y castigo.

4.3. Celdas Policiales: Condiciones de arresto, higiene y salvaguardas legales

En la gestión 2025, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a realizado el monitoreo a catorce (14) celdas en diferentes lugares de nuestro país, en el cual, el MNP ha podido identificar una brecha crítica entre la infraestructura de las zonas rurales/fronterizas y las capitales de departamento, así como un cumplimiento dispar de las salvaguardas procesales.

Los siguientes puntos describen entornos que, por sí mismos, constituyen una violación al derecho a la integridad personal:

Jefatura Policial Rural y Fronteriza de Puerto Guaqui (La Paz) [2 visitas]:	La reincidencia en el reporte (falta de luz eléctrica, colchones húmedos/mal estado y ausencia total de servicio higiénico) es alarmante. La falta de baño obliga a los detenidos a realizar sus necesidades fisiológicas en el mismo espacio de reclusión (probablemente en bolsas o botellas) o a depender de la discrecionalidad del custodio para salir. La humedad y la oscuridad, combinadas con el frío del altiplano, constituyen un riesgo severo para la salud y un trato degradante.
FELCC Desaguadero	La ausencia de celdas formales y, más grave aún, la inexistencia de servicio higiénico para funcionarios o PPL, indica una infraestructura completamente inadecuada para albergar personas, ni siquiera por horas.
Celdas Policiales Puerto Quijarro (Santa Cruz):	El estancamiento de heces y orina por baterías sanitarias descompuestas, sumado a la basura acumulada y techos perforados, configura un foco infeccioso activo. Dormir en el suelo en un ambiente con posible materia fecal expuesta, puede constituirse en tratos inhumanos y degradantes, además de un grave riesgo sanitario (cólera, infecciones gastrointestinales, parásitos). Aunque no hubo denuncias de malos tratos físicos, el entorno es en sí mismo puede constituirse en una forma de maltrato
FELCC Potosí (Caso Llallagua	Se respetan las salvaguardas de información y contacto familiar. Sin embargo, la omisión de la valoración médica al ingreso es una deficiencia crítica desde la perspectiva del MNP. El examen médico de admisión es la principal herramienta para prevenir y documentar torturas o lesiones previas al arresto
FELCC Potosí	Se identifica la necesidad de colchones. La recomendación ya fue realizada *in situ*, pero debe constar como hallazgo sistémico. Dormir en el suelo de cemento, especialmente en Potosí (clima frío), es un factor de riesgo para la salud
Celdas del Comando Departamental de Potosí	El reporte indica que las frazadas y colchones "serán repartidos una vez concluido el registro". Esto sugiere que los detenidos permanecen durante el proceso administrativo (que puede durar horas) sin elementos de abrigo ni descanso. La detención masiva por faltas administrativas suele saturar las celdas, creando condiciones de hacinamiento temporal que deben ser monitoreadas
(FELCC Central, FELCN, DIPROVE, Tránsito, EPI Jaihuayco) Cochabamba	El hecho de que la mayoría de las celdas visitadas en estuvieran vacías es un dato estadístico relevante. Esto podría indicar: Rotación rápida de detenidos (traslado inmediato a centros penitenciarios). Eficacia en la aplicación de medidas cautelares no privativas de libertad. O simplemente una coincidencia temporal.

Sobre la base de las visitas de verificación in situ, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura concluye lo siguiente:

1. En las localidades de Puerto de Guaqui, Desaguadero y Puerto Quijarro, las condiciones materiales de las celdas (falta de baños, materia fecal estancada, oscuridad y humedad) constituyen una violación del derecho a la integridad personal y a un trato humano, independientemente de si existe violencia física directa por parte de funcionarios.
2. Se evidenció la falta de protocolo de revisión médica en todas las celdas donde el MNP ha realizado su monitoreo. Esta omisión anula la función preventiva del MNP y deja en indefensión tanto al detenido como al Estado ante posibles alegaciones de malos tratos ocurridos durante el arresto o traslado.
3. Existe un abismo entre las condiciones de las unidades de las capitales de eje (Cochabamba, que reporta celdas vacías o con condiciones mínimas) y las unidades rurales/fronterizas (La Paz, Potosí, Santa Cruz), donde las celdas operan por debajo de los estándares mínimos de habitabilidad humana.

4.4. Cuarteles y centros de formación militar/policial

En el marco del mandato conferido por la Ley N° 1397 y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y personal de la Defensoría del Pueblo, realizaron una serie de visitas a recintos de las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada) y centros de formación policial durante la gestión 2025.

Desde la óptica preventiva especializada, los cuarteles y centros de instrucción son espacios de alto riesgo institucional para la ocurrencia de malos tratos o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto se debe a la naturaleza intrínseca de estas instituciones: subordinación jerárquica absoluta, aislamiento geográfico de las unidades fronterizas o rurales, y una cultura organizacional que históricamente ha normalizado el sufrimiento físico o la humillación como método de "formación del carácter".

El objetivo del MNP en esos entornos no es evaluar la capacidad operativa militar, sino verificar que las condiciones de vida de los conscriptos (soldados y marineros en servicio obligatorio) y estudiantes (cadetes y alumnos) cumplan con los estándares mínimos de dignidad humana y que existan salvaguardas efectivas contra abusos de autoridad.

El presente informe analiza 12 registros de visita, identificando deficiencias estructurales y de procedimiento que, de no corregirse, constituyen un terreno fértil para la vulneración de derechos fundamentales.

El MNP ha identificado una brecha geográfica y presupuestaria severa entre las unidades militares ubicadas en las capitales de departamento o zonas céntricas y aquellas desplegadas en zonas fronterizas o rurales. Asimismo, se identifica una disparidad entre la garantía del derecho a la alimentación y la precariedad en infraestructura sanitaria básica.

Los siguientes hallazgos evidencian un riesgo objetivo para la salud física y la integridad psicológica de los conscriptos, condiciones que por sí mismas pueden ser consideradas tratos degradantes según estándares internacionales (Reglas Mandela[26] aplicadas por analogía a reclutas en situación de encierro institucional).

Puesto Militar Adelantado "Lucio Guzmán" (Puerto Quijarro - Santa Cruz)	De 5 baños, solo 1 funciona con batería. La ausencia de puertas en duchas y baños vulnera gravemente el derecho a la intimidad y privacidad, generando un entorno humillante para los soldados. La falta de baterías sanitarias adecuadas obliga a la acumulación de excretas o al uso de letrinas improvisadas, con alto riesgo de enfermedades gastrointestinales. Se reportan falencias en el almacenamiento de alimentos secos. Un almacenamiento inadecuado (humedad, plagas) pone en riesgo la seguridad alimentaria y la salud de la tropa.
Regimiento de Caballería "Gral. Lanza" (Guaqui - La Paz):	Pozo séptico de la cocina lleno. El rebalse de aguas servidas en las inmediaciones de la cocina es un foco infeccioso activo y una violación flagrante de las normas básicas de salubridad en campamentos. Focos quemados en dormitorios. La falta de iluminación en los dormitorios durante la noche incrementa el riesgo de accidentes, caídas y, desde la perspectiva del MNP, crea zonas oscuras propicias para posibles agresiones físicas, acoso y violencia entre soldados sin testigos.
Regimiento "Apóstol Santiago" (Chimoré - Cochabamba):	Falta de conexión de la cañería de la cocina al alcantarillado. El vertido directo de aguas grises al suelo genera contaminación y malos olores que afectan la calidad de vida en el cuartel. La existencia de "buzones de denuncias" físicos es insuficiente si no se acompaña de capacitación y garantías de no represalia.
Base Naval de Guaqui (La Paz):	Buzones de queja sin identificación y ausencia de paneles informativos sobre DDHH. Un buzón sin identificación es un buzón muerto. Los conscriptos, especialmente en la Armada (reclutas jóvenes), deben conocer explícitamente que tienen derecho a denunciar malos tratos y que existe un mecanismo confidencial para hacerlo. La falta de cámaras de seguridad en puntos estratégicos de los dormitorios y patios de formación es una deficiencia preventiva.
Regimiento "Apóstol Santiago" (Chimoré):	Se pudo establecer la falta de capacitación en DDHH a soldados e instructores, este es un hallazgo transversal a varios cuarteles. Sin formación específica en la Ley N° 870 del Defensor del Pueblo y MNP y la prohibición absoluta de castigos físicos o humillaciones, los instructores pueden recurrir a métodos de disciplina basados en la violencia verbal o física, asumiendo que son "prácticas normales de instrucción".

El MNP reconoce los esfuerzos institucionales en áreas donde se evidenció cumplimiento normativo.

- Alimentación en Unidades de Tarija (RI-20, Batallón Méndez, GADA 94): La verificación *in situ* del menú regionalizado «Vivir Bien» (sopa, segundo,

26 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (2015)

postre y refresco), junto con almacenes adecuados, demuestra que sí es posible garantizar el derecho a una alimentación digna y suficiente dentro del marco presupuestario militar. Este es un estándar de buenas prácticas que debe ser replicado en todas las guarniciones.

- Clima de Confianza en Entrevistas (Puerto Quijarro): A pesar de las pésimas condiciones de infraestructura, los 9 soldados entrevistados manifestaron no haber sufrido malos tratos físicos directos. Esto es relevante, pero no exime al Estado de corregir la precariedad estructural (baños sin puertas), que es en sí misma un trato degradante pasivo.
- Garantía de No Represalia (FATESCIPOL - Tarija): La comunicación formal al Director sobre el Art. 21 del OPCAT (Prohibición de Represalias) es una medida preventiva fundamental que debe realizarse en cada visita.

Las condiciones documentadas en el Puesto Militar de Puerto Quijarro (1 baño funcional para 20 soldados, sin puertas) y el Regimiento de Guaqui (pozo séptico rebosante en cocina) pueden configuran una violación del derecho a la integridad personal. Forzar a los conscriptos a defecar en condiciones insalubres y sin privacidad es una afrenta a la dignidad humana incompatible con el deber de garante del Estado.

La Base Naval de Guaqui presenta una fragilidad institucional en materia de prevención, cámaras insuficientes y mecanismos de denuncia invisibles. La falta de paneles informativos sobre derechos humanos perpetúa la ignorancia legal de los conscriptos sobre sus garantías frente a posibles abusos jerárquicos.

Existe una correlación directa entre la ubicación geográfica (frontera/rural) y la precariedad de las instalaciones. Mientras unidades de Tarija capital muestran una logística alimentaria ejemplar, los puestos adelantados (Guaqui, Puerto Quijarro, Chimoré) padecen abandono en mantenimiento básico de alcantarillado y baterías sanitarias.

La falta de iluminación en dormitorios (Reg. Lanza) y la ausencia de capacitación en DDHH (Reg. Apóstol Santiago) crean un entorno donde el acoso, los castigos físicos colectivos (planchas, trotes excesivos) o las humillaciones nocturnas pueden ocurrir sin detección ni control, especialmente durante el período de reclutamiento donde los instructores ejercen control absoluto.

4.5. Centros de Acogimiento para Niñez y Adolescencia

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) realizó durante la gestión 2025 una serie de visitas periódicas y de seguimiento a Centros de Acogida para Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Potosí, Cochabamba y La Paz.

Desde la óptica preventiva del MNP, los NNA institucionalizados constituyen un grupo de especial vulnerabilidad debido a la separación de miembros de esta población de su entorno familiar y su dependencia total del Estado o de la institución que ejerce la custodia. El riesgo de malos tratos en estos entornos no se limita a la agresión física

directa; se extiende a la negligencia institucional, las condiciones materiales indignas, la falta de acceso a salud especializada, la inadecuada supervisión y el aislamiento indebido.

El presente informe analiza 22 registros de visitas, identificando patrones de riesgo sistémico y buenas prácticas, con el objetivo de emitir recomendaciones orientadas a cerrar las brechas que podrían derivar en sufrimiento innecesario o tratos degradantes para la población infantil y adolescente acogida.

Este es el hallazgo más crítico desde la perspectiva de la prevención, la falta de atención adecuada a NNA constituye una forma de negligencia institucional grave.

Hogar San Francisco de Asís (Roboré):	La ausencia de personal de salud o equipo multidisciplinario es una deficiencia estructural de alto riesgo. Depender exclusivamente de la DNA para emergencias significa que las niñas podrían estar conviviendo con afecciones de salud sin detección ni contención profesional.
Margarita Auge (Uncía - Potosí):	El reporte señala explícitamente que dos internos requieren evaluación psicológica y 1 presenta discapacidad. La recomendación *in situ* de «supervisión hasta que se efectúen las valoraciones" indica que los niños estaban en un limbo de atención. El MNP considera que la falta de valoración y tratamiento especializado es un factor de riesgo, ya que las conductas derivadas de estas condiciones pueden ser malinterpretadas por el personal como "indisciplina", generando castigos o aislamientos inadecuados
Casa de Acogida "Ana Medina" (Potosí)	Atiende a mujeres víctimas de violencia y sus hijos. La ausencia de un Protocolo de Prevención de la Tortura y de capacitación en DDHH para el personal es una alarma preventiva. La falta de médico y seguridad física nocturna incrementa la vulnerabilidad de los NNA dependientes que residen allí
Aurora Juárez - Potosí	En dos visitas (incluyendo seguimiento) se constató la persistencia de vidrios rotos reemplazados con cartón. Permitir que NNA transiten y convivan en un área con vidrios rotos accesibles es una exposición negligente a lesiones físicas evitables. Sustituir protección con cartón demuestra falta de priorización en la integridad física de los residentes.
Miraflores y Aurora Juárez - Potosí	El hallazgo de frutas y verduras en mal estado es un indicador claro de fallas en la cadena de supervisión del SEDEGES. Suministrar comida descompuesta a NNA bajo custodia estatal constituye una afectación directa a su derecho a la salud y a una alimentación digna. El Centro Miraflores reportó falta de agua en los tanques. La carencia del servicio de agua corriente para la higiene personal y limpieza de baños es un riesgo sanitario inminente que impacta directamente en la dignidad de los adolescentes acogidos.
Centros "Niño Jesús" y "José Soria" (La Paz):	Los centros reportaron desabastecimiento de alimentos secos. Si bien en el seguimiento se regularizó la dotación en el Hogar "José Soria", el MNP observa con preocupación posibles de represalias contra la encargada que informó de la falta. La recomendación explícita a la directora de "prohibición de represalias" puede revelar un ambiente autoritario que desincentiva la transparencia y pone en riesgo la cadena de suministro para los NNA.

Centro "Sagrado Maestro" (Potosí):	(Capacidad 15, Albergados 20). El hacinamiento es un factor de estrés psicosocial que incrementa exponencialmente la conflictividad entre pares y el riesgo de abusos (bullying o agresiones sexuales entre NNA). La falta de cámaras en sectores aislados y la recomendación de cerrar el dormitorio de aislamiento son críticas. El MNP advierte que el uso de «dormitorios individuales de aislamiento» sin supervisión médica o psicológica continua es una práctica prohibida que puede configurar daño psicológico, especialmente en NNA institucionalizados.
María Inmaculada (Potosí):	(Capacidad 30, Albergados 33). Se suma la solicitud de ampliación de presupuesto para alimentos, lo que indica que la sobrepoblación está tensionando los recursos básicos.

A pesar de las deficiencias señaladas, el MNP destaca la existencia de centros que operan con estándares adecuados de cuidado, lo que demuestra que sí es posible garantizar la integridad con voluntad institucional.

- **EDYFU ONG (Tarija) y Moisés Navajas (Tarija):** Cumplen con alimentación (5 comidas/día), escolarización y acreditación.
- **10 de noviembre y Corazón de María (Potosí):** Mantienen ambientes limpios, calefacción, separación por edades/género, y en el caso del internado campesino, una organización comunitaria que fomenta la corresponsabilidad de los adolescentes.

La ausencia de personal especializado y la falta de cobertura médica nocturna (Niño Jesús - La Paz) constituye el principal factor de riesgo identificado en 2025. La no atención a la salud de NNA víctimas de abandono o violencia es una forma de victimización secundaria.

La persistencia de vidrios rotos y falta de mantenimiento básico (agua en Miraflores) demuestra una falla en el deber de cuidado y garantía de integridad física por parte de los entes gestores (SEDEGES/Gobernaciones). El hecho de que las recomendaciones de una visita previa no fueran acatadas (vidrios) evidencia una falta de seguimiento efectivo de las resoluciones del MNP y la Defensoría.

El uso de un dormitorio individual para "aislamiento" sin protocolo terapéutico claro es un llamado de alerta para el MNP. En contextos de cuidado alternativo, el encierro solitario puede causar daños psicológicos profundos en niños y adolescentes.

Los centros "Sagrado Maestro" y "María Inmaculada" operan por encima de su capacidad, lo que puede tensionar los recursos (alimentos) y aumentando el riesgo de conflictos internos y malos tratos entre pares.

4.6. Otras poblaciones en custodia: Centros para adultos mayores, hospitales psiquiátricos

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) tiene la facultad de realizar visitas periódicas y no anunciadas a todos los lugares donde se encuentren personas privadas de libertad, bajo custodia y cuidado del Estado o de instituciones

privadas con delegación estatal.

Durante la gestión 2025, el MNP amplió su monitoreo a una diversidad de centros que albergan a Personas Adultas Mayores (PAM), personas con discapacidad psicosocial o intelectual, mujeres víctimas de violencia con sus hijos dependientes, y unidades educativas con régimen de internado.

La perspectiva del MNP en estos entornos se centra en prevenir tratos crueles, inhumanos o degradantes que a menudo se manifiestan no como golpes visibles, sino como negligencia institucional sistémica, medicalización forzada sin control, desabastecimiento alimentario, falta de privacidad, ausencia de mecanismos de queja, y abandono terapéutico. Estos posibles hechos, de no ser atendidas, constituyen entornos propicios para la vulneración de la integridad personal de estos grupos en situación de extrema dependencia.

El análisis de los 23 reportes de visita revela tres patrones de riesgo transversales, junto con hallazgos específicos preocupantes en materia de institucionalización y salud mental.

El hallazgo más recurrente y alarmante en los centros dependientes de los Gobiernos Autónomos Departamentales (SEDEGES) de La Paz.

- Disminución de Raciones (La Paz): En los centros IDAI, Erick Boulter (Discapacidad múltiple), Rosaura Campos (PAM) y María Esther Quevedo (PAM), el personal del MNP constató la disminución en la cantidad y calidad de los alimentos debido al «incremento de precios» o «recortes». En el caso de Erick Boulter, se evidenció que el propio personal tuvo que erogar gastos de su bolsillo para comprar comida. La alimentación insuficiente en personas con discapacidad severa o adultas mayores postradas constituye una afrenta directa a la dignidad humana y una forma de maltrato institucional pasivo. El hambre o la desnutrición bajo custodia estatal es una clara violación a la integridad personal.[27]

La falta de equipos multidisciplinarios y de protocolos específicos de prevención de tortura es una constante que puede elevar el riesgo de malas praxis y malos tratos.

- Salud Mental y Psiquiatría (Cochabamba y Potosí): Programa Calle/ Drogodependientes (Cbba): Falta de psiquiatras y atención integral en salud física. Atender a población en situación de calle con consumo problemático sin

27 La Defensoría del Pueblo, en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), emitió informe específico sobre la temática y exigió al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz el restablecimiento de la atención adecuada a los internos que están bajo custodia del Estado. Según el reporte, siete de ocho centros (87%) reportaron una disminución en la calidad de las raciones. El 50% de los centros tiene en sus almacenes un déficit de productos secos esenciales (arroz, azúcar, fideo, aceite). El 62% indicó que el SEDEGES no dotó de cantidades suficientes de insumos básicos (azúcar, fideo, carne, pollo) obligando a los centros a depender de donaciones (87%) y esfuerzos voluntarios del personal. Respecto a la salud, se evidenció la falta de personal en el turno nocturno, en los centros "María Esther Quevedo" y "José Soria". Se identificaron a tres personas en situación de riesgo vital (con traqueotomía y gastrectomía), alojadas en un área de enfermería inadecuada en el Instituto de Rehabilitación Infantil. Ante este panorama, el MNP sugirió seis acciones inmediatas: el restablecimiento de la calidad y cantidad de raciones; la regularización de dotación de insumos; garantías en la distribución equitativa de alimentos; emitir instructivos para inventariar productos próximos a vencer; y la reorganización de los turnos de salud para la cobertura de 24 horas, priorizando la atención especializada de los internos en riesgo vital.

equipo completo deriva en la mera contención física sin tratamiento, lo que puede configurar trato cruel al no abordar el sufrimiento mental de base.

- Jesús Valle (Potosí - Rehabilitación): No se pusieron a disposición los files de los internos. No existe mecanismo de quejas. El personal es eventual ("consultores en línea"). La falta de acceso a los expedientes clínicos y la ausencia de un buzón de quejas en un centro cerrado de rehabilitación crea un espacio de total opacidad y alto riesgo de abusos físicos y psicológicos. Es un entorno clásico donde pueden proliferar los malos tratos sin posibilidad de denuncia externa.
- Wawa wasi (Potosí - Mujeres Víctimas de Violencia): Sin cámaras de vigilancia, sin buzón de quejas, sin fichas de registro de internas, y sin protocolos de atención. Estas deficiencias pueden exponer a las mujeres y sus hijos a riesgos de seguridad (intrusión del agresor, conflictos internos sin testigos) y a la imposibilidad de exigir sus derechos al no existir siquiera un registro formal de su estancia.
- Casa Ana Medina (Santa Cruz): Reitera la falta de Protocolo de Prevención de Tortura, capacitación en DDHH y personal médico.
- Atención a la Discapacidad: María Cristina (Cbba) y Comunidad Restauración en Cristo (Santa Cruz): La falta de equipos multidisciplinarios completos y la falta de permisos de SEDEPOS (Santa Cruz) indican que personas con discapacidad están siendo cuidadas por personal empírico o religioso sin la supervisión estatal obligatoria.
- Internado Escolar Chiru K´asa (Potosí): Presencia de vidrios rotos en un internado con 50 NNA. Se emitió recomendación de retiro inmediato para evitar accidentes. Es la misma deficiencia peligrosa identificada en los centros de acogida de NNA, lo que sugiere una falta de mantenimiento sistémica en la infraestructura educativa/de acogida del Departamento de Potosí.
- Centro Divina Providencia (Potosí - PAM): Las cámaras de vigilancia no funcionan durante el día (supuestamente por «ruido molesto»). La vigilancia en centros de Adultos Mayores no es solo para prevenir robos, sino para prevenir caídas no atendidas, abusos entre residentes o maltrato por parte del personal. Desconectar las cámaras por comodidad deja en total desprotección a una población altamente vulnerable a accidentes y negligencias no documentadas.

1. Se identificaron al menos tres centros (Jesús Valle, Wawa wasi, Comunidad Restauración en Cristo) que operan con opacidad administrativa, sin registros de ingreso, sin mecanismos de queja, sin supervisión estatal de sus files clínicos o sin permisos de funcionamiento. Esta falta de control puede dar pie a situaciones de malos tratos en entornos de encierro.
2. La disminución documentada de la ración alimentaria en los centros del SEDEGES La Paz (IDAI, Erick Boulter, Rosaura Campos) debido a "recortes" constituye una política pública regresiva que vulnera el derecho a la integridad física. Cuando el personal debe poner dinero de su bolsillo para alimentar a los internos, el Estado ha abandonado su deber de garante.

3. La presencia de vidrios rotos en el Internado Chiru K'asa y la desactivación deliberada de cámaras de seguridad en Divina Providencia son ejemplos de negligencia en el deber de cuidado. Estos no son problemas presupuestarios complejos, sino fallas de gestión que exponen a NNA y Adultos Mayores a lesiones y abusos prevenibles.
4. Mientras que los centros de Cochabamba y Santa Cruz (GAM) muestran mayor coordinación institucional (aunque con vacíos de personal), los centros visitados en Potosí (tanto SEDEGES como privados subvencionados) muestran una fragilidad estructural: falta de ítems para personal permanente, dependencia de consultores en línea y alimentos donados.
5. En la mayoría de los centros para mujeres víctimas de violencia (Ana Medina, Wawa wasi), no existe un Protocolo de Prevención de la Tortura. Esto significa que el personal no está entrenado para identificar ni prevenir situaciones de contención física indebida, encierro en habitaciones, o trato revictimizante, situaciones que pueden ser frecuentes en este tipo de albergues.

5.1. Mujeres en Prisión: Enfoque de género, delitos de la Ley 1008, maternidad y niños acompañantes en Bolivia

Las mujeres, en situación de privación de libertad, son un grupo especialmente vulnerable por múltiples razones. La discriminación contra las mujeres a todos los

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

V ANÁLISIS DE EJES TEMÁTICOS Y POBLACIONES EN VULNERABILIDAD AGRAVADA

MNP
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Todas y todos somos
Defensores del Pueblo


PATRONCHOPOL


PENITENCIARIA
SAN PEDRO DE CHONCHOCORO
ALTO
POLICIA
SEGURIDAD
PENITENCIARIA

V ANÁLISIS DE EJES TEMÁTICOS Y POBLACIONES EN VULNERABILIDAD AGRAVADA

niveles y en todos los estratos de la sociedad se refleja, e incluso se agrava, en los establecimientos penitenciarios. Las prisiones, un universo en general concebido por los hombres para los hombres, a menudo no tienen en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, que representan una minoría poco visible de la población general de los centros penitenciarios (a nivel mundial entre el 2% y el 9% en función de estimaciones). Las políticas relativas a las mujeres detenidas también son desarrolladas normalmente por hombres y, a consecuencia de esto, la consideración hacia las necesidades específicas de las mujeres en su elaboración es insuficiente[28].

En Bolivia, la situación de las mujeres en centros penitenciarios presenta una intersección crítica entre el sistema de justicia penal, las leyes de control de drogas y el rol de cuidado familiar. Muchas mujeres que entran en confrontación con el sistema de justicia penal no han recibido educación o son analfabetas y no conocen sus derechos. El ser mujer y estar en situación de arresto o detención supone un estigma particular que, además, se suma a la angustia que viven.

La mayoría de las mujeres que ingresan en prisión son madres, y la separación de sus hijos e hijas y sus familias puede tener un impacto muy negativo en su bienestar mental. En suma, las necesidades particulares de las mujeres privadas de libertad no se suelen tener en cuenta a la hora de formular políticas, programas, y presupuestos, además que sus requisitos especiales de seguridad son ignorados con frecuencia.

Promover la integración de la perspectiva de género de manera transversal en los lugares de privación de la libertad es un proceso de largo plazo, lo que implica no sólo cambios de actitudes, políticas y prácticas en estos lugares, sino también en la sociedad en general, con el fin de lograr cambios duraderos[29].

A continuación, se detallan los puntos clave:

28 Cfr. APT Disponible en: https://www.apt.ch/es/centro-de-conocimiento/base-de-datos-sobre-detencion/mujeres

29 Asociación para la prevención de la Tortura, Mujeres privadas de libertad: una guía para el monitoreo con perspectiva de género (2013), pág. 19 Accesible en: https://www.apt.ch/sites/default/files/publications/women-in-detention-es.pdf

Delitos de la Ley 1008 y su impacto

El problema de los delitos por sustancias controladas se ha mantenido por más de una década puesto que los datos del 2012 señalaban que el quebrantamiento de la Ley por mujeres, relacionados a sustancias controladas llegaba al 56%. El 2018, el porcentaje de este tipo de delitos cometidos por mujeres llegaba al 31,62% y el 2023, el porcentaje de mujeres privadas de libertad por delitos contemplados en la Ley 1008 volvió a subir a 41,26%. Existe una clara evidencia de falencias en las acciones asumidas por el Estado para prevenir los delitos cometidos por mujeres, reflejando el endurecimiento de las penas, la falta de la aplicación de perspectiva de género en los fallos judiciales y el tratamiento diferenciado en su encarcelamiento.

La Ley N° 1008 de 19 de julio de 1988, Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, que establece delitos desproporcionados respecto al acto realizado, por ejemplo, una mujer consumidora con cantidades mínimas de marihuana podría ser sentenciada a una condena de entre 8 a 25 años, si no logra demostrar que esa cantidad de sustancia controlada es para su consumo (artículos 48, 49, 51, y 55 Ley 1008). Además de las normas deficientes, se suma la aplicación mecánica de la norma por parte de Fiscales y Jueces, sin considerar estándares internacionales de derechos humanos, como el enfoque de género y el interés superior del niño. La situación se agrava si se considera que el 65% de las mujeres están privadas de libertad sin sentencia.

Entonces la Ley 1008 (Régimen de la Coca y Sustancias Controladas es la principal causa de encarcelamiento femenino en el país.

- **Incidencia:** Aproximadamente el 60% de las mujeres privadas de libertad están procesadas por delitos bajo esta ley según datos de 2025, una cifra que ha fluctuado, pero se mantiene como la causa mayoritaria frente a otros delitos como robo o violencia.
- **Perfil del delito:**

  La mayoría son detenidas por tráfico (56%), suministro (27.3%) o transporte de sustancias (15.1%). Generalmente, ocupan los eslabones más bajos y vulnerables de la cadena del narcotráfico (como "mulas" o transportistas).
- **Rigor normativo:**

  La ley ha sido criticada por castigar con el mismo rigor a transportistas de pequeñas cantidades que a grandes traficantes, con penas que suelen oscilar entre los 10 y 25 años.

Enfoque de género en el sistema penitenciario

El sistema penitenciario boliviano enfrenta desafíos estructurales para aplicar un verdadero enfoque de género.

El Informe temático 2024 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre la situación de las mujeres privadas de libertad ya mencionó sobre algunas características relacionadas y reglas internacionales de manejo de personas privadas de libertad como que los reclusos pertenecientes a categorías distintas deberán ser alojados en establecimientos diferentes o en pabellones diferentes dentro de un mismo establecimiento, según su sexo y edad, sus antecedentes penales, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles; por consiguiente: a) los hombres serán recluidos, en la medida de lo posible, en establecimientos distintos a los de las mujeres y, en los establecimientos mixtos, el pabellón destinado a las mujeres estará completamente separado del de los hombres[30]. En los establecimientos penitenciarios para mujeres habrá instalaciones especiales para el cuidado y tratamiento de las reclusas durante su embarazo, así como durante el parto e inmediatamente después[31].

Particularmente, en lo que se refiere a las mujeres embarazadas, en período de posparto y lactancia, así como cuando son cuidadoras principales, existen abundantes normas en el derecho internacional de los derechos humanos que llaman a los Estados a asegurar espacios de alojamiento diferenciados y adaptados a sus necesidades -módulos materno-infantiles, con celdas que permanezcan abiertas y acceso a espacios al aire libre y de recreación. En caso de que sus hijos vivan en prisión deberá proveerse cunas y camas para los niños con colchones ignífugos. Asimismo, los Estados deben incorporar instalaciones especiales y adaptadas que sean apropiadas para el cuidado de niños y niñas que viven en prisión, tales como guarderías o jardines maternales, procurando que dichos espacios no tengan aspecto carcelario, sino que propicien su desarrollo integral[32].

El segundo parágrafo del artículo 75 de la Ley 2298 Ley de Ejecución Penal y Supervisión, del 20 de diciembre de 2001, dispone que los establecimientos penitenciarios se organizarán separadamente para hombres y mujeres; dicha separación responde a precautelar la seguridad de las mujeres privadas de libertad y de los niños acompañantes, la separación de la población de mujeres y varones no se cumple en todos los centros penitenciarios mixtos.

- **Hacinamiento y Espacios:**

  Las mujeres suelen ser relegadas en infraestructuras que no están diseñadas para sus necesidades específicas ni las de sus hijos, viviendo en condiciones de hacinamiento.

- **Falta de Políticas Específicas:**

  Organismos internacionales advierten que el Estado ha omitido esfuerzos históricos para integrar la perspectiva de género en las políticas criminales y de reinserción, las cuales suelen limitarse a reforzar roles domésticos tradicionales (costura, cocina) en lugar de formación profesional competitiva.

- **Medidas Alternativas:** Existe una recomendación constante de aplicar las Reglas de Bangkok[33], que sugieren medidas no privativas de libertad para mujeres con responsabilidades de cuidado, aunque su implementación sigue siendo limitada.

30 Reglas Mandela, Regla 11.

31 Reglas Mandela, Regla 28.

32 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-29/22 de 30 de mayo de 2022 solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Enfoques diferenciados respecto de determinados grupos de personas privadas de la libertad, párrafo 37.

33 Reglas de Bangkok

Maternidad	Las mujeres privadas de libertad tendrán acceso a un programa de actividades amplio y equilibrado en el que se tendrán en cuenta las necesidades propias de su sexo, así como el régimen penitenciario permitirá reaccionar con flexibilidad ante las necesidades de las mujeres embarazadas, las madres lactantes y las mujeres con hijos. En las prisiones se habilitarán servicios o se adoptarán disposiciones para el cuidado del niño/a, a fin de que las reclusas puedan participar en las actividades de la prisión y establecer programas apropiados para las embarazadas, las madres lactantes y las reclusas con hijos[34]. Los Estados deben garantizar a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario[35]. Asimismo, las privadas de libertad embarazadas o en periodo de lactancia materna recibirán asesoramiento sobre su salud y dieta en el marco de un programa que elaborará y supervisará un profesional de la salud. Se suministrará gratuitamente a las embarazadas, los bebés, los niños y las madres lactantes alimentación suficiente y puntual, en un entorno sano en que exista la posibilidad de realizar ejercicios físicos habituales y no se impedirá que las reclusas amamanten a sus hijos, a menos que existan razones sanitarias concretas para ello, por tanto, en los programas de tratamiento se tendrán en cuenta las necesidades médicas y de alimentación de las reclusas que hayan dado a luz recientemente y cuyos bebés no se encuentren con ellas en la prisión[36]. El Estado tiene un especial deber de garantizar que el acceso a la alimentación por parte de mujeres privadas de libertad en situación de embarazo, durante el parto, en el post parto, y durante la lactancia se ajuste a las necesidades de cada una de estas etapas y condiciones particulares[37].	No se ha evidenciado programas específicos para mujeres en etapa de embarazo o lactancia que se encuentren en penales.

34 Regla 42 Reglas de Bangkok

35 CEDAW en el Artículo12.

36 Regla 48 Inc. 1 Reglas de Bangkok.

37 131 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-29/22 de 30 de mayo de 2022 solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Enfoques diferenciados respecto de determinados grupos de personas privadas de la libertad, párrafo 57

Niños y niñas acompañantes

En muchos países, las y los hijos dependientes pueden permanecer con sus madres hasta una cierta edad determinada por Ley, aunque varía la edad en la que tendrán que abandonar la prisión. La separación de las y los niños de la prisión, sin una evaluación adecuada de su interés superior y sin establecer opciones disponibles para que otra persona los cuide fuera de la cárcel, puede tener consecuencias graves, tanto para la madre como para el niño o la niña, causando un inmenso sufrimiento y preocupación en la madre, y probablemente a largo plazo daños emocionales, de desarrollo, y posiblemente físicos para el niño o la niña. Las Reglas de Bangkok introdujeron normas internacionales en lo referente al proceso de toma de decisiones sobre el alejamiento de los niños y las niñas de las prisiones, en adición a las reglas referentes al tratamiento de estos en la cárcel. Las reglas requieren que antes de tomar las decisiones para sacarlos de la prisión, los casos sean evaluados de forma individual, teniendo siempre en cuenta el interés superior de las y los niños afectados y nunca sin haberse asegurado antes de que las necesidades de atención de las y los niños fuera de la prisión han sido cubiertas de forma satisfactoria[38].

Cuando los niños y niñas puedan permanecer con su madre o padre, se tomarán disposiciones para:

- Facilitar servicios internos o externos de guardería, con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por su madre o padre.
- Proporcionar servicios de atención sanitaria especiales para niños, incluidos servicios de reconocimiento médico inicial (de preferencia un pediatra) en el momento del ingreso y servicios de seguimiento constante de su desarrollo a cargo de especialistas[39].

Se suministrarán a los bebés, los niños alimentación suficiente y puntual, en un entorno sano. No se impedirá que las mujeres amamanten a sus hijos. Los Estados deben asegurar que los niños y niñas que viven en la cárcel con sus madres reciban una alimentación balanceada y nutritiva, que sea adecuada acorde a su edad y necesidades de desarrollo[40].

Se debe proveer el suministro gratuito de los implementos necesarios para que los niños puedan comer y beber y se puedan esterilizar los instrumentos utilizados por los recién nacidos[41].

Las visitas en que se lleve a niños se realizarán en un entorno propicio, incluso por lo que atañe al comportamiento del personal, y en ellas se deberá permitir el libre contacto entre la madre y su hijo o sus hijos[42].

Con relación al tema sobre los niños y niñas que acompañan a sus madres en los centros penitenciarios, la Ley 548, Código, Niño, niña y adolescente, en la Sección VII Derechos y Garantías de la niña, niño y adolescente con madre o padre privados de libertad, en su artículo 106, inciso c) refiere: En forma excepcional, la niña o niño que no alcanzó seis (6) años de edad podrá permanecer con su madre, pero en ningún caso en los establecimientos penitenciarios para hombres. En espacios aledaños a los centros penitenciarios para mujeres se deberán habilitar centros de desarrollo infantil o guarderías[43].

Si bien en las visitas realizadas por el MNP no se evidenciaron algún niño o niña mayor de 6 años, la infraestructura diseñada para esta población dentro los centros penitenciarios dejan mucho que desear incumpliendo la Ley de Ejecución Penal y Supervisión permite que niños/as menores de 6 años vivan con sus padres y madres privados/as de libertad, disponiendo que los establecimientos penitenciarios cuenten con infraestructura para su albergue en el día (guarderías) y alimentación especial adecuada a su edad sobre esta situación específica, en ningún penal con población femenina existe una alimentación diferenciada y tampoco existe un "pre diario" para estos niños que cubra esta necesidad, ni las Gobernaciones ni la administración penitenciaria asumen esta responsabilidad, por lo que son las propias madres quienes cocinan los alimentos para estos niños. En relación a su vestimenta, de igual manera, son las mismas madres las que cubren esa necesidad, en algunos casos son ellas las que tejen su atuendo o reciben algún tipo de donativo.

En resumen, Bolivia es uno de los pocos países que permite legalmente la permanencia de niños dentro de los recintos penitenciarios bajo ciertas condiciones

A finales de 2025, se reportaron aproximadamente 190 niños viviendo en cárceles bolivianas

- Aunque se busca preservar el vínculo materno, los niños crecen en entornos de precariedad, falta de espacios recreativos adecuados y deficiencias en servicios de salud y alimentación especializada.

38 Reglas de Bangkok, Regla 52

39 Reglas Mandela, Regla 29.1, leer en conjunto con la Regla Bangkok 9 y el Principio X (párrafos quinto y sexto).

40 ONU, Observación General N° 15 sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 24), CRC/C/GC/15, 2013, párrafos 43 a 45.

41 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-29/22 de 30 de mayo de 2022 solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Enfoques diferenciados respecto de determinados grupos de personas privadas de la libertad, párrafo 213.

42 Ibíd. Regla 28.

43 Ley 548 "Código Niño, niña y adolescente, 2014. Sección VII Derechos y Garantías de la niña, niño y adolescente con madre o padre privados de libertad, en su artículo 106, inciso c). Disponible en: https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/ Ley_548-2014.pdf

5.2. Población Juvenil.

En Bolivia, la situación de los jóvenes privados de libertad se constituye en un desafío estructural en materia de derechos humanos, justicia penal juvenil y políticas públicas de rehabilitación. Esta población, en su mayoría proveniente de contextos de exclusión social, económica y educativa, enfrenta condiciones penitenciarias marcadas por el hacinamiento, acceso limitado a servicios esenciales, deficiencias estructurales en salud, educación y empleo, además de frecuentes vulneraciones a sus derechos fundamentales. A pesar de que los jóvenes representan cerca del 30% de la población penitenciaria, sus necesidades específicas no fueron abordadas con la debida prioridad en las políticas estatales.

La Ley de la Juventud (Ley No. 342) establece el término "juventud" a las personas entre 16 y 28 años de edad[44]. Si bien la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ) define este rango entre 15 y 24 años[45], el Protocolo Adicional a la CIDJ permite a los Estados Parte "extender la aplicación de la Convención de forma unilateral más allá del rango etario de 15 a 24 años, a efectos de adaptarlo a las circunstancias legales y demográficas de cada Estado"[46]. Por lo tanto, la Ley de la Juventud de Bolivia se alinea con esta flexibilidad, entre 18 hasta los 28 años. Esta etapa está marcada por una transición crítica hacia la vida adulta, condicionada por una alta precariedad laboral, un marco jurídico protector, pero de difícil aplicación y brechas educativas persistentes según el área geográfica[47].

A nivel internacional, los derechos de los jóvenes privados de libertad están protegidos por diversos instrumentos, tales como:

- L***as Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos,*** *también conocidas como las Reglas Nelson Mandela*[48], establecen principios fundamentales como el derecho a un trato digno y humano, libre de tortura y malos tratos, tal como lo especifican las Reglas 1 y 5. En complemento, estas reglas subrayan la importancia de la rehabilitación, obligando a implementar programas de formación laboral y trabajo remunerado que preparen a los jóvenes para su reinserción social (Reglas 96, 98 y 103), los cuales, deben estar alineados con las demandas del mercado laboral, ofrecer una remuneración justa y carecer de carácter aflictivo o degradante. Asimismo, la Regla 104 reconoce el derecho al acceso a educación formal, técnica y superior dentro de los centros penitenciarios, asegurando la continuidad de estos programas una vez recuperada la libertad.
- La ***Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ) del 2005,*** es un tratado internacional que profundiza su atención en las garantías procesales y de tratamiento. Su artículo 13, inciso 2, dispone que los Estados Parte deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar una

44 Arts. 4 y 7 numeral 1 de la Ley N° 342 de 5 de febrero de 2013 Ley de la Juventud.

45 Artículo 1 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ).

46 Art. 1 del Protocolo Adicional de la CIDJ.

47 Informe Jóvenes MNP – DP 2025.

48 Aprobada por la Asamblea General el 17 de diciembre de 2015, mediante Resolución 70/175.

legislación procesal que considere la condición juvenil, asegurando el ejercicio efectivo del derecho a la justicia y todas las garantías del debido proceso; el inciso 3 -del mismo artículo- enfatiza que los jóvenes condenados por una infracción penal tienen derecho a un tratamiento digno que fomente su respeto por los derechos humanos, teniendo en cuenta su edad y la necesidad de promover su resocialización, a través de medidas alternativas al cumplimiento de la pena. Adicionalmente, el inciso 5 del artículo 13, exige a los Estados Parte aseguren que los jóvenes en prisión cuenten con un espacio y condiciones humanas dignas en el centro de internamiento. En cumplimiento de esta Convención, el Estado boliviano debe garantizar condiciones de vida adecuadas, evitando el hacinamiento y asegurando la separación de la población penal adulta.

Ahora a nivel nacional se cuenta con:

- L***a Constitución Política del Estado Boliviano*** establece el derecho a un trato digno y humano, libre de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes (TCID), en sus artículos 15 (I), 73 y 114; y reconoce el derecho de los jóvenes a acceder a educación formal, técnica y superior dentro de los centros penitenciarios, con programas que permitan su continuidad una vez recuperada la libertad, así como lo establece el artículo 74.
- L***a Ley de Ejecución Penal y Supervisión (Ley No. 2298 de 20 de diciembre de 2001)*** contempla el derecho a un trato digno y humano, exento de cualquier tipo de tortura, según el artículo 5; asimismo, en los artículos 181 y 182, establece la obligación de implementar programas de formación laboral y trabajo remunerado, cruciales para la reinserción social. Por su parte, el artículo 188 reconoce el derecho al acceso a la educación formal, técnica y superior dentro de los centros penitenciarios.
- L***a Ley de la Juventud (Ley No. 342 de 5 de febrero de 2013),*** aporta especificidades para esta población. Su artículo 28, manda al Estado a facilitar mecanismos de reintegración social y laboral, incluyendo seguimiento psicosocial, acceso a empleo y apoyo económico para emprendimientos; y promueve el trato digno, igualitario y, a la vez, diferenciado entre la población penitenciaria. Del mismo modo, garantiza a los jóvenes en conflicto con la ley el derecho a comunicarse libremente con su defensor y sus familiares, a ser tratados con respeto y dignidad humana, y a acceder en igualdad de condiciones a una justicia pronta, oportuna y con el debido proceso, de acuerdo con las normas vigentes, según lo señala el artículo 53.

Un dato alarmante es que el 75.6% de los jóvenes privados de libertad se encuentra bajo detención preventiva, lo que evidencia una afectación desproporcionada de la justicia penal hacia este grupo.

5.3. Problemas estructurales que atraviesan los privados de libertad.

a) Barreras Educativas

El acceso a la educación para las personas privadas de libertad, y en particular para los jóvenes, es un derecho fundamental garantizado por la Constitución, diversas leyes y reglamentos internacionales. La norma fundamental, establece la educación como una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, con la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla[49]. Específicamente, las personas privadas de libertad "tendrán la oportunidad de trabajar y estudiar en los centros penitenciarios"[50], y la finalidad de las sanciones privativas de libertad está orientada a la educación[51]. La educación debe ser universal, participativa y de calidad, incluyendo la formación vocacional y la enseñanza técnica humanística[52].

La Ley de Ejecución Penal y Supervisión, en su Artículo 188, reitera el derecho al acceso a la educación formal, técnica y superior dentro de los centros penitenciarios. Impone la obligatoriedad de la alfabetización y enseñanza básica para quienes no la tuvieren, y exige que cada establecimiento penitenciario cuente mínimamente con cursos de alfabetización, enseñanza básica y ramas de capacitación técnica de funcionamiento permanente.

Además, los planes de enseñanza deben corresponder a los programas oficialmente establecidos en el país para su reconocimiento válido al egreso, y los certificados y diplomas no deben contener alusión a la permanencia en prisión[53]. Además, la Ley de la Juventud establece como finalidad el logro de una formación y desarrollo integral para los jóvenes[54]. Entre los derechos sociales de los jóvenes se encuentra reconocida la educación y formación integral, gratuita, humana, productiva y alternativa[55].

Las Reglas Nelson Mandela refuerzan que los objetivos de las penas privativas de libertad son principalmente proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia, lo cual solo puede lograrse si se aprovecha el período de privación de libertad para la reinserción de los privados de libertad en la sociedad. Para ello, las administraciones penitenciarias deben ofrecer educación, formación profesional y trabajo, junto con otras formas de asistencia apropiadas y disponibles[56]. Además, el régimen penitenciario debe procurar reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y en libertad que tiendan a debilitar el sentido de responsabilidad o el respeto a la dignidad humana del recluso[57].

49 Art. 77 y 9, numeral 5 de la CPE.
50 Art. 74 de la CPE.
51 Art. 118 parágrafo III de la CPE
52 Art. 78 parágrafos I y IV de la CPE.
53 Arts. 191 y 193 de la Ley No. 2298
54 Art. 3 de la Ley No. 342.
55 Art. 11 numeral 11 de la Ley 342.
56 eglas Mandela 4.
57 Reglas Mandela 5.

b) Salud y Alimentación: Acceso a atención médica especializada y deficiencias en el sistema de pre-diarios en Bolivia

En Bolivia, el sistema penitenciario atraviesa una crisis estructural profunda, marcada por el hacinamiento extremo y la insolvencia financiera para cubrir necesidades básicas como la alimentación y la salud especializada.

En lo que respecta a la alimentación, este se cubre con el denominado "prediario" que se ha fijado en la suma de Bs. 8 00/100 (ocho Bolivianos 00/100), destinado a cubrir las tres comidas diarias de cada persona privada de libertad, empero, la sobrepoblación y el hacinamiento en los centros penitenciarios no solo deterioran gravemente las condiciones de vida de este grupo en situación de vulnerabilidad, también agravan problemas estructurales como la deficiencia en la alimentación. Esta situación genera un aumento sostenido de la conflictividad dentro de los recintos carcelarios, impulsada principalmente por el impago de los prediarios, que son los recursos destinados a la alimentación diaria de los internos y cuya responsabilidad recae en las gobernaciones departamentales.

Durante 2025, la Defensoría del Pueblo ha registrado al menos cuatro conflictos penitenciarios directamente vinculados a esta problemática[58].

Las Gobernación justificó el impago alegando recortes en el presupuesto de seguridad ciudadana por parte del gobierno central, así como la falta de conciliación de cuentas. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas informó públicamente que los depósitos correspondientes ya fueron efectuados, lo que evidencia una falta de coordinación entre niveles de gobierno[59].

A pesar de los esfuerzos se debe concluir que respecto al prediario que:

- **Monto Insuficiente:** El valor de Bs 8 se mantiene congelado a pesar del incremento en el costo de vida, lo cual es denunciado por la Defensoría del Pueblo como MNP como insuficiente para una nutrición digna.
- **Retrasos Crónicos:** Para finales de 2025 y principios de 2026, se han reportado retrasos de hasta **cinco meses** en el pago de prediarios en departamentos como La Paz, Chuquisaca y Beni.
- **Causas de la Crisis:** Las gobernaciones atribuyen la falta de pago a la disminución de transferencias del nivel central (recursos del IDH) y a una sobrepoblación que ha llegado a **33,058 internos** en 2025 (un aumento del 100% respecto a 2020).
- **Impacto Social:** El impago ha forzado a los internos a "hipotecar" sus futuros prediarios con proveedores internos o depender de la caridad externa para sobrevivir.

58 Pronunciamiento: Defensoría del Pueblo exige al Estado cumplir con los prediarios en centros penitenciarios. Visto en: https://www.defensoria.gob.bo/noticias/defensoria-del-pueblo-exige-alestado- cumplir-con-los-prediarios-en-centros-penitenciarios

59 Pronunciamiento: Defensoría del Pueblo demanda al Estado y a las gobernaciones atención urgente a la problemática de los prediarios en los centros penitenciarios. Visto en: https://www.defensoria.gob.bo/noticias/defensoria-del-pueblo-demanda-al-estado-y-a-las-gobernacionesatencion- urgente-a-la-problematica-de-los-prediarios-en-los-centros-penitenciarios.

En lo que respecta a la atención médica, se puede señalar que el hacinamiento en los centros penitenciarios agrava significativamente las condiciones de salud de la población privada de libertad. **Para las más de 33 mil personas que se encuentran recluidas existen apenas 45 médicos, 16 odontólogos, 3 psiquiatras y 22 psicólogos**[60] que intentan cubrir las necesidades de atención médica, lo que resulta claramente insuficiente. Como consecuencia directa de esta saturación y del limitado acceso a servicios de salud, se estima que el 90.64% de muertes en custodia en centros penitenciarios son por enfermedad[61]. El hacinamiento no solo facilita la propagación de enfermedades, también impide una atención oportuna y adecuada, poniendo en riesgo constante la vida y la dignidad de los internos.

Mejorar acceso al derecho a la salud, garantizando más personal médico o más convenios con hospitales que puedan brindar servicio ambulatorio en cárceles (incluso a través del apoyo de estudiantes de medicina, odontología y otras áreas médicas) se hace urgente y necesario.

Asimismo, se debe garantizar el examen médico inicial máximo dentro de las primeras 48 horas de ingreso al centro penitenciario, que permita identificar cualquier enfermedad o lesión, de modo que pueda darse el tratamiento correspondiente o su continuidad, evitando así muertes por enfermedades.

Por lo señalado respecto a la atención de salud se concluye que:

- **Escasez de Personal:** A nivel nacional, solo se cuenta con un personal total de **86 profesional** de la salud para atender a más de 33,000 internos, lo que representa un déficit crítico de especialistas.
- **Carencia de Servicios Básicos:** En la mayoría de los recintos urbanos y provinciales no existen ambulancias, medicamentos básicos ni equipos de diagnóstico.
- **Barreras para Especialidades:** El acceso a ginecología, pediatría (para niños que viven en cárceles) y psiquiatría es casi inexistente, obligando a los internos a buscar atención externa mediante trámites burocráticos lentos que ponen en riesgo su vida.
- **Enfermedades Crónicas:** Existe una alta prevalencia de tuberculosis, VIH y enfermedades respiratorias que no reciben seguimiento adecuado, convirtiendo a los penales en focos de riesgo epidemiológico.

c) Trabajo: Oferta técnica intrapenitenciaria y acceso a unidades productivas.

60 Cantidad de Médicos y personal de salud: Informe DGRP/ASR y RS N° 020/2025, emitido por la Encargada Nacional de Salud, Reinserción Social y Post Penitenciario de la DGRP, Dra. Mariana García Vargas. Los datos de dicho informe, se encuentran incluidos en el Diagnostico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad. https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/diagnosticonacional- de-poblacion-juvenil-privada-de-libertad.pdf

61 Muertes en custodia gestión 2024: CITE DGRP - COMP N° 110/2025 del 14 de abril de 2025, emitido por José Luis Gerrero Yujra, Técnico V, Dirección General de Régimen Penitenciario - Ministerio De Gobierno.

Como se dijo anteriormente la educación es un derecho fundamental de la persona protegido constitucionalmente, empero en el ámbito penitenciario se convierte en fundamental, debido a que la norma fundamental ha establecido que la privación de libertad tiene por fin la reinserción de la persona en la sociedad y no solo un castigo por la conducta anti jurídica asumida

La educación es un derecho humano que no se suspende con la privación de libertad. Pero para que ese derecho sea efectivo, debe existir infraestructura adecuada: aulas, mobiliario, iluminación, ventilación, materiales y tecnologías mínimas. Sin condiciones físicas básicas, el derecho queda en un plano meramente formal. La infraestructura condiciona directamente la cantidad de personas que pueden acceder a programas educativos y la calidad de los mismos. Por ejemplo, un centro con solo una o dos aulas para cientos de personas privadas de libertad no puede cubrir adecuadamente la demanda educativa.

Un diagnóstico de infraestructura permite identificar desequilibrios entre centros penitenciarios y departamentos, y detectar dónde se requiere inversión urgente. Esto ayuda a orientar políticas públicas de manera más justa y eficiente. Además, la educación en condiciones de encierro no solo transmite conocimientos: es una herramienta clave para la reintegración social, la reducción de la reincidencia y el desarrollo de proyectos de vida alternativos. Pero estos objetivos solo se alcanzan si hay infraestructura que lo permita.

Por último, tanto la normativa nacional como los estándares internacionales obligan al Estado a garantizar condiciones adecuadas para la educación en centros penitenciarios.

Durante las visitas no anunciadas, realizadas por el MNP a centros penitenciarios en todo el país, se identificó la deficiente infraestructura penitenciaria y la existencia de programas de reinserción social limitados. Aunque se han llevado a cabo algunas refacciones y ampliaciones en determinados recintos, estas mejoras han sido posibles, en su mayoría, gracias a los aportes voluntarios de las propias PPLs, así como al apoyo de iglesias y organizaciones no gubernamentales (ONGs). Llama la atención la ausencia de inversión estatal, lo cual refleja una clara limitación por parte del Estado en el cumplimiento de sus responsabilidades sobre el sistema penitenciario.

El estudio y el trabajo son reconocidos como pilares esenciales para la rehabilitación y reinserción social de las PPLs. Para los jóvenes, esta etapa es aún más crítica, ya que están en proceso de formación personal y social. La normativa boliviana y los instrumentos internacionales establecen un marco que, sin embargo, enfrenta desafíos significativos en su aplicación práctica.

Durante 2025, la Dirección General de Régimen Penitenciario, señaló que se ha registrado la participación de 1.232 privados de libertad en actividades económicas como “panadería, carpintería, cerrajeros, textiles y otros microemprendimientos” y que “su participación es completamente voluntaria y depende de sus intereses y habilidades”[62]

Esta afirmación destaca una cifra baja de participación en diversas actividades productivas, lo cual no deja de ser un aspecto positivo en el contexto del encarcelamiento. Sin embargo, el énfasis en que la participación es “completamente voluntaria y depende

62 Informe DGRP/ASRyRS No. 020/2025, emitido por la Encargada Nacional de Salud, Reinserción social y post penitenciario de la DGRP, Dra. Mariana García Vargas.

de sus intereses y habilidades" es decisiva. Por un lado, está en línea con las Reglas Nelson Mandela, que prohíben el trabajo aflictivo o forzado y garantizan que los PPLs no sean sometidos a servidumbre. Por otro lado, esta voluntariedad y dependencia de las habilidades preexistentes o intereses propios puede explicar la falta de una oferta formal y estructurada.

El análisis de la oferta laboral dentro de los centros penitenciarios evidencia una preocupante ausencia de políticas públicas estructuradas y sostenibles que garanticen el derecho al trabajo como parte integral del proceso de rehabilitación y reinserción social. La admisión oficial de que no existe una oferta formal de actividades laborales o productivas demuestra que el Estado ha delegado, de forma implícita, esta responsabilidad a la iniciativa individual de los propios PPLs. Si bien su creatividad y organización interna pueden generar microemprendimientos y espacios productivos, esto no sustituye la obligación estatal de diseñar e implementar programas laborales adecuados, inclusivos y con enfoque formativo.

En suma, la falta de una oferta laboral formal y planificada refleja una omisión grave en el cumplimiento del mandato estatal de asegurar condiciones dignas durante el cumplimiento de la pena. No basta con que las actividades económicas sean "permitidas" o "no prohibidas"; es necesario que el Estado las promueva activamente como parte de una estrategia integral de reinserción, brindando infraestructura, formación, certificación, acompañamiento técnico y mecanismos de inserción laboral post-penitenciaria. Mientras no se avance en esa dirección, el derecho al trabajo de los jóvenes privados de libertad seguirá siendo meramente formal y subordinado a condiciones desiguales de autogestión.

Es importante también señalar que tomar conocimiento de cuántos privados de libertad han adquirido conocimientos técnicos durante su permanencia en los centros penitenciarios, así como identificar los oficios aprendidos, es fundamental desde una perspectiva de derechos humanos, rehabilitación y reinserción social. Esta información permite evaluar en qué medida el Estado garantiza el acceso efectivo al derecho a la educación y al trabajo en contextos de encierro, y cómo estas experiencias formativas pueden incidir en la construcción de proyectos de vida más estables una vez concluida la reclusión.

No obstante, es importante precisar que gran parte de los conocimientos técnicos adquiridos por las personas privadas de libertad no provienen necesariamente de programas de formación estructurados o certificados por instituciones del Estado, sino que muchas veces surgen del propio interés ellos y ellas, del aprendizaje entre pares o de actividades desarrolladas en las denominadas unidades productivas.

La formación técnica se canaliza principalmente a través de:

- **Centros de Educación Alternativa (CEA)** que operan dentro de los recintos.
- **Bachillerato Técnico Humanístico (BTH):** Permite a los internos obtener una especialización técnica junto con su título de bachiller.
- **Certificación de Competencias:** El Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias (SPCC) reconoce formalmente los oficios aprendidos por los internos de forma empírica en los talleres.

Por información otorgada de la Encargada Nacional de Salud, Reinserción Social y Post Penitenciario, se conoció que "varios jóvenes han adquirido habilidades en oficios como panadería, carpintería, horticultura, marroquinería y otros servicios" mediante su participación en unidades productivas, aunque también admitió que no se cuenta con registros sistematizados por centro penitenciario sobre la cantidad exacta de capacitados. Esta falta de información oficial limita la posibilidad de diseñar políticas públicas basadas en evidencia y orientadas a fortalecer la formación técnico-laboral dentro de los penales.

Ante esta carencia de datos oficiales, se preguntó directamente a los jóvenes si habían aprendido algún oficio durante su reclusión y el 71% respondió afirmativamente, mientras que el 29% indicó que no había adquirido ninguna habilidad técnica en el encierro. Sin embargo, esta afirmación debe entenderse con cautela: en muchos casos, los oficios mencionados no se derivan de procesos formativos sistemáticos, sino de estrategias de sobrevivencia desarrolladas en condiciones precarias.

Las respuestas fueron diversas, destacando en primer lugar la "artesanía" (27,27%), seguida por "tejido" (14,44%), "carpintería" (11,76%), "cocina" (10,16%), "sastrería" (4,81%) y "costura" (4,28%), entre otros. La mayoría de estas actividades son de carácter manual, lo cual refleja tanto la creatividad como las limitaciones del entorno penitenciario. Esta realidad evidencia la urgencia de ampliar y diversificar la oferta formativa en los centros penitenciarios, con programas que respondan a los intereses y capacidades de los jóvenes, que cuenten con respaldo institucional y que les permitan acceder a certificaciones formales, facilitando así su futura inserción laboral en condiciones más dignas y equitativas.

En resumen, la ausencia de políticas públicas estructuradas y sostenidas en el ámbito de la formación técnico-laboral para personas privadas de libertad, especialmente jóvenes, evidencia una omisión del Estado en el cumplimiento de su obligación de garantizar el derecho a la educación en contextos de encierro. Aunque se constata que muchos jóvenes aprenden oficios durante su reclusión, esto no es el resultado de una oferta estatal planificada y con estándares de calidad, sino más bien de iniciativas individuales o informales entre internos[63].

d) Disciplina y Aislamiento: Uso de celdas de castigo, régimen disciplinario y vulneración de derechos en aislamiento

En el Estado Plurinacional de Bolivia, el uso de celdas de castigo y el régimen de aislamiento están regulados principalmente por la Ley N° 2298 de Ejecución Penal y Supervisión. No obstante, como Defensoría del Pueblo en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) viene alertando sobre **vulneraciones sistemáticas** debido a condiciones infrahumanas y falta de control judicial.

63 Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad – 2025.

La norma fundamental establece que "*toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana*"[64], además, prohíbe "toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral", señalando que los servidores públicos o autoridades que las apliquen o consientan serán destituidos y sancionados[65].

La Ley N° 2298 prohíbe explícitamente al personal penitenciario "infligir torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes al interno" o "emplear violencia física o moral" a los internos o sus familiares, salvo el uso de fuerza indispensable para mantener el orden y la seguridad[66]. La señalada norma establece que el régimen disciplinario busca garantizar la seguridad y la convivencia pacífica, siendo sus pilares:

- **Finalidad:** Estimular el sentido de responsabilidad y autocontrol para la readaptación social.
- **Restricciones de Aislamiento:** Debe ser una medida de **último recurso**, limitada en el tiempo y necesaria para la seguridad interna.
- **Prohibiciones:** Está estrictamente prohibido el aislamiento para **mujeres embarazadas**, madres que viven con sus hijos en el penal y menores de edad.
- **Condiciones mínimas:** Los reclusos en aislamiento deben mantener contacto humano regular, actividad física exterior y estímulos ambientales.

Sin embargo, los hallazgos sobre las condiciones de las celdas de aislamiento en los centros penitenciarios bolivianos revelan una grave contradicción entre la normativa vigente y la práctica institucional. Aunque la Constitución Política del Estado, la Ley N° 2298 y diversos instrumentos internacionales como las Reglas Nelson Mandela y la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíben expresamente los tratos crueles, inhumanos o degradantes, la evidencia recopilada demuestra que muchas celdas de aislamiento operan bajo condiciones que podrían constituir formas de violencia institucional.

Algunos abusos detectados por el MNP en informes pasados revelan:

- **Infraestructura Degradante:** Se han detectado celdas denominadas "subsuelos" o "La Tapa", "Botes" que carecen de catreras, ventilación adecuada y luz natural. En algunos casos, los espacios son de apenas 1x2 metros, estas condiciones se agravan cuando el aislamiento se aplica de manera colectiva, como ocurre en varios recintos donde más de 10 personas comparten un espacio destinado.
- **Tratos Inhumanos:** El aislamiento prolongado se ha vinculado con trastornos, inducción al suicidio, perturbaciones y pérdida de hábitos sociales. Pudiéndose constituirse fácilmente en **tortura o tratos crueles**.

64 Art. 73 de la CPE.

65 Art. 114 de la CPE.

66 Art. 74 de la Ley 2298.

- **Falta de Atención Médica:** Como ya se refirió, existe una carencia severa de personal de salud lo que agrava la situación de quienes están aislados.
- **Hacinamiento Crítico:** Con un excedente de población superior al **105%**, el uso de celdas de castigo a menudo se desvía de su fin disciplinario para convertirse en espacios de extorsión o control arbitrario por parte de delegados o guardias.
- El uso de celdas de aislamiento en condiciones degradantes, particularmente hacia jóvenes, mujeres, personas con discapacidad o problemas de salud, no solo constituye una violación al marco normativo nacional, sino también una práctica incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos. Se requiere, por tanto, una revisión profunda de las prácticas penitenciarias, la implementación de mecanismos de supervisión externos y la prohibición expresa del aislamiento para personas en situación de vulnerabilidad, a fin de evitar que esta medida se convierta en una forma encubierta de tortura o castigo arbitrario.


DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MNP
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
Todas y todos somos
Defensores del Pueblo
www.defensoria.gob.bo


UNIDOS POR LA SEGURIDAD
MNP
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

VI PREVENCIÓN DE LA IMPUNIDAD Y ATRIBUCIONES ADICIONALES

MNP
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Todas y todos somos
Defensores del Pueblo


FATESCIPOL - EL ALTO
PERSONAL FATESCIPOL
VISITAS


FATESCIPOL

VI PREVENCIÓN DE LA IMPUNIDAD Y ATRIBUCIONES ADICIONALES

6.1. Monitoreo de casos por tortura y malos tratos en el Sistema de Servicio al Pueblo (SSP)

Durante toda la gestión 2025, se ha efectuado el monitoreo de la atención de casos registrados en el Sistema de Servicio al Pueblo (SSP) de la Defensoría del Pueblo por presuntos hechos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a nivel nacional; las cuales se desarrollaron otorgando asesoramiento del equipo nacional del MNP en las temáticas, legal, médica y psicológica, según la necesidad de cada consulta.

Se registraron **148 casos posibles y de los cuales 5 están aún vigentes** y con características específicas de las conductas para tortura y malos tratos.

De los casos registrados se identificó que los actos de tortura muestran los siguientes indicadores:

Detenciones abusivas, por policías ya sea por abuso de poder en el momento del arresto o aprehensión (1 casos).

En centros penitenciarios por castigo, control o represalias (2 casos).

En establecimientos Militares, las prácticas más frecuentes se presentan por parte de los instructores con abuso o exceso de ejercicios (2 casos)

6.2. Análisis de procesos penales por tortura y obstáculos judiciales

La Ley N° 1397 de 29 de septiembre de 2021 que designa a la Defensoría del Pueblo como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Estado Plurinacional de Bolivia (MNP), establece como atribuciones del MNP realizar seguimientos a investigaciones y procesos por tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en ese sentido, durante la gestión 2025 el MNP realizó el seguimiento a casos de posible tortura, reflejados relacionados con presuntos hechos de tortura, que se tramitan ante el Ministerio Público y el Órgano Judicial a nivel nacional y son de conocimiento del MNP, provienen en su mayoría del Servicio para la Prevención de la Tortura (SEPRET), instancia predecesora del MNP.

Se tiene un registro de 43 casos en diverso estado, sin embargo luego del análisis legal correspondiente se evidencia que muchos de ellos deben ajustarse a la regulación específica del MNP, en particular, el Artículo 57, relativo a los criterios de excepcionalidad y los requisitos para el patrocinio en casos de tortura y malos tratos; al Artículo 58, sobre

el informe de admisibilidad para patrocinio; el Artículo 59, relativo a la proposición y patrocinio legal de la víctima; y el Artículo 60, que regula la designación como abogado de patrocinio.

Por otra parte, los tramites en conocimiento de la Procuraduría General del Estado deben ingresar a una revisión de antecedentes, gestionar el patrocinio del SEPDAVI en los tramites que correspondan y dar seguimiento a los mismos, sin que la Defensoría del Pueblo a través del MNP, se constituya en parte, garantizando cumplimiento normativo y evitando responsabilidades legales.

Los tramites que actualmente se encuentran sin movimiento, deben ser sometidos a una revisión de sus antecedentes en cada caso, gestionar el patrocinio legal ante el SEPDAVI según corresponda y dar seguimiento a los trámites, asegurando cumplimiento de plazos y normativa del MNP, sin que la Defensoría del Pueblo se constituya en parte del proceso.

Por último, respecto a los trámites provenientes del SEPRET, se sugiere que, previa revisión de los tramites, se reitere el apersonamiento, se solicite el cumplimiento de plazos, se gestione el patrocinio legal del SEPDAVI y, de ser pertinente, se continúe con el seguimiento de los trámites correspondientes de acuerdo a la norma; sin que la DP se constituya en parte, garantizando cumplimiento normativo y evitando responsabilidades legales.

6.3. Implementación de los Protocolos de Estambul y Minnesota

Desde el MNP se han realizado varias gestiones para la realización de estos dos protocolos importantes ya que tienen el objetivo de proporcionar al personal que trabaja en defensa de los Derechos Humanos, peritos, miembros del Ministerio Público y del Órgano Judicial, herramientas prácticas que orienten las investigaciones y documentación en caso de tortura y muertes que puedan haber ocurrido como resultado de violaciones a los derechos humanos, como la tortura, ejecuciones extrajudiciales, o negligencia grave por parte del Estado.

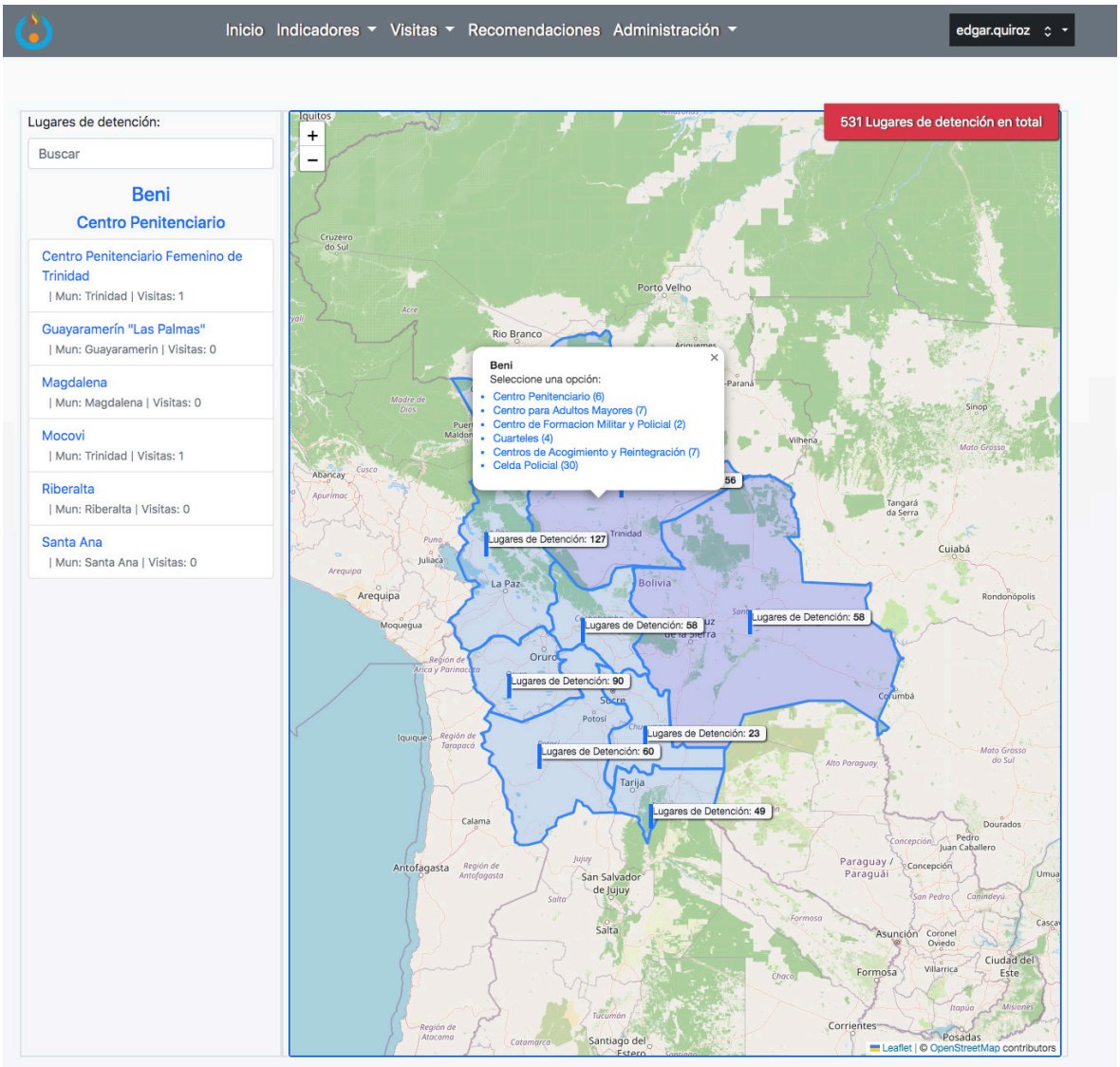
En este entendido tanto el Protocolo de Estambul y el Protocolo de Minnesota son herramientas cruciales que garantizan rendición de cuentas y verdad frente a muertes o lesiones que pueden involucrar responsabilidad estatal. Su aplicación efectiva fortalece el Estado de Derecho, protege a personas privadas de libertad, y envía un mensaje claro contra la impunidad. Los mecanismos de monitoreo como los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura (MNP) debemos seguir promoviendo su implementación desde el Ministerio Público y el Instituto de Investigaciones Forenses como parte de una política integral de prevención de violaciones graves a los derechos humanos.

Durante la gestión 2025 se han realizado acciones tendientes que el IDIF debe adoptar las guías de la ONU para asegurar que los informes no solo cumplan con el código de salud boliviano, sino con la estandarización científica que ayuda a las familias y a la justicia. Exigir que el IDIF se fortalezca con capacitación continua de su personal médico para asegurar que el registro de evidencias (fotos, rayos X, cadena de custodia, etc.) sea impecable conforme al Protocolo es una tarea pendiente.

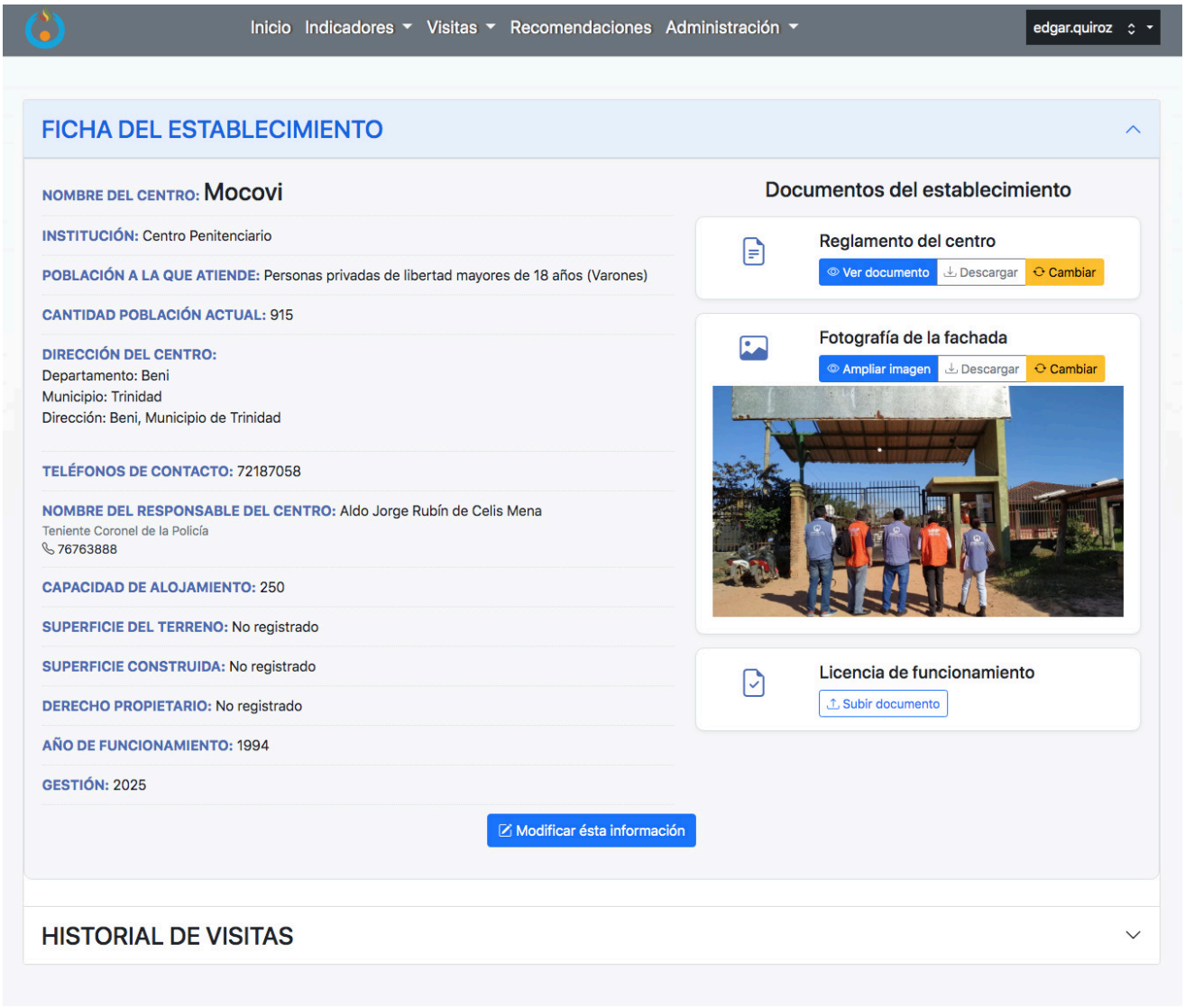
6.4. Sistema de Información del MNP e interoperabilidad de datos

A partir de la ejecución del "Plan de visitas preventivas realizadas por el MNP" a lugares de privación de libertad y la solicitud de información a diferentes instituciones, el Sistema Informático del MNP se va alimentando con mayor información, otorgando de manera preliminar resultados y datos estadísticos de las actividades realizadas.

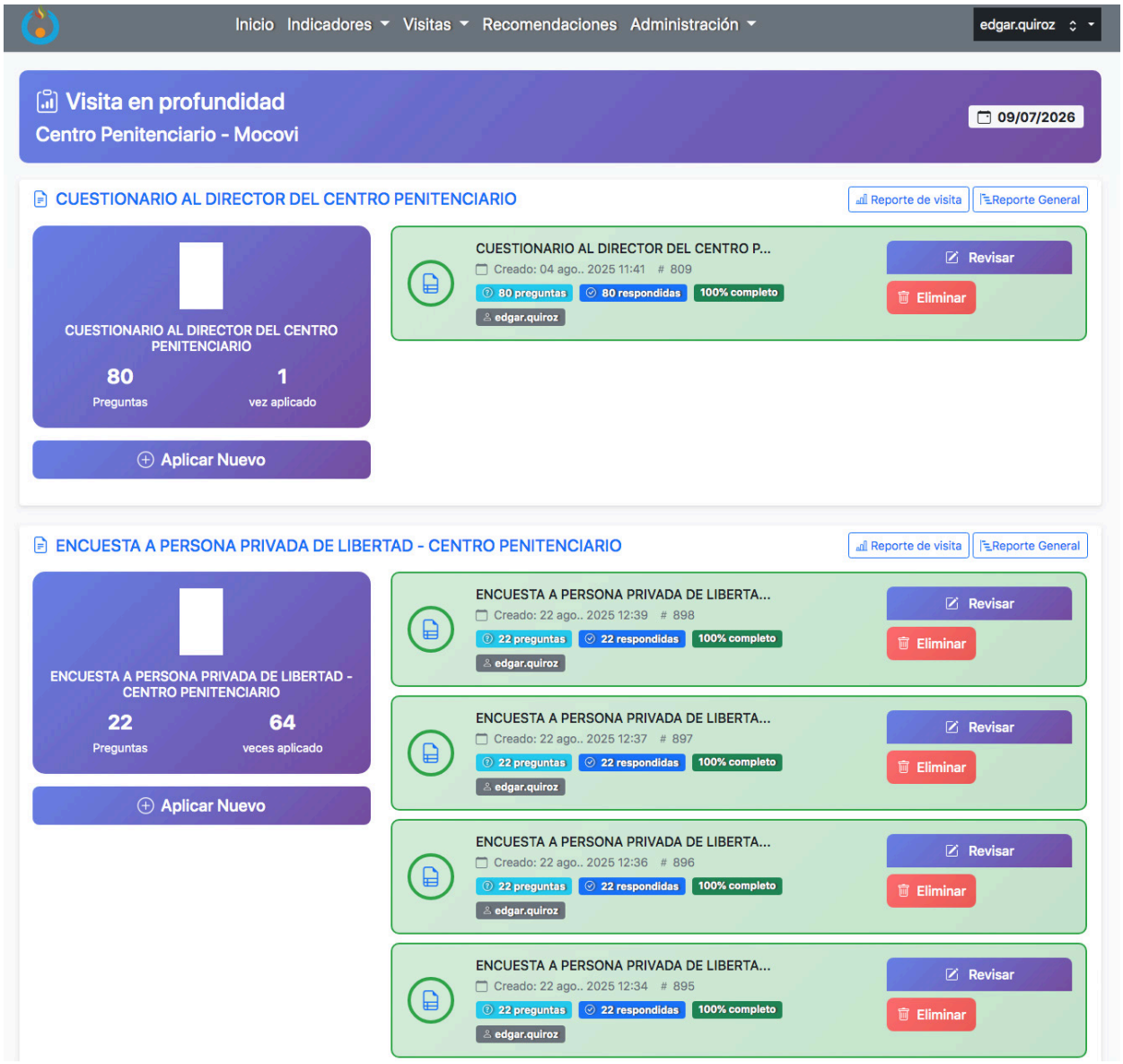
A continuación, se mencionan algunos avances realizados en la gestión 2025 en las diferentes pestañas del Sistema Informático del MNP Bolivia:



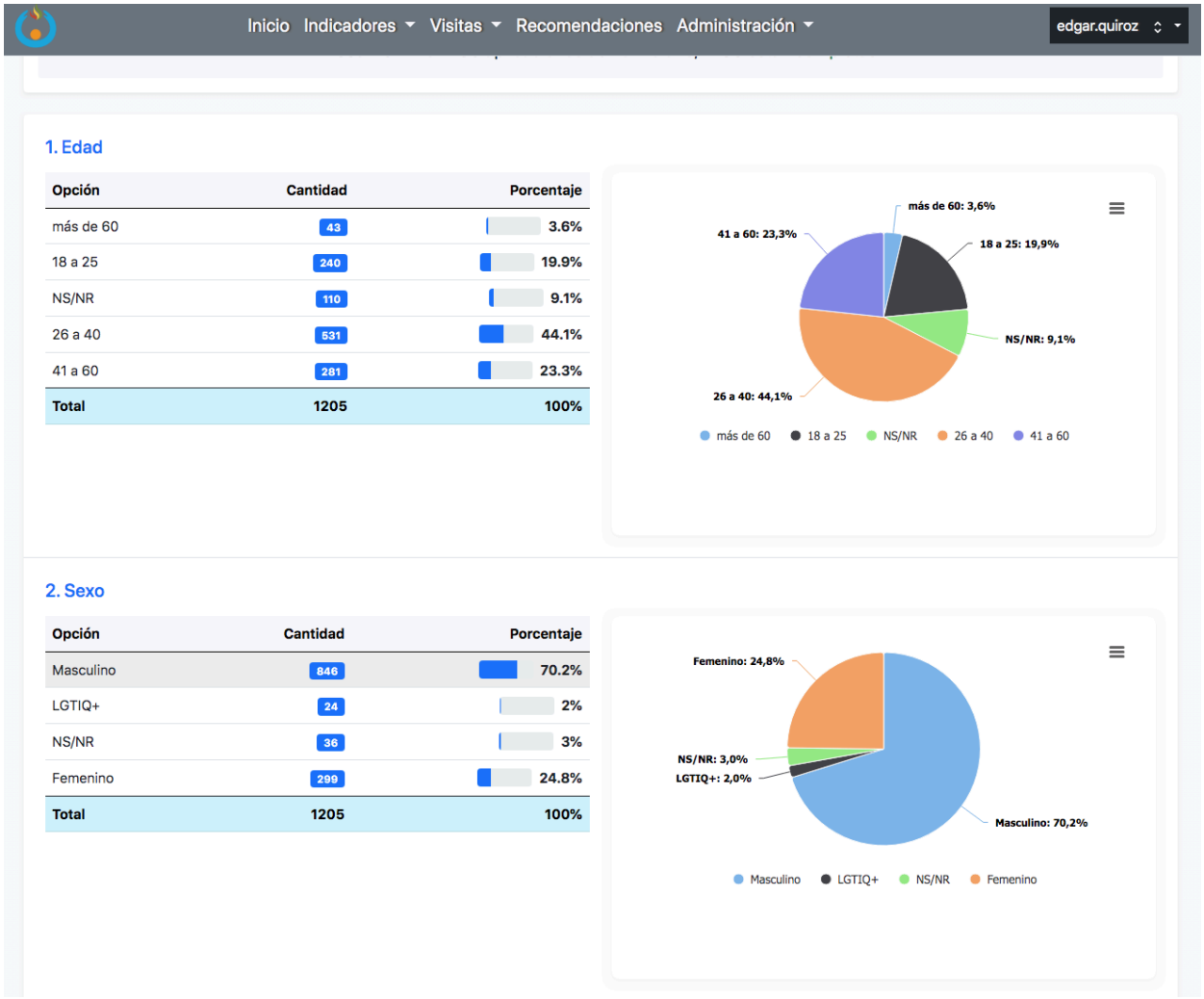
En la pantalla de inicio del sistema, se presenta un mapa de Bolivia con los 531 lugares de privación de libertad, desglosada por Departamento y lugar de privación de Libertad. Al costado izquierdo, con un click, se puede seleccionar el recinto de privación de libertad del cual se desea conocer los datos, ingresando a las visitas realizadas en dicho centro (donde se aplicaron instrumentos para recabar información) y observar el resultado de dicha visita, así como, el resultado general de todas las visitas.



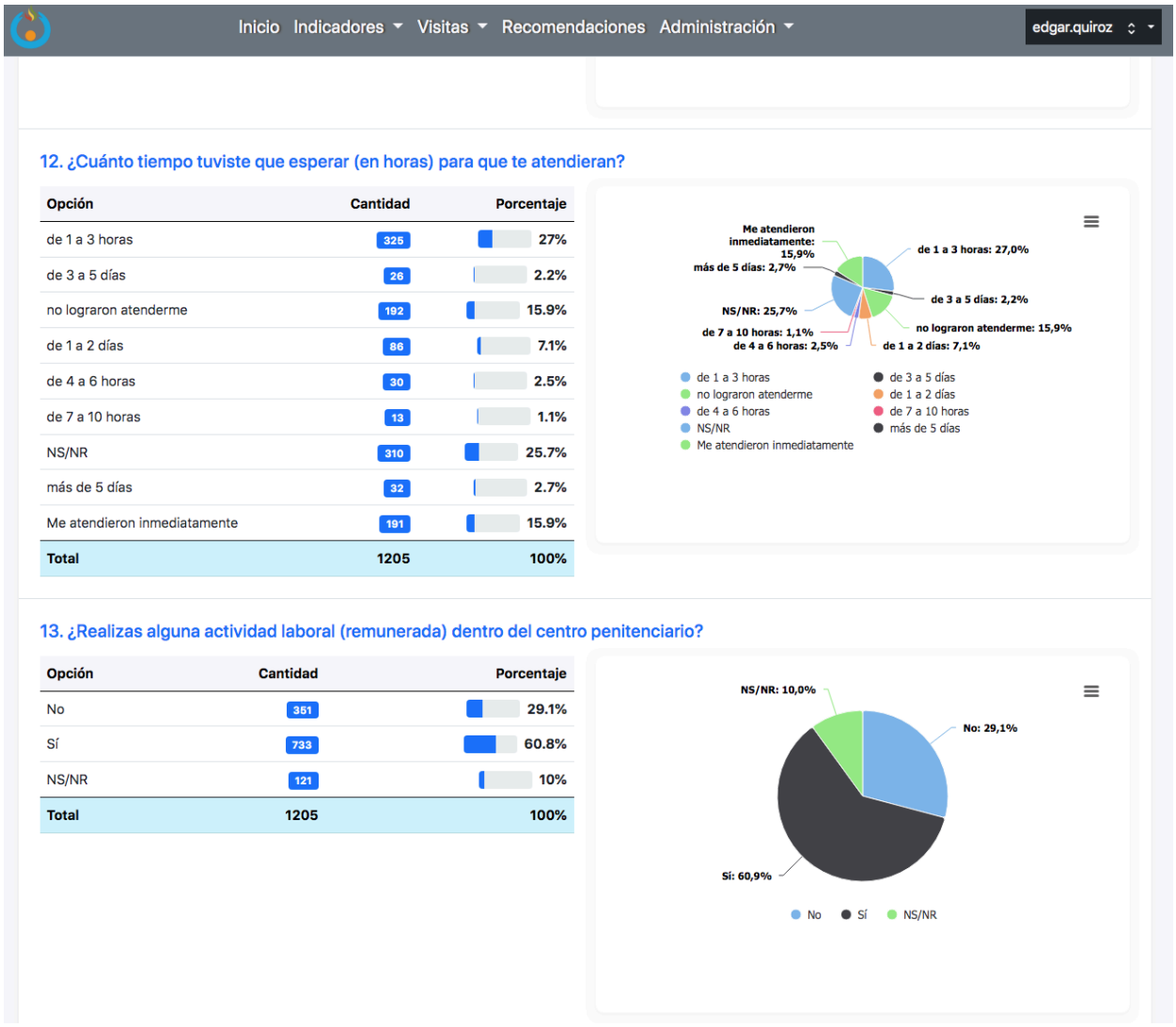
Eta imagen nos muestra, datos del Centro Penitenciario de Mocovi de la ciudad de Trinidad, el cual nos muestra información como: población que alberga, cantidad actual de intenos, dirección del recinto, nombre del resposable o autoridad a cargo (Director) y el año del incio de su funcionanmiento. Al costado derecho, con un click se puede ver el reglamento de dicho recinto, ademas, de la fachada de ingreso al penal.



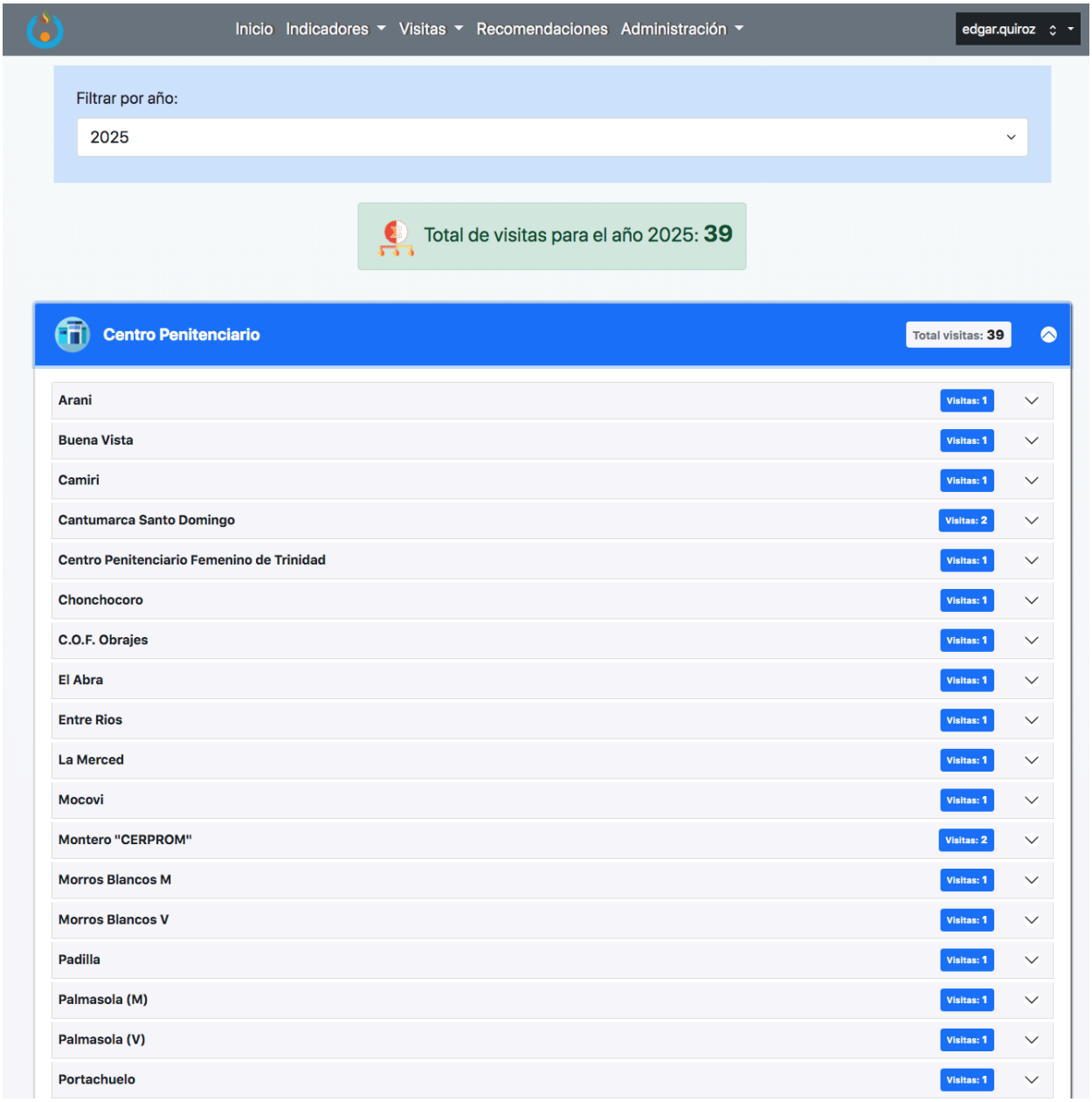
Posteriormente el sistema brinda información en relacion a la visita realizada y principalmente sobre los instrumentos de recolección aplicados y los resultados de estadisticos de dicha visita. En la imagen se puede obserbar, que se aplicaron 2 instrumentos, un cuestionario de 80 preguntas al Director del centro penitenciario, ademas, la encuesta a personas privadas de libertad de dicho centro, aplicandose a 64 internos. Haciendo un click, en el "reporte de la visita", nos otorga información de los resultados de la esa visita en particular, y haciendo un clik en "Reporte Genneral", nos otorga información de todas las entrevistas realizadas a los disntintos Directores, asi como tambien, el reporte general de todas la encuentas aplicadas a todos los internos en diefenrentes centros penitenciarios.



A continuación, se muestran imágenes de los datos que arroja el sistema del MNP con relación a las encuestas aplicadas a los internos en los diferentes centros penitenciarios visitados, en esta imagen se puede observar los daros con relación a las categorías de edad y sexo, donde, por ejemplo, los datos señalan que, de las 1205 encuestas aplicadas a los internos, 240 PPLs tiene el rango de edad de 18 a 25 representando un 19.9% de dicha población encuestada. Con relación a la categoría "sexo", el grafico nos señala que el 70.2 %, es decir, 846 internos encuestados son de sexo masculino.



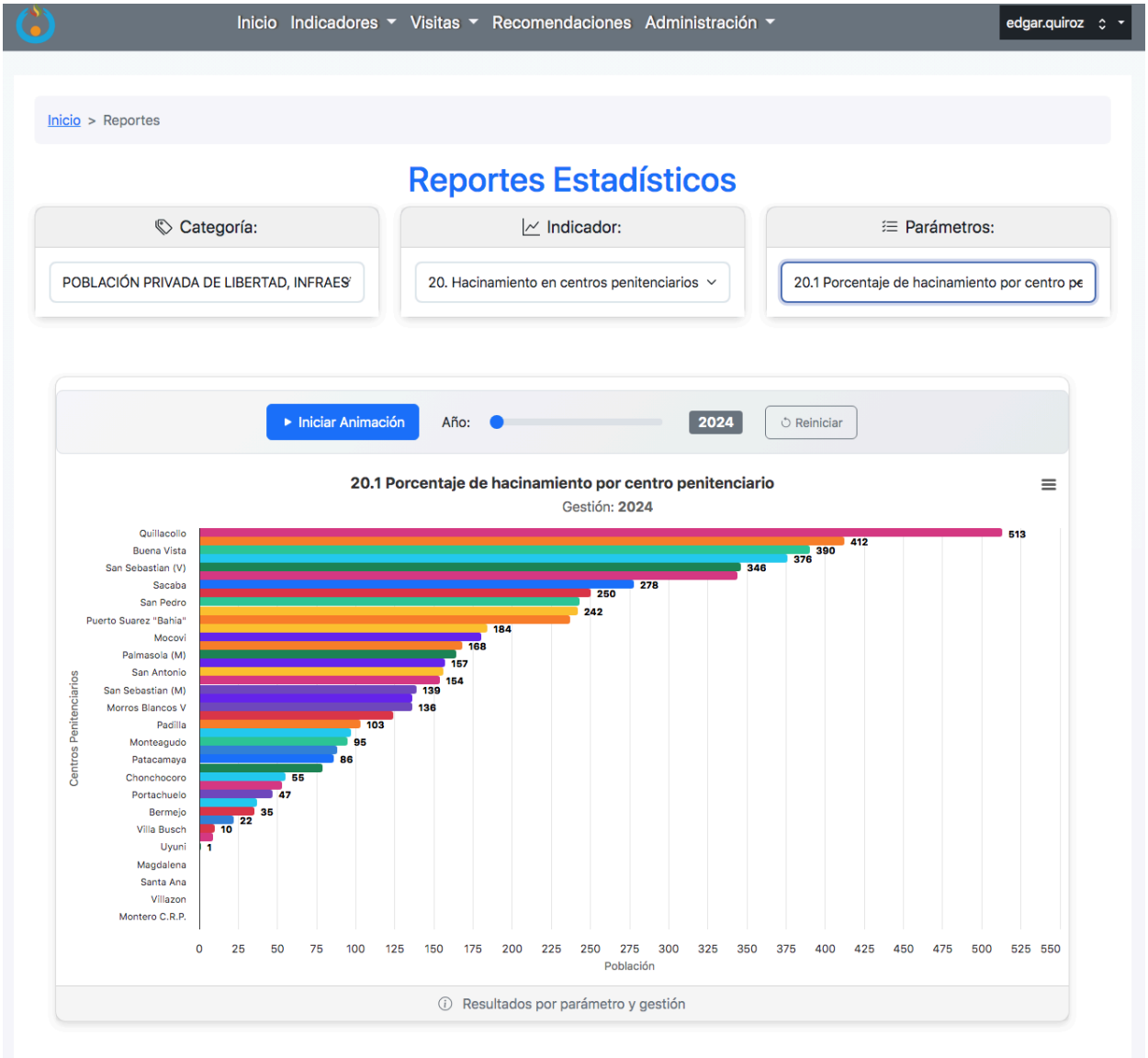
Finalmente (sobre las visitas) este grafico nos muestra los datos, porcentajes y gráficos de 2 preguntas de la encuesta aplicada a los internos de los recintos penitenciarios. En este caso, la consulta 12 mencionaba sobre la cantidad de tiempo que tuvo que esperar el interno para ser atendido por el área de salud del penal, observándose estos resultados: “no lograron atenderle” respondieron 192 internos correspondiendo a 15.9%, y como se observa en la imagen el sistema de apoya con un grafico que representa esos resultados.



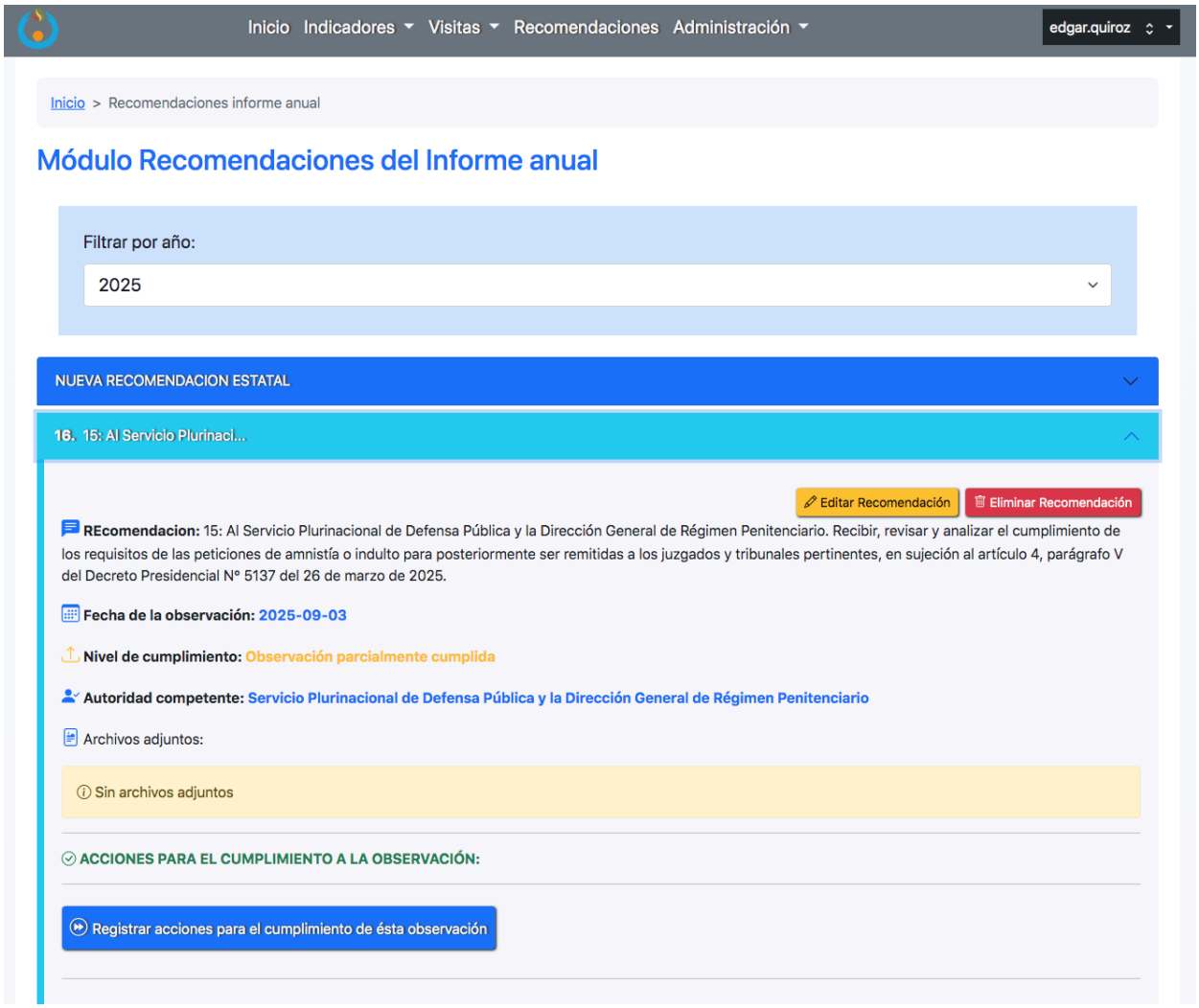
El sistema también nos ofrece un resumen de las visitas realizadas durante una gestión, en esta imagen se observa el total de visitas realizadas en el año, además, del lugar de privación en el cual se realizó la visita. Asimismo, haciendo clic en el centro que se ha visitado, nos otorga una información general de datos de dicho centro y el historial de visitas. De igual manera a lo mencionado en el inciso de “Inicio” nos otorga la información de los formularios de información aplicados, así como también, los resultados generales de todas las visitas. Finalmente, en este punto, en la pestaña “Formularios”, nos muestra los instrumentos utilizados para recabar información en los lugares de privación de libertad a ser visitados.



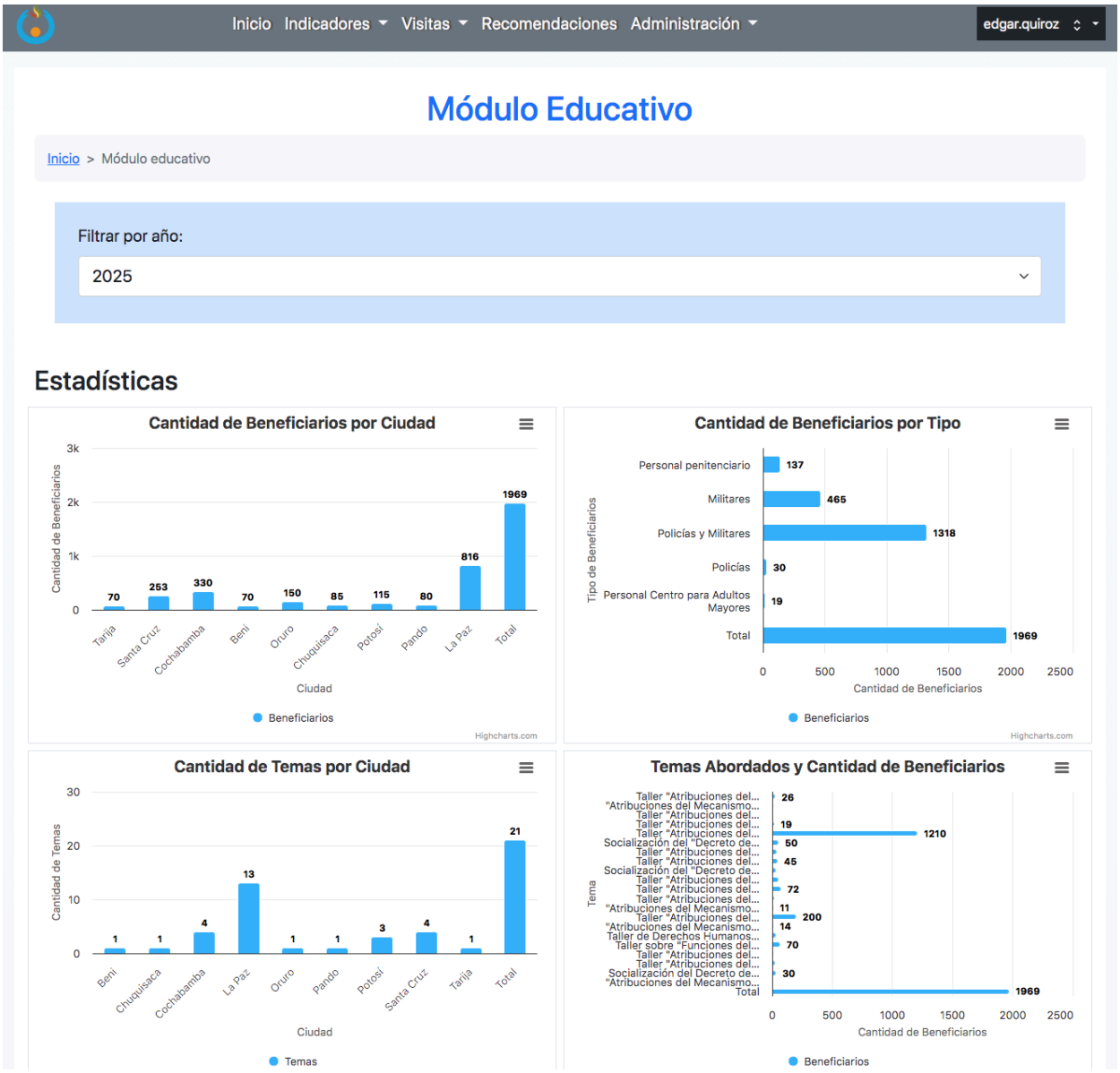
Con relación al módulo de "Indicadores", el panel de datos, nos muestra las 8 categorías y los 60 indicadores tomados en cuenta para alimentar el sistema informático del MNP. Haciendo "Click" en cada categoría, el sistema desglosa automáticamente los indicadores de ésta (la categoría), y mostrándonos, además, la información adicional de dicha categoría. Estos datos se pueden verificar por la gestión o año, asimismo, nos permite introducir nuevos datos, a partir de la información recaba tanto por requerimientos de información, como por los instrumentos aplicados en las visitas.



Finalmente, en este módulo de "Indicadores", el sistema nos otorga un reporte, principalmente en un gráfico, el cual es seleccionado a partir de la categoría, indicador y la pregunta específica. En este caso la imagen nos muestra un grafico del porcentaje de hacinamiento de los todos los recintos penitenciarios del país.



En cuanto al módulo de recomendaciones, se introducen las mismas emitidas a las diferentes instituciones en las cuales se les ha observado algunas deficiencias y/o dificultades, estas recomendaciones, son extractadas de los Informes Anuales publicados por el MNP – Bolivia, además, el sistema permite introducir el seguimiento realizado a estas recomendaciones, así como, adjuntar archivos que respalden este seguimiento.



Haciendo clic en la pestaña de Administración, el sistema desglosa las otras funciones que realiza el MNP de Bolivia, en este caso nos otorga información sobre el modulo Educativo, donde mediante gráficos nos señala información estadística sobre: la cantidad de beneficiarios de estas capacitaciones, desglosados por departamento. Además, cantidad de beneficiarios, por población, cantidad de temas por ciudad y cantidad de temáticas abordadas en los diferentes talleres.



Continuando en la pestaña de "administración", este también emite información general sobre los lugares de detención, es decir, la cantidad de lugares de privación de libertad por departamento, así como por establecimiento, siendo que el sistema del MNP Bolivia, en la actualidad, tiene reportado 531 lugares de detención entre centros penitenciarios, centros de acogimiento para poblaciones vulnerables, centros de formación policial y militar, celdas policiales, cuarteles, etc.

A continuación, se menciona los lugares de privación de libertad (centros penitenciarios urbanos y rurales) visitados por el MNP, dando cumplimiento a la ejecución del plan de preventivas 2025, que como se señaló en párrafos anteriores, alimentó el Sistema informático del MNP de dicha gestión.

N°	DEPARTAMENTO	C. PENITENCIARIO
1	Chuquisaca	San Roque (v)
2		San (M)
3		Padilla
4		Tarabuco
5	Oruro	San Pedro
6		La Merced

N°	DEPARTAMENTO	C. PENITENCIARIO
	La Paz	San Pedro
7		Obrajes
8		Chonchocoro
9		Qalahuma
10	Beni	Mocoví
11		Trinidad
12	Potosí	Cantumarca (v)
13		Cantumarca (m)
14		Uyuni
15		Tupiza
16		Uncía
17	Cochabamba	San Sebastián Varones
18		San Sebastián Mujeres
19		San Pablo Quillacollo
20		San Antonio
21		El Abra
22	Pando	Araní
23		Villa Busch (V y M)
24	Tarija	Morros Blancos (V)
25		Morros Blancos (M)
26		Entre Ríos
27		Yacuiba (V)
28		Yacuiba (M)
29		Palmasola (V)
30		Palmasola (M)
31	Santa Cruz	CERPROM
32		
33		Portachuelo
34		Buena Vista
35		Vallegrande
36		Camiri

Finalmente, es importante señalar en este punto, que, a partir de la introducción de datos al sistema, se realiza observaciones y modificaciones, con el propósito de mejorar la calidad de información que reporta el Sistema informático del MNP para la próxima gestión.

6.5. Cooperación internacional y redes regionales

El 31 de marzo de 2025 se suscribió un Acuerdo Marco de Colaboración entre el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP-Bolivia) del Estado Plurinacional de Bolivia[67]. El CNPT fue representado por su presidente, Juan Manuel Irrazábal, mientras que el MNP-Bolivia estuvo representado por Pedro Francisco Callisaya Aro, en su calidad de titular y Defensor del Pueblo. El acuerdo establece un marco general de cooperación basado en la buena fe entre ambas instituciones.

El objeto principal del acuerdo es promover la colaboración recíproca en el ámbito de sus competencias, especialmente en la promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Para ello, se prevé el intercambio de información, experiencias y la ejecución conjunta de actividades de monitoreo, investigación, capacitación y asistencia técnica, conforme a los estándares internacionales de las Naciones Unidas.

Las acciones concretas derivadas de este acuerdo serán desarrolladas mediante acuerdos específicos complementarios, en los que se definirán objetivos, modalidades, plazos y responsables de implementación. Asimismo, se designaron representantes de enlace para coordinar estas actividades: por el CNPT, su Secretario Ejecutivo; y por el MNP, el Jefe de Unidad. Las obligaciones particulares de cada parte se establecerán en dichos instrumentos complementarios.

El acuerdo tiene una duración de dos años, con renovación automática, y puede ser rescindido por cualquiera de las partes con un preaviso de 15 días, sin generar obligaciones indemnizatorias. No implica compromisos financieros y respeta la autonomía institucional de cada parte, permitiendo la suscripción de acuerdos similares con otras entidades. Asimismo, cualquier publicación deberá ser autorizada por el CNPT conforme a la normativa argentina, y los aspectos no previstos o eventuales modificaciones serán resueltos mediante adendas o acuerdos escritos de mutuo consentimiento.

67 Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. (2025, 31 de marzo). Acuerdo Marco de Colaboración entre el CNPT y el MNP-Bolivia. Estado Plurinacional de Bolivia.




MNP
Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

MNP
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Todas y todos somos
Defensores del Pueblo


MNP
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
DIVISION LUCHA
TRATA Y TRÁFICO
MNP
Mecanismo Nacional
Prevención de la Tortu


Yeikea Tetä mbutua
Entrance Hall
Entrada Sala Principal
NAMBOL

VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Defensoría del Pueblo en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención, llega a las siguientes conclusiones de su labor durante la gestión 2025:

1. **Crisis Estructural y Hacinamiento Crítico**: El sistema penitenciario boliviano atraviesa una crisis caracterizada por un hacinamiento generalizado y extremo, que obliga a las personas privadas de libertad (PPL) a pernoctar en pasillos, baños y áreas comunes. Esta situación, sumada al colapso de la infraestructura sanitaria (pozos sépticos inundados y falta de agua), configura un trato cruel, inhumano y degradante generalizado en los recintos del país.
2. **Emergencia Alimentaria y Salud Deficiente**: Existe una violación sistemática del derecho a la alimentación debido al retraso de entre 3 y 6 meses en el pago de los "pre diarios" por parte de las gobernaciones, lo que traslada la carga de la supervivencia a las familias. En cuanto a la salud, el sistema está colapsado: solo hay 86 profesionales de salud para atender a más de 33,000 internos, lo que deriva en que el 90% de las muertes en custodia sean por enfermedades prevenibles.
3. **Vulneración Agravada y Discriminación de Género**: Las mujeres privadas de libertad enfrentan una discriminación institucionalizada; el 96% de ellas no recibe insumos de gestión menstrual por parte del Estado, lo que se considera una forma específica de maltrato por razón de género. Además, la Ley N° 1008 (suministro, tráfico y transporte de sustancias controladas) continúa siendo la principal causa de encarcelamiento femenino (casi un 50%), afectando a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico sin una aplicación adecuada de la perspectiva de género en la justicia.
4. **Abandono Estatal en Áreas Rurales y Fronterizas**: Se evidencia una brecha crítica de derechos entre las capitales y las zonas rurales. En las centros penitenciarios provinciales y puestos fronterizos (policiales y militares), la ausencia de personal médico, legal y policial es casi total. En algunos cuarteles, las condiciones son infrahumanas, con baños sin puertas o servicios higiénicos inexistentes, vulnerando la dignidad de los conscriptos.
5. **Fracaso del Modelo de Reinserción y Abuso de la Prisión Preventiva**: El sistema boliviano funciona primordialmente como un depósito de personas: el 37.5% de los encuestados se encuentra bajo detención preventiva (cifra que

según registros oficiales es de 53.91%), vulnerando la presunción de inocencia. Asimismo, las políticas de reinserción han fracasado; el acceso a educación y trabajo es mayoritariamente informal, precario y autogestionado por los propios internos, sin apoyo estatal real.

6. **Maltrato Institucional a Niños y Adolescentes**: En los centros de reintegración social para adolescentes, se han detectado prácticas ilegales como el uso de celdas de aislamiento improvisadas bajo las gradas y la reducción de raciones alimenticias por falta de presupuesto. En los centros de acogida de NNA, persiste la negligencia en el mantenimiento básico (vidrios rotos, falta de agua) y la falta de personal especializado.
7. **Obstáculos en la Gestión Interinstitucional**: El MNP identifica una falta de coordinación y voluntad política de diversas autoridades. Existe una resistencia institucional a cumplir recomendaciones, destacando el incumplimiento total del Tribunal Supremo de Justicia y la falta de respuesta de ocho de las nueve gobernaciones departamentales ante los requerimientos del Mecanismo. Esta fragmentación estatal impide la construcción de un estándar nacional único de protección de derechos humanos.

7.1. Tabla de Recomendaciones realizadas en los informes 2022 – 2024 del Mecanismo Nacional de Prevención

A continuación, se presenta una tabla sistematizada con las recomendaciones emitidas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP-Bolivia) en sus informes anuales de **2022, 2023 y 2024**, organizadas por la institución a la que fueron dirigidas:

INSTITUCIÓN	INFORME 2022	INFORME 2023	INFORME 2024
Ministerio de Gobierno	▪ Suscribir convenio para el proyecto de registro penitenciario (fondos OPCAT). ▪ Acciones para el cierre del penal de San Pedro y construcción del Complejo Penitenciario La Paz.	▪ Elaborar un plan progresivo para el cierre de San Pedro y ejecución del Complejo Penitenciario.	

INSTITUCIÓN	INFORME 2022	INFORME 2023	INFORME 2024
Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP)	▪ Ejecutar proyecto de registro penitenciario. ▪ Incluir cierre de San Pedro en POA 2024. ▪ Relevar información sobre infraestructura penitenciaria. ▪ Informe sobre salud y muertes en custodia. ▪ Revisión médica al ingreso y sesiones de Consejos Penitenciarios. ▪ Acciones para población vulnerable y formación en prevención de tortura.	▪ Propuesta de mejora en salud y análisis de incidencia en muertes. ▪ Supervisar la revisión médica obligatoria al ingreso.	▪ Mejoras en infraestructura de celdas de castigo usando mano de obra de internos. ▪ Revisión médica periódica en celdas de aislamiento. ▪Resoluciones fundamentadas y límite de 60 días para aislamiento. ▪ Formación especializada del personal en prevención de tortura.
Direcciones Departamentales de Régimen Penitenciario	▪ **La Paz**: Mejoras Sector E2 Chonchocoro. ▪ **Santa Cruz**: Seguridad y mantenimiento en Palmasola. ▪ **Oruro**: Cámaras y ambulancia en La Merced. ▪ **Beni**: Mantenimiento y ambulancia en Mocoví. ▪ **Chuquisaca**: Ampliación y psiquiatra en San Roque. ▪ **Potosí**: Personal de salud en Cantumarca.	▪ Requerir el personal de seguridad necesario para los centros según urgencia.	
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)	▪ Incrementar jornadas de descongestionamiento. ▪ Formación en Protocolos de Estambul y Minnesota para jueces.		▪ Circular para revisar medidas socioeducativas en CRS cada 6 meses e inspecciones periódicas.
Fiscalía General del Estado	▪ Incrementar participación en descongestionamiento. ▪ Formación en Protocolos de Estambul y Minnesota para fiscales. ▪ Evaluar Instructivo 176/2017.	▪ Actualizar Instructivo 176/2017 según nuevos estándares y reportar casos aplicados.	

INSTITUCIÓN	INFORME 2022	INFORME 2023	INFORME 2024
Comando Gral. de la Policía Boliviana	▪ Aplicar salvaguardas legales fundamentales al arresto. ▪ Fortalecer prevención de tortura en planes de formación policial.	▪ Incorporar temática de prevención de tortura en currículo de institutos de formación.	▪ Informar derechos y salvaguardias en celdas mediante banners visibles.
Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD)		▪ **Varios**: Garantizar pago puntual de prediarios. ▪ **Pando**: Equipo multidisciplinario en CRS Villa Rojas. ▪ **Tarija**: Presupuesto para mejoras en centro "Nueva Esperanza".	▪ Educación sexual integral en CRS. ▪ Personal especializado en CRS. ▪ Reorganizar centros de acogida por edad y supervisión periódica. ▪ Internet en CRS (Cochabamba/Pando) y médico en CRS mujeres (Potosí).
Ministerio de Salud y Deportes	▪ Mejorar servicios de salud y cobertura ambulatoria en celdas policiales.	▪ Factibilidad de incorporar sanidad penitenciaria al Sistema Nacional de Salud.	
FF.AA. / Min. de Defensa	▪ Incorporar prevención de tortura en formación militar (Min. Defensa).	▪ Formación en DDHH para el Ejército y propuesta curricular preventiva (Comando FF.AA.).	
Otras Entidades	▪ **Min. Justicia**: Lineamientos para indulto y amnistía. ▪ **Consejo de la Magistratura**: Estudio técnico sobre detención preventiva.		▪ **Asamblea Legislativa**: Continuar tratamiento de Ley Integral contra la Tortura. ▪ **SEPDEP**: Revisión de requisitos para amnistía o indulto.

Al analizar las recomendaciones de los informes 2022, 2023 y 2024, se identifican patrones específicos y fallas estructurales que el Estado boliviano no ha logrado resolver, repitiéndose sistemáticamente las mismas solicitudes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP):

1. El Incumplimiento Crónico de los Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD)

Un patrón alarmante es la falta de respuesta y desatención de las gobernaciones hacia las recomendaciones del MNP.

- Seguridad Alimentaria: En todos los periodos analizados, se repite la recomendación de garantizar el pago puntual de los "pre diarios". Se observa un incumplimiento persistente, donde los retrasos oscilan entre 3 y 6 meses.

- Abandono de Centros de Reintegración Social (CRS): La falta de equipos multidisciplinarios (psicólogos, médicos, trabajadores sociales) es una recomendación que se repite para estos centros, evidenciándose además que los adolescentes en conflicto con la ley carecen de atención integral permanente.

2. Resistencia Institucional del Órgano Judicial

Existe un patrón de resistencia a la fiscalización por parte de las máximas instancias judiciales.

- Falta de respuesta del TSJ: El Tribunal Supremo de Justicia aparece reiteradamente como una de las instituciones que ignora o no se pronuncia sobre las recomendaciones, especialmente aquellas referidas a la revisión de medidas socioeducativas para adolescentes y la supervisión de condiciones de detención.
- Descongestionamiento insuficiente: Aunque se han realizado jornadas, el patrón muestra que el uso abusivo de la detención preventiva sigue siendo la causa principal del hacinamiento, con más del 60% de la población penal sin sentencia en diversas gestiones.

3. Precariedad Sanitaria y Falta de Protocolos Médicos

La salud es una vulnerabilidad que se repite en cada informe como una "emergencia sanitaria".

- Ausencia de valoración médica al ingreso: Una recomendación constante hacia la DGRP y la Policía es la realización obligatoria de exámenes médicos al ingreso para documentar torturas. El patrón muestra que, en los centros penitenciarios provinciales y celdas policiales rurales, este protocolo es casi inexistente o esporádico.
- Falta de especialidades: Se repite la necesidad de psiquiatras en diversas cárceles del país, y pediatras para los niños que viven en cárceles, sin que el Ministerio de Salud haya logrado integrar efectivamente la sanidad penitenciaria al sistema nacional.

4. Obsolescencia de la Infraestructura y Permanencia solitaria en celda individual (Celdas de Castigo)

El sistema mantiene infraestructuras del siglo XIX o improvisadas que generan tratos degradantes.

- El caso San Pedro (La Paz): Desde el informe 2022 hasta el borrador 2025, persiste la recomendación de ejecutar el cierre del penal de San Pedro y construir el Complejo Penitenciario de La Paz. Aunque hay avances administrativos, el plan progresivo de cierre sigue sin materializarse.
- Condiciones inhumanas en aislamiento: Se repite el patrón de "celdas de castigo" que carecen de luz, ventilación, camas y servicios higiénicos, funcionando a menudo como espacios de extorsión o ambientación forzada.

5. Vacíos en la Formación Especializada (Protocolos Internacionales)

A pesar de las capacitaciones aisladas, existe un patrón de falta de institucionalización de la prevención de la tortura en los currículos educativos.

- Protocolos de Estambul y Minnesota: Se repite anualmente la recomendación de formar a jueces, fiscales y médicos del IDIF en estos protocolos. El patrón indica que se incorporan como "módulos cortos" o talleres externos, pero no como parte de la formación regular obligatoria, lo que perpetúa la impunidad en casos de tortura.
- Salvaguardas Policiales: La Policía Boliviana recibe constantemente la recomendación de informar sobre derechos y salvaguardas al momento del arresto, pero las encuestas reflejan que un alto porcentaje de detenidos sigue sin ser informado de sus derechos oportunamente.

7..2. Recomendaciones específicas dirigidas a los Órganos del Estado y Entidades Territoriales Autónomas resultado del informe 2025

A continuación, se presentan las recomendaciones emitidas a las distintas entidades del Estado, organizadas por problemática estructural identificada durante las visitas de monitoreo.

HACINAMIENTO PENITENCIARIO

1. Al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo de la Magistratura:

Incrementar el número de jornadas de descongestionamiento en los centros penitenciarios del país, con el propósito de disminuir el índice de hacinamiento, conforme a la normativa vigente, en cumplimiento de la Ley Nº 1173 de Abreviación Procesal Penal.

2. Al Ministerio Público:

Emitir un instructivo que establezca la aplicación del principio de excepcionalidad de la detención preventiva, priorizando la aplicación de medidas cautelares menos lesivas, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

3. Al Órgano Ejecutivo:

Aprobar el proyecto de ley sobre Amnistía e Indulto elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, como una alternativa concreta para reducir el hacinamiento, en base a lo establecido en la normativa vigente.

PRE DIARIOS Y ALIMENTACIÓN DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

4. Al Órgano Ejecutivo:

Abrogar el **Decreto Supremo N° 1854**, promulgado el 24 de diciembre de 2013, que establece el pago de los pre diarios destinados a la alimentación de las personas privadas de libertad por parte de los Gobiernos Autónomos

Departamentales, con el propósito de que esta responsabilidad fundamental retorne al Gobierno Central, en base a la Constitución Política del Estado.

5. A la Dirección General de Régimen Penitenciario:

Garantizar el pago puntual y completo de los pre diarios para la alimentación de todas las personas privadas de libertad en cada uno de los centros penitenciarios del país. Esta acción deberá ejecutarse en coordinación con los Gobiernos Autónomos Departamentales y el Ministerio de Finanzas, conforme a la normativa vigente (Articulo 27. Alimentación de la Ley 2298 Ley de Ejecución penal y supervisión de 20 de diciembre de 2021).

ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (NNA) EN CENTROS DE ACOGIMIENTO

6. Al Tribunal Supremo de Justicia (Seguimiento a Centros de Reintegración Social): (reiterativa)

Emitir una circular dirigida a Juezas y Jueces en materia de Niñez y Adolescencia, en cumplimiento del artículo 38, numeral 14 de la Ley N° 025 del Órgano Judicial y del artículo 346, incisos c) y e) de la Ley N° 548, Código Niña, Niño y Adolescente, para que se disponga:

a) La revisión y evaluación semestral de las medidas socioeducativas impuestas a los adolescentes privados de libertad.

b) La realización de inspecciones periódicas a estos centros para supervisar su situación y condiciones de vida, sociales y jurídicas.

7. A los Gobiernos Autónomos Departamentales: (reiterativa)
Dar estricto cumplimiento a la Ley N° 548, Código Niña, Niño y Adolescente, en los siguientes puntos:

a) Educación Sexual Integral: Promover procesos de sensibilización sobre esta temática para las y los adolescentes en los Centros de Reintegración Social (artículo 334, inciso a).

b) Personal Especializado: Garantizar que el personal de los Centros de Reintegración Social cuente con especialización en la temática de adolescentes en conflicto con la ley penal (artículo 182, inciso d; artículos 335 y 336).

c) Celdas o ambientes de castigo: Eliminar cualquier ambiente y/o celda de castigo en los Centros de Reintegración Social para adolescentes en conflicto con la ley penal, en base al artículo 338, numeral II inciso b), de la Ley 548 Código, niño, niña y Adolescente.

d) Acceso a Internet: Dotar de este servicio a los Centros de Reintegración Social de Cochabamba y Pando para promover actividades académicas (artículo 80, núm. 1, inciso a de la Ley N° 070 de Educación y artículo 334, inciso a de la Ley N° 548).

e) Separación por Edad: Reorganizar los centros de acogimiento, separando a los NNA por grupos etarios para prevenir hechos de violencia y malos tratos (artículo 182, incisos b y m; artículo 183, inciso n).

f) Supervisión Periódica: Realizar controles sin previo aviso de las instalaciones, el personal, la alimentación, los servicios básicos, la educación, la recreación, la situación jurídica y las visitas en los centros públicos (artículo 182, incisos d y h).

CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE EN RECINTOS PENITENCIARIOS, POLICIALES Y MILITARES

8. A la Dirección General de Régimen Penitenciario (Infraestructura y Ambiente):

a) Ejecutar, mediante trabajo centralizado y con mano de obra voluntaria de las personas privadas de libertad, mejoras en la infraestructura de las denominadas "áreas de contención o permanencia solitaria en celda individual" (celdas de castigo), en aplicación del Decreto Supremo N° 5251 y el artículo 183, numeral 1 de la Ley N° 2298 de Ejecución Penal. (reiterar)

b) Elaborar un plan de análisis de soluciones a los problemas ambientales (pozos sépticos, aguas servidas, basura, etc.) que afectan a los centros penitenciarios, en coordinación con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, en concordancia con el artículo 48 numeral 11) de la Ley 2298, Ley de Ejecución Penal y Supervisión del 20 de diciembre de 2001.

c) Elaborar un plan de atención a las necesidades de mantenimiento de las instalaciones carcelarias (internas y externas) en base a los artículos 85 y 86 de la Ley 2298, Ley de Ejecución Penal y Supervisión del 20 de diciembre de 2001, en coordinación con los GAD, GAM y la sociedad civil, en cumplimiento al artículo 48 numeral 11) de la Ley 2298, Ley de Ejecución Penal y Supervisión del 20 de diciembre de 2001.

9. A la Policía Boliviana:

Elaborar un plan de mantenimiento y refacción de la infraestructura de las celdas policiales a nivel nacional, principalmente aquellas que se encuentran en zonas fronterizas, en coordinación con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, en aplicación de la normativa vigente.

10. A las Fuerzas Armadas:

Elaborar un plan de mantenimiento y refacción de la infraestructura de los cuarteles militares, con prioridad en aquellas instalaciones ubicadas en zonas fronterizas, en aplicación de la normativa vigente.

ATENCIÓN A POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y GARANTÍA DE DERECHOS ESPECÍFICOS

11. A la Dirección General de Régimen Penitenciario:

a) **Mujeres Privadas de Libertad (Perspectiva de Género):** Elaborar un plan que atienda sus necesidades específicas, contemplando ambientes exclusivos para mujeres y sus hijos acompañantes, dotación de material de aseo e higiene (tanto para las internas como sus hijos) y una oferta igualitaria de actividades laborales, capacitación académica y educación formal, en aplicación al artículo 84 de la Ley 2298, Ley de Ejecución Penal y Supervisión del 20 de diciembre de 2001. Su implementación debe ser coordinada con los GAD, GAM y la sociedad civil, en concordancia con el artículo 48 de la Ley 2298, Ley de Ejecución Penal y Supervisión del 20 de diciembre de 2001.

b) **Equipo Multidisciplinario:** Garantizar la contratación y permanencia de equipos multidisciplinarios (abogado/a, médico/a, psicólogo/a y trabajador/a social) en los centros penitenciarios para brindar atención integral a las personas privadas de libertad. Asimismo, asegurar su atención trimestral de estos equipos de profesionales multidisciplinarios, en los centros penitenciarios provinciales (carceletas) en cumplimiento al TITULO III Establecimientos Penitenciarios, CAPITULO II Servicios Penitenciarios, de la Ley 2298 Ley de Ejecución Penal y Supervisión de 20 de diciembre de 2001.

c) **Atención Médica:** En cumplimiento de los artículos 89 al 96 de la Ley N° 2298, Ley de Ejecución Penal y Supervisión de 20 de diciembre de 2001, se recomienda emitir un instructivo que regule horarios, derivaciones y tiempos de respuesta según gravedad; Asimismo, implementar un registro digital único y auditable de la atención medica permanente, verificando todo ello mediante normativa publicada, reportes mensuales y revisiones trimestrales.

d) **Protocolo de Visitas Diferenciado:** Elaborar un protocolo que regule y estandarice los procedimientos de ingreso de familiares a los centros penitenciarios del país, diferenciando en este instrumento (protocolo) las características de mujeres, niñas, niños, adolescentes y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 numeral 5) y 107 de la Ley 2298, Ley de Ejecución Penal y supervisión del 20 de diciembre de 2001.

12. Al Órgano Judicial – Tribunal Supremo de Justicia (Cercanía Familiar):

Para preservar el vínculo familiar y social, y en concordancia con la Regla 60 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidad para el tratamiento de los Reclusos (reglas Mandela) así como el artículo 37 de la Ley N. 2298 Ley de Ejecución Penal y Supervisión del 20 de diciembre de 2001, se recomienda garantizar el cumplimiento de la pena en un centro penitenciarios más cercano a su domicilio, incorporando en el sistema judicial el registro obligatorio del domicilio del condenado y la disponibilidad de centros; y presentar informes trimestrales

detallados, verificando su aplicación con las adecuaciones al sistema, normativa publicada, control de plazos y estadísticas por jurisdicción.

REINSERCIÓN SOCIAL E INVESTIGACIÓN DE TORTURA

13. A la Dirección General de Régimen Penitenciario (Cárceles Productivas):

En aplicación del Capítulo II "Trabajo Penitenciario" del Título VII Tratamiento Penitenciario de la Ley N° 2298, se recomienda mantener un registro centralizado, actualizado y detallado de las Personas Privadas de Libertad en las distintas modalidades de trabajo; formalizar un convenio por establecimiento con condiciones dignas y remuneración justa; comprobando avances con informes técnicos, convenios vigentes y reportes semestrales de cumplimiento.

14. A la Fiscalía General del Estado (Protocolos de Estambul y Minnesota):

En cumplimiento a la Ley Orgánica del Ministerio Publico Ley N.º 260 del 11 de julio de 2012, en sus artículos 3, incisos 3 y 11; articulo 15 y articulo 49, se recomienda, para investigaciones en casos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia por parte de los profesionales de Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), realizar y/o actualizar los manuales periciales ("Protocolos de Estambul y Protocolo de Minnesota"); asimismo, emitir un instructivo donde se establezcan plazos máximos para informes preliminares y finales según tipo de caso; implementar sistema de seguimiento de cada solicitud; y realizar auditorías semestrales al menos al 15% de los informes, comprobando su cumplimiento con registros de manuales actualizados, control de tiempos y resultados de revisión.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

DELEGACIONES DEFENSORIALES DEPARTAMENTALES Y UNIDADES DE COORDINACIÓN REGIONALES

OFICINA NACIONAL

Calle Colombia N° 440, Zona San Pedro - La Paz | (2) 2113600 - (2) 2112600 | 72006607 | Casilla 791

LA PAZ

Edificio Lotería Nacional de Bolivia, quinto piso, Av. Mariscal Santa Cruz Nro. 525, esquina calle Cochabamba
(2) 2113588 | 670 07644

EL ALTO

Av. Juan Pablo II N° 75 (Altura Cruz Papal)
(2) 2153264
(2) 2153179
(2) 2152352
720 39523

DESAGUADERO

Av. La Paz Esq. Calle Ballivián S/N (Ex local Sulpacha)
71536984

YUNGAS - CARANAVI

Calle Tocopilla Nro. 4-B, Edificio COSAPAC, Piso 1, Zona Central
(2) 8243934 | 720 85410

PANDO

Calle Cochabamba N° 86, detrás del templo de Nuestra Señora del Pilar
(3) 842 3888 | 711 12900

BENI

Calle Félix Pinto Saucedo N° 68, entre Nicolás Suárez y 18 de Noviembre
(3) 34652200
(3) 4652401
71133372

RIBERALTA

Av. Plácido Méndez Nro. 948 edificio Hotel Campos, entre Placido Olaya y Cosme Gutiérrez, Zona Barrio Arroyito
73993148 | 73993128

SANTA CRUZ

Calle Andrés Ibáñez N° 241, entre 21 de Mayo y España
(3) 3111695
(3) 338808
72137404

PUERTO SUÁREZ

Av. 6 de Agosto N° 29 entre La Paz y Santa Cruz (media cuadra Plaza 10 de Noviembre)
67290016 | 73999959

CHUQUISACA - SUCRE

Calle J.J. Pérez N° 602 Esquina Trinidad, Zona San Roque
(4) 6916115
(4) 6918054
(4) 6913241
71162444

MONTEAGUDO

Barrio Paraíso, Avenida Costanera, Sin Número
(4) 6473352 | 71280641

COCHABAMBA

Calle 16 de Julio N° 680, Plazuela Constitución
(4) 4140745
(4) 4140751
717 26434

CHAPARE

Calle Hans Grether N° 10, Villa Tunari
(4) 4136334 | 71725479

ORURO

Calle Soria Galvarro N° 5212 entre León y Tupiza (Plaza de la Ranchería)
(2) 5112471
(2) 5112927
71843822

PISIGA

Calle 13 s/n, Edif. Sub Alcaldía de Pisiga Bolívar planta baja, frente a la Plaza Principal
715 28393

POTOSÍ

Av. Serrudo N° 143 casi esquina Arce, Edificio Renovación (interior)
(2) 6248047 - (2) 6120805 - (2) 6124744 | 71549857

LLALLAGUA

Calle Oruro N° 33 entre Bolívar y Cochabamba
(2) 5821538 | 71557895

VILLAZÓN

Zona Central Calle Potosí, Nro. 405, Casi Esquina Cotagaita
71535573

TARIJA

Calle Ingavi N° 789 Esq. Ramón Rojas, El Molino
(4) 6116444
(4) 6112441
71567109

YACUIBA

Juan XXIII S/N, entre Cornelio Ríos y Martín Barroso
(4) 682 7166 | 73360448

Descarga el material escaneando el código QR

LÍNEA GRATUITA 800 10 8004

www.defensoria.gob.bo
@DPBoliviaOf

Todas y todos somos Defensores del Pueblo

ACREDITAT ESTATUS "A": GANHRI Global Alliance of National Human Rights Institutions

CERTIFICADA: NB/ISO 9001 IBNORCA